BIBLIOTECA DIGITAL
DEL SOCIALISMO CHILENO

DIÁLECTICA DE UNA DERROTA II

CARLOS ALTAMIRANO ORREGO

SIGLO XXI EDITORES,SA
MEXICO 1978

6. LA DEMOCRACIA CRISTIANA: PROBLEMA DE AYER Y DE HOY

Una precisión indispensable
Esencia y apariencia de la DC
La Dc y el gobierno de Allende
El diálogo imposible
La DC: alternativa al movimiento popular

7. PODER POPULAR: EXIGENCIA DE LAS MASAS

La generación del nuevo poder
Objetivo único: el poder

8. EL «IZQUIERDISMO» EN LA EXPERIENCIA CHILENA

9. ESTADOS UNIDOS Y EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO

Chile: un modelo no previsto
El Gobierno Popular frente a Estados Unidos
Agresión: respuesta norteamericana
Ford, el cinismo y la CIA
Autopsia de la descomposición

10. FUERZAS ARMADAS: LA MÁS SERIA INSUFICIENCIA

Mito y realidades
El Gobierno Popular y las Fuerzas Armadas
Ausencia de una política militar

11. LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS EN LA TRANSICIÓN AL SOCIALISMO

La estructura económica heredada: obstáculo al desarrollo
La coyuntura internacional: dificultades imprevistas
La agresión burguesa-imperialista
Los errores de la política económica

6.- LA DEMOCRACIA CRISTIANA: PROBLEMA DE AYER Y DE HOY

UNA PRECISIÓN INDISPENSABLE

En torno a la Democracia Cristiana se ha generado un debate trascendente. Durante el gobierno de la UP, la posibilidad de articular con ella un entendimiento básico, abrió hondas divergencias entre los distintos sectores del movimiento popular. El problema vuelve a reformularse hoy como una cuestión de importancia medular, frente a la urgencia de despejar las opciones tácticas y estratégicas planteadas por la lucha contra la tiranía.

La DC asume en Chile una representatividad social y política considerable, trasunto del peso específico de las capas medias en un país al que se le atribuía un carácter esencialmente mesocrático.(1)

En la búsqueda de las causas originarias de la derrota, se sostiene que la suerte del proceso estuvo sellada por la incapacidad de la dirección revolucionaria para lograr una alianza con la DC. Dicha alianza, al dar una mayor base de legitimidad al gobierno, habría imposibilitado el supuesto aislamiento de la clase obrera, impedido el reagrupamiento de la burguesía en torno a su fracción oligárquico-monopólica, y finalmente, habría consolidado la gravitación del sector constitucionalista en las Fuerzas Armadas.

Tras esta aseveración se construye un cuadro argumental aparentemente sólido.

El gobierno empieza por malbaratar la posibilidad de utilizar la división de la burguesía, sobreviniente a su triunfo. Avanzado el proceso, y cuando su dinámica lo hacía peligrosamente vulnerable, se obstruyó la perspectiva de un acuerdo, que sin afectar al núcleo de la experiencia revolucionaria, la afianzaba, obstaculizando el desarrollo de la estrategia insurreccional montada por el imperialismo.

La argumentación en torno al fracaso de esta alternativa «salvadora» se ha orientado a establecer la responsabilidad que en ella habría cabido al Partido Socialista.

Esta apreciación conlleva una no escasa dosis de mala fe, cuando no una inexcusable ligereza en el análisis de los acontecimientos históricos.

Efectivamente, en las distintas oportunidades, cuando se planteó la posibilidad de un entendimiento con la DC en torno a algunos problemas puntuales, el PS expresó un criterio adverso. Nunca creímos en tal alternativa. Nuestro escepticismo arrancaba de una posición profundamente realista, basada en los supuestos ideológicos y sociales que presidían el accionar demócrata cristiano. Sin embargo, formulada nuestra disensión, aceptamos democráticamente el criterio de la mayoría y no existió un solo acto nuestro orientado a obstruir el diálogo.

Nos parece importante reformular hoy nuestro pensamiento, a partir de una valoración objetiva de la conducta demócrata cristiana, en el trascurso de nuestras luchas sociales y de los parámetros dentro de los cuales encuadró su presencia en el quehacer político chileno.

ESENCIA Y APARIENCIA DE LA DC

Al extinguirse los años treinta, un pequeño grupo de intelectuales jóvenes, se marginó del viejo Partido Conservador, expresión aún sobreviviente de la centenaria oligarquía terrateniente. Era la Falange Nacional, que venía funcionando como grupo juvenil autónomo desde 1936. Su denominación recoge los analogismos, que algunos de sus líderes le atribuían, con la Falange española. Aquel fue el núcleo sobre el cual se construyó más tarde el Partido Demócrata Cristiano (1957).

El tiempo lo iría reorientando ideológicamente en torno al pensamiento social de las encíclicas papales y a las enseñanzas filosóficas de Jacques Maritain.

Más tarde, disputará exitosamente al Partido Radical la representación política de las capas medias, ofreciéndoles lineamientos ideológicos atractivos y modernizantes. En definitiva, se consolidará como un partido burgués reformista, sustentado socialmente en los estratos pequeñoburgueses, numéricamente mayoritarios en él, y en grupos de trabajadores y subproletariado de la ciudad y del campo; pero dirigido objetivamente por un núcleo que representa los intereses de los sectores más dinámicos de la gran burguesía y del imperialismo. El éxito político de este núcleo dirigente radicaba, en esencia, en su capacidad para expresar, en una versión nueva y modernizante, los intereses de los sectores más dinámicos de la burguesía chilena y del «progresismo» norteamericano.

Al cubrir todas las gamas del espectro de clases, ofreciendo un «corpus» ideológico multifacético, confuso y contradictorio, multiplicó su capacidad de atracción y representación de intereses. Ello -indudablemente- lo logró más por su ambigüedad que por su coherencia.

Reflejando en forma plena la versatilidad social de los sectores medios, marcará su quehacer en los últimos treinta años, con un caminar incierto, que la ubica en el discurso político a la izquierda y en la acción práctica a la derecha.

(1) «La gravitación de lo que se hace o se deja de hacer cuando se controla el 40% del Congreso Nacional; el 30% del electorado nacional; el 32% de los trabajadores organizados de la CUT; diarios, radios, TV, cinco de las ocho universidades del país, la gravitación digo, de una fuerza político-social publicitaria de esta envergadura, tiene efectos decisivos por sus acciones o por sus omisiones». R. Tomic, exposición ante el Consejo Nacional de la DC el 7 de noviembre de 1973.

Adopta una posición tercerista. Se define simultáneamente como anticapitalista y antisocialista; es antiliberal, pero también antimarxista; declara su oposición teórica al imperialismo norteamericano, y al mismo tiempo, su condenación concreta al supuesto «imperialismo soviético». Sin embargo, no será difícil descubrir que los «anti» dirigidos contra la izquierda tienen extraordinaria consistencia y persistencia. En cambio, los «anti», que teóricamente parecen cuestionar de algún modo el sistema capitalista, se desvanecen en una retórica idealista, sin concreción en la realidad. La pretensión de configurar una suerte de tercerismo ideológico -un camino propio- equidistante «del liberalismo individualista» y del «marxismo totalitario», desaparece en la práctica. No hay tal ambivalencia. Cuando la coyuntura histórica la coloca contra la espada y la pared, la DC optó invariablemente por «la diestra». En definitiva, cuanto hay de profundo y sustancial en sus posiciones ideológicas, es un antimarxismo activo, militante y omnipresente.

¿Por qué en Chile, vigente la experiencia revolucionaria, no fue posible una alianza con el Partido Demócrata Cristiano? Empecemos por consignar un hecho. Desde su nacimiento, hace aproximadamente cuatro décadas, la DC jamás aceptó una alianza política con la izquierda en su conjunto o con alguno de sus partidos principales. No ocurrió lo mismo con el Partido Radical. Éste, imbuido de una ideología racionalista, laica y progresista, se mostró siempre permeable a confluir en proyectos políticos con los partidos marxistas. Como lo hemos expresado, esa posibilidad nunca se dio con la DC. Con Pedro Aguirre Cerda, por cierto más conservador y menos modernista que Frei, un entendimiento fue posible. No lo fue en cambio con éste. ¿Por qué? ¿Por la persistencia de esta especie de constante histórica?

Contestamos. Porque la DC surge a la contienda social precisamente como alternativa frente a la izquierda. No obstante su pretensión formal de ubicarse ideológicamente en una hipotética calle del medio, en una tierra de nadie, siempre y en definitiva la encontramos como una respuesta de contención a las fuerzas revolucionarias. La «Alianza para el Progreso», el aparentemente novedoso modelo kennediano de consolidación de la dependencia, encuentra en el proyecto demócrata cristiano su expresión más fiel. Cuando en el ardor de las luchas políticas, denunciábamos a la DC como «la otra cara de la derecha», estábamos acuñando algo más que una simple consigna. Era la ponderación inequívoca de una conducta persistentemente sostenida por ésta y de una expresión ideológica de administrada ambigüedad.

Cuando en las postrimerías de la década del treinta la izquierda chilena se cohesiona tras la línea de Frente Popular, los jóvenes líderes falangistas mantienen su fidelidad a la opción reaccionaria. Desde entonces y hasta 1964, cuando alcanza la plenitud de su vigor como expresión pluriclasista -básicamente pequeñoburguesa- recogiendo definitivamente la representación del sector desarrollista de la burguesía chilena, reivindicará invariablemente idéntico papel: el de ser en los hechos la alternativa frente al movimiento popular. Así lo entendió -por lo demás- el conjunto de la burguesía, y el imperialismo norteamericano, quienes al detectar en 1964 la amenaza inminente de un triunfo popular, se volcaron tras la candidatura de Frei.

Y más aún, el gobierno de Frei asume con entusiasmo el papel que el imperialismo le asigna en el plano continental: el de ofrecer un modelo alternativo frente a Cuba socialista y revolucionaria. La DC monta así la experiencia reformista de mayor trascendencia en América Latina.

La magnitud de la brecha abierta entre los proyectos políticos de la izquierda chilena y el de la DC, fue patentizada en dos frases que grafican cabalmente el pensamiento y la actitud de las bases de los partidos proletarios en esa época. Una, del secretario general del PS, Aniceto Rodríguez: «A la DC le negaremos la sal y el agua.» La otra, del secretario general del PC, Luis Corvalán: «¡Con Tomic ni a misa!»

La campaña presidencial de la DC, en 1964, pone al descubierto la esencia de sus concepciones íntimas y el hondo y arraigado sentimiento que selecciona al socialismo como su principal y verdadero enemigo. Nunca en la historia del país se había acumulado en contra del movimiento popular, liderado por Salvador Allende, tal grado de vileza conceptual, de primitivismo político y de demagogia. Tal fue el contenido de la llamada «campaña del terror». Ésta trasuntaba algo más profundo que un sucio e inmoral recurso electoral. Expresa el trasfondo de un anticomunismo visceral siempre presente en instantes decisivos. Y no se trata de una actitud históricamente reciente. Hace casi cuatro décadas, el joven Frei enjuiciaba al gobierno radical de Pedro Aguirre Cerda en los siguientes términos: «Estamos mal, completamente aislados en América y eso es grave. ¿Y por qué? Por la influencia comunista que nos hace sospechosos...»

¿Qué tiene de extraño y particular entonces, que cuarenta años más tarde, el Senado norteamericano revele al mundo cómo la DC chilena ha sido el centro de una inversión millonaria de la CIA, realizada -precisamente- para bloquear el ascenso del movimiento popular? ¿Y que esta inversión fuera sostenida ininterrumpidamente desde 1962 hasta los meses siguientes al golpe militar?

El informe Church revela el historial abyecto de la burguesía chilena. No constituye una acusación interesada frente a una situación específica de corrupción ocasional. Ni siquiera una confesión determinada por móviles rectificadores. Se trata, pura y simplemente, de la radiografía de una práctica, cuya legitimidad el imperialismo defiende al amparo de los nuevos valores éticos reivindicados por el presidente Ford. Estos convalidan el crimen, el soborno, la corrupción y la intervención abierta en la vida de otros pueblos, basado en el solo derecho que emerge de los intereses imperiales. En este nuevo contexto, la Democracia Cristiana quedó al desnudo. Durante doce años, fue financiada con dinero norteamericano. Hasta sus imágenes más modernizantes y progresistas aparecen diseñadas por la asesoría de la CIA. Su estructura orgánica, su prensa, sus radios, sus bienes no son producto del laborioso aporte de sus militantes. Siempre hubo un proveedor solícito que canceló generosamente las rentas de alquiler.

Los antecedentes del informe senatorial la colocan en una encrucijada moral de la mayor gravedad. No se trata ahora

de una acusación perversa «del marxismo» a la cual se le puede salir al paso con una refutación destemplada. No es un pequeño escándalo publicitario, posible de ahogar con el silencio indignado. Es la estructura de poder del imperialismo la que habla por boca del Senado de EU para exhibir, arrogante e impúdica, los métodos utilizados por éste. Frente a la vergonzosa magnitud de la acusación, la tímida exculpación personal de Eduardo Frei -que recurre al propio informe senatorial, con lo cual le da legitimidad, para demostrar que era ajeno a una de las muchas operaciones financieras concedidas a su partido- resulta en definitiva una confesión cabal de la sostenida trama de corrupción y sometimiento. En la cronología de las dádivas imperiales, hay una «partida» en extremo sugerente: ocho meses después del golpe militar, cuando el fascismo festinaba su crueldad sobre el dolor de Chile, la CIA solicita al «Comité de los Cuarenta» la cantidad de 50 000 dólares para responder a «compromisos políticos contraídos con la DC antes del golpe».

LA DC Y EL GOBIERNO DE ALLENDE

Es un hecho cierto que la victoria popular se construyó sobre una división adjetiva de la burguesía chilena. Las tímidas reformas ensayadas por Frei, sobre todo en el plano agrario, le habían granjeado la animosidad de los sectores más retardatarios de la oligarquía terrateniente. En torno a ellas se generó una creciente -aunque irrelevante- pugna político-parlamentaria, que alcanzó su culminación en el período preelectoral. El sector monopolista tradicional, cuya expresión política resultó debilitada con el fracaso de la experiencia conservadora de Alessandri (1958-1964), se recuperó ostensiblemente en las consultas electorales precedentes a la contienda presidencial. La DC, por su parte, instalada en el gobierno, controlaba la estructura política y administrativa, factor de indiscutible gravitación en el proceso electoral. Así, ambas fracciones de la burguesía se sentían suficientemente fuertes como para enfrentar aisladas al movimiento popular. Sólo esta apreciación subjetiva y equivocada impidió soldar la fractura, tal cual había ocurrido en 1964.

También es cierto que la DC permitió con sus votos, en el Congreso Nacional, la ratificación institucional del triunfo de Salvador Allende.

Si precisamos el contexto político y social que condicionaba la decisión demócrata cristiana, debemos concluir que ésta -con ser positiva y corresponder a la honesta vocación democrática y progresista de muchos de quienes se jugaron por ella-, no era en modo alguno una concesión graciosa al movimiento popular triunfante. Diversos factores harían que esta determinación fuera en definitiva inevitable.

La DC acababa de ser derrotada con un programa radical y un candidato de avanzada, Radomiro Tomic. De alguna manera la campaña electoral radicalizó a sus sectores populares, creando internamente un factor que dificultaba la pretensión de escamotear el triunfo de la izquierda.

De otra parte, pesaba una sólida e ininterrumpida tradición que obligaba al Parlamento a ratificar el veredicto de las urnas. Además el movimiento popular exhibía una enorme combatividad, de manera que no era fácil imponerle una «sorpresa por secretaría». Finalmente, un hecho dramático, el asesinato del general René Schneider, comandante en jefe del ejército, a manos de una pandilla fascista, actuaría como disuasivo emocional, dentro y fuera de las Fuerzas Armadas. Es decir, existía una constelación de elementos convergentes, que llevan a la DC a legitimar el triunfo popular. Lo hace cuando una sucesión de factores dieron por cancelada la intentona sediciosa montada por la CIA, la ITT, Frei y la participación activa de sus más cercanos colaboradores.

A mayor abundamiento, y en el ánimo de atribuir al hecho analizado su exacta dimensión, es útil recordar que el reconocimiento formal de la burguesía a una victoria popular no era un hecho insólito en la historia de Chile. Ya en 1938 la clase dominante, estrechamente derrotada, absorbió los márgenes de riesgo y entregó el poder a la combinación triunfante, integrada por los partidos Radical, Socialista y Comunista. En 1946, un sector de la oligarquía volvió a ratificar en el Congreso, la consagración de un candidato radical apoyado exclusivamente por el PC.

Instalado Salvador Allende en la presidencia de la República, empieza a implementarse el programa popular a un ritmo resuelto.

Paralelamente, el sector reaccionario del PDC adopta las medidas necesarias para retomar su dirección orgánica, de la cual -en esencia- siempre pudo disponer a voluntad. Así la DC se adecuaba para asumir su papel natural: constituirse una vez más en alternativa al proceso revolucionario.

Y queremos al respecto desvanecer lo que no es sino un espejismo: la existencia en el seno de la Democracia Cristiana de dos tendencias potencialmente equilibradas, cuyo preminencia en la conducción interna pudo ser influida por una correcta política de la dirección revolucionaria.

¿Qué hay de cierto en esta afirmación? Efectivamente, siempre hubo en la DC un sector progresista, que entendía natural una alianza con las fuerzas populares. Sin embargo, este sector jamás logró constituirse en real fuerza dirigente y su destino fue reiterativo: escindirse cuando percibe la inutilidad de la lucha interna. Nunca lograron la confianza de los grupos sociales más influyentes, y no obstante el prestigio moral de sus personeros, su alta calidad intelectual y su solvencia política indiscutida, en el instante de la ruptura, se convierten en generales sin soldados. Así ocurre con el partido MAPU en 1969, antes de la elección presidencial, y con la Izquierda Cristiana, en julio de 1971. Si Frei se erige en líder endémico de la DC no lo es por el solo peso de sus cualidades personales. Es su consecuencia medular con la ideología, valores, sentimientos y prejuicios, subyacentes en una masa partidaria pequeñoburguesa, básicamente hostil al cambio. Él asume a cabalidad su representación. Esto determina su influencia y la continuidad de su presencia en la vida del partido. De hecho, nunca ha sido derrotado en las confrontaciones internas, y sus alejamientos formales apenas si han constituido pausas efímeras, toleradas y administradas.

Afirmar que dependía de una política correcta de las fuerzas populares, consolidar el dominio del sector de izquierda y atribuir su desplazamiento a los excesos sectarios de la Unidad Popular, es una ingenuidad. Aquel sector, usufructuario ocasional de la dirección del PDC, es erradicado como y cuando lo quiere el freísmo.

Por cierto que la acusación sobre sectarismo es valedera. Constituyeron errores serios en nuestra conducta, sobre todo en las relaciones con la base demócrata cristiana. La UP no fue capaz de superar la actitud -habitual en Chile- de todos los movimientos triunfantes, en orden a distribuir los cargos públicos como si fueran «botín de guerra». No articuló una política de acercamiento y convergencia en el seno de las masas. No siendo este sectarismo el que determinó la actitud del PDC frente al Gobierno Popular, indudablemente le dio al quehacer reaccionario de su dirección, una justificación política y moral ante sus sectores obreros, campesinos, pequeñoburgueses y subproletarios.

Sólo dos meses después de la elección municipal de 1971, donde la izquierda se empina sobre el 50% del electorado, se aprovecha impúdicamente un acontecimiento en el cual el gobierno no tuvo la menor responsabilidad para provocar una situación de ruptura definitiva. El asesinato del ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Zujovic, es utilizado con grosera hipocresía por el freísmo, para proceder al ajuste interno de la DC, asumir el control del Parlamento y soldar con la derecha (Partido Nacional) un compromiso político subsistente hasta la caída del Gobierno Popular.

El asesinato de Pérez Zujovic sirvió para ensamblar la unidad de la clase dominante, al menos en la perspectiva estratégica. A partir de aquel acontecimiento se da luz verde a una ofensiva generalizada en todos los planos: institucional, publicitario, de masas e incluso militar.

EL DIALOGO IMPOSIBLE

En general, los análisis en torno a la suerte de las sucesivas iniciativas promovidas por el Gobierno Popular, para buscar un área de convergencia con el PDC, se orienta a dar por establecido la viabilidad de tal entendimiento. A partir de esta afirmación se atribuye su fracaso a la actitud obstruccionista y sectaria de un sector de la Unidad Popular. El diálogo frustrado pasa a desempeñar un papel sustantivo, al generar el supuesto «aislamiento de la clase obrera», afirmación reiterada como una suerte de axioma. El ciclo argumental se cierra infiriéndose, además, que tal aislamiento constituyó la causa principal de la derrota.

Sobre las alternativas y entretelones de las diferentes tentativas de acuerdo con la DC, el pueblo de Chile tuvo permanente información. No fue aquélla una negociación subrepticia. Hasta las menores incidencias fueron ampliamente difundidas por la prensa de gobierno y oposición.

Desde luego, es un hecho cierto que el gobierno de la UP buscó honesta y reiteradamente un entendimiento con la DC. Es cierto también que en el seno de la izquierda se formularon reservas legítimas y justificadas sobre el éxito y conveniencias de tal iniciativa. Pero es necesario dejar plenamente establecido que ningún partido de la UP obstaculizó el desarrollo del diálogo propuesto.

El Partido Socialista veía con claridad la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la DC y expresó -como antes se ha dicho- un criterio adverso. Contra él conspiraba el peso decisivo del sector freísta, la ideología de su base pequeñoburguesa, mayoritariamente prevenida contra el proceso revolucionario, y la implícita autodefinición del PDC, como alternativa de remplazo a la UP, en la perspectiva de un colapso institucional. Conocida la posición del PS, su dirección prefirió marginarse de las conversaciones, precisamente para no dar pábulo a situación alguna que pudiera ser utilizada como pretexto formal del fracaso.

En cada instante del diálogo representaron a la UP dirigentes políticos absolutamente convencidos de su factibilidad, incluyendo al propio presidente de la República.

En el mes de marzo de 1972, el presidente Allende encargó al ministro de justicia de la época, una gestión de entendimiento en torno al problema de la constitución del área social de la economía. La aptitud y disposición del negociador parece indubitable si se considera su incorporación, más tarde, junto a su partido, a las trincheras de la más enconada oposición. El entusiasmo puesto en la empresa lo llevaron a exceder el marco de su cometido, obligando al presidente a solicitarle abruptamente la renuncia de su cargo.

El 12 de junio del mismo año -1972- el propio Allende toma la iniciativa de invitar al presidente del PDC, senador Renán Fuentealba, para reabrir la gestión fracasada. En aquella oportunidad convienen en suspender una votación senatorial sobre los votos del Ejecutivo al proyecto que el mismo senador y su colega Hamilton habían presentado al Congreso, con el objeto de delimitar el área de propiedad social, y constituir una comisión negociadora abocada al estudio de un nuevo proyecto de ley sobre la materia. La UP encargó esta vez la gestión al ministro de Justicia y militante del PR, Jorge Tapia, al senador Rafael Agustín Gumucio de la Izquierda Cristiana, y al miembro de la Comisión Política del PC, Orlando Millas. Este último sería remplazado más tarde por el militante del mismo partido, entonces subsecretario de gobierno, Sergio Insunza.

Las conversaciones culminaron con dos cuestiones pendientes: la inclusión de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, el mayor monopolio del ramo, en el área social, y la forma de integrar el directorio de los bancos estatizados. El 30 de junio el gobierno aceptó nada menos que la exclusión de dicho monopolio del área social y accedió a la fórmula del PDC sobre el problema de los bancos. El 4 de julio se llegó a un acuerdo total. Al día siguiente, los senadores de la Democracia Cristiana desconocieron el entendimiento y rechazaron junto al resto de los partidos opositores los vetos propuestos por el Poder Ejecutivo a la Reforma Hamilton-Fuentealba. De esta manera naufragaban, de hecho, veintitrés días de intensas conversaciones. Un llamado telefónico de Frei, ordenando el desahucio inmediato del acuerdo, hecho desde un país extranjero, puso las cosas en su lugar.

El 30 de julio de 1973, en el clímax de subversión fascista, el presidente de la República realizó un nuevo esfuerzo. Esta vez se trataba de evitar un enfrentamiento inminente. El interlocutor fue el propio presidente de la DC, senador Patricio Aylwin. Siguiendo instrucciones precisas de Frei, Aylwin conduce las conversaciones a un punto muerto, sin salida. La línea ultimatista es señalada por El Mercurio el mismo día en que se inició el encuentro: «La aceptación del diálogo que hoy debe tener lugar en La Moneda está dada por la DC sobre bases precisas. Se pide al gobierno que restablezca la confianza de la ciudadanía mediante un gabinete en que exista representación institucional de las Fuerzas Armadas; que active el desarme de los grupos políticos y sindicales mediante el efectivo cumplimiento de la ley de control de armas y que admita la interpretación que ha dado la mayoría del Congreso a la promulgación dé las reformas constitucionales.»

A estas exigencias mínimas, planteadas sin rubor por el vocero norteamericano, el senador Aylwin agregaría la devolución de algunas empresas ocupadas por los trabajadores. Es decir, la rendición absoluta, la aceptación de un virtual «cogobierno» con los militares y el término del proceso.

El 4 de agosto, la DC rompe abruptamente las conversaciones por medio de una carta pública de Aylwin al presidente Allende. En ella, invocando -naturalmente- los más excelsos intereses de la patria, enfatiza «que sólo en torno a los planteamientos formulados se pueden crear las condiciones de tregua y normalización cívicas indispensables para la búsqueda de entendimientos verdaderamente fecundos». Señalará, finalmente, que si las exigencias de su partido no son aceptadas es «inútil prolongar conversaciones que sólo contribuirán a confundir más al pueblo que nos mira, con el consiguiente perjuicio para nuestro régimen democrático».

Ante esta tajante negativa, Allende responderá de inmediato -también públicamente- con un postrer y sereno llamado: «No deseo dramatizar, pero tengo el deber de recordarle las trascendentales responsabilidades que usted y yo tenemos en la difícil instancia que vive el país y las proyecciones históricas de nuestras decisiones. Por ello, y por el interés superior de Chile, debemos continuar el diálogo. Lo invito formalmente para que prosigamos nuestras conversaciones.» La exhortación no tendrá respuesta. La De había actuado una vez más con las cartas marcadas. Su disposición dialogadora, en esa oportunidad, no tenía más objeto que ser una hábil maniobra para dejar sin argumentos a los sectores democráticos de su partido, que recusaban comprometerse en la estrategia golpista. Se había «jugado» nuevamente al diálogo. Este juego era parte de la contribución del sector freísta a la conspiración en marcha. La intención artera de la maniobra era tanto más evidente, si se considera, que de hecho, habían sido aceptadas la mayoría de las exigencias formuladas al presidente de la República: éste había constituido un gabinete con participación de los militares; se había llegado a un razonable acuerdo frente al problema de los vetos; y en torno a la existencia de los presuntos «grupos paramilitares», el ejército, virtualmente bajo control de los golpistas, venía actuando impunemente, bajo el pretexto de cautelar el cumplimiento de la ley de control de armas.

Por último, a la dramática invocación del cardenal Raúl Silva Henríquez, formulada algunos días antes del golpe, la DC, por intermedio de su presidente, dará una arrogante respuesta: «No hay conversaciones mientras el gobierno no proceda a las rectificaciones planteadas en el acuerdo de la Cámara de Diputados.»

Ésta es la historia del diálogo entre la UP y el Partido Demócrata Cristiano. Podrán existir algunas variantes interpretativas, pero en lo fundamental, queda en pie la disposición de ánimo con el cual fue enfrentado. Para el sector reaccionario del principal partido de oposición, las conversaciones tuvieron siempre un carácter puramente táctico. Se trataba de dar al país una imagen de apertura, presentando al mismo tiempo al gobierno como intransigente y sectario. Conversaba. pero no negociaba. Siempre existían buenas razones para no llegar a acuerdos. Todo el formidable aparato propagandístico de la reacción se movilizaba entonces para atribuir la responsabilidad del fracaso al gobierno o al propio presidente de la República. De esta manera, mientras los «intentos frustrados» debilitaban políticamente a la UP, le entregaban a la DC el justificativo moral de sus ulteriores movidas.

Resulta pertinente recordar un hecho demostrativo de la motivación artera que la DC atribuyó al diálogo con el gobierno. El 9 de agosto de 1973, el presidente designó un nuevo ministerio, integrado por los tres comandos en jefe de las Fuerzas Armadas, en carácter institucional. Esta medida había sido adoptada a petición del propio Aylwin al iniciarse las conversaciones. La directiva nacional DC formuló de inmediato una declaración de apoyo. Tres días más tarde, se desligó públicamente del compromiso, mientras su vocero oficial, el diario La Prensa, solicitaba la renuncia de los ministros militares.

Radicalizado el proceso y arrastrada la DC por la pendiente conspirativa, no era posible acuerdo alguno con la UP, sino a partir del sometimiento del gobierno y la mediatización de la experiencia revolucionaria. En su pretensión estratégica alternativista de la revolución, la DC aspiró, primero a una rectificación política por la vía institucional, para más tarde, darse por satisfecha sólo con el derrocamiento armado del gobierno.

De alternativa factible, el golpe militar pasó a trasformarse en perspectiva deseable. Astutamente se había pavimentado el camino para una intervención castrense, que pusiera término al régimen institucional, posibilitando después de un breve interregno dictatorial, la convocatoria a elecciones, que permitirían el retorno de la DC en gloria y majestad al ejercicio del poder. Frei personalmente debería recoger, por mano mora, los beneficios del putsch militar.

Esquema insensato e incapaz de evaluar correctamente hasta qué punto el estado liberal burgués estaba condenado a muerte una vez derrocado el Gobierno Popular. Sólo mucho después del golpe, cuando habían agotado la vergüenza en el intento de avalarlo, los dirigentes DC descubren que no son protagonistas, sino meros partiquinos, de un plan contrarrevolucionario, preparado y financiado por la CIA.

Resulta superflua entonces la pretensión de definir -en el seno de la izquierda- las presuntas responsabilidades de

algunos en el «fracaso del diálogo». Éste nacía abortado por la presión norteamericana y por su incompatibilidad con la resuelta estrategia de poder impuesta por la gran burguesía monopólica. Tal situación no era susceptible de ser alterada por concesiones superestructurales ni por la decisión honesta de algunos personeros progresistas de la DC. Si Allende mantuvo algunas opciones en las distintas fases de la gestión, éstas fueron sucesivamente: transar el proceso revolucionario; claudicar incondicionalmente; y por último, abdicar a su cargo.

Por lo demás, así lo entendió con claridad el contingente que abandona el partido en julio de 1971 y constituye la Izquierda Cristiana. Ellos renuncian a ser sólo factor de presión interna, porque ya a esa altura -ocho meses del inicio del proceso- concluyen en la inutilidad de su misión.

Y no era sólo porque lo impidiera la estructura direccional. Las propias bases de la DC, en las cuales influían sin contrapeso las animosidades, temores y prejuicios de las capas medias frente a un proceso revolucionario, presionaban desde la derecha sobre sus líderes vacilantes.

Año y medio después del golpe militar un antecedente extraordinariamente revelador disipa cualquier duda. En abril de 1975, el ex senador Patricio Aylwin, presidente en ejercicio de la DC, formuló al plenario del partido una consulta amplia sobre las variantes de acción frente a la dictadura. La ponderación porcentual de las respuestas, despeja sin dejar lugar a dudas las interrogantes que hemos tratado de clarificar en las páginas anteriores.

Frente a la experiencia fascista la inmensa mayoría de la estructura partidaria dirigente (68.18%) se pronuncia por una actitud de «independencia crítica y activa». Es decir, el asesinato cotidiano, la tortura convertida en sistema, la violación brutal de todos los derechos humanos, la cesantía, el hambre y la miseria de cientos de miles de trabajadores, la demolición vertiginosa del país, la realidad infamante que vive Chile, ha sensibilizado «profundamente» a esa mayoría partidaria, al extremo de decidir frente a la barbarie una posición de «independencia», eufemísticamente adjetivada como «crítica y activa». Pero hay más. Un 28.79% estima que una actitud de colaboración con la dictadura facilitaría «desde dentro» la vuelta a la democracia. Un 1.51% patrocina la «resistencia» y un 9.09 % una oposición frontal.

¿Y sobre la posibilidad de un entendimiento con los partidos marxistas para constituir un frente amplio? La respuesta continúa siendo elocuente: un 3.03%.

Estos datos están incluidos en una carta que el señor Aylwin dirige a Radomiro Tomic el 6 de mayo de 1975, hecha pública por voluntad de su destinatario.

Aquí está expresado con consecuencia inobjetable el sustrato del pensamiento del sector dirigente de la Democracia Cristiana. Su constante histórica: el adversario es el marxismo. No importa cuál sea la coyuntura social. Ni siquiera la tiranía de hoy es su enemigo principal. Frente a ella el partido, al igual que el señor Aylwin, se declara «independiente, crítico y activo». Pudo haber agregado: «quieto y silencioso», en espera de que la pandilla fascista masacre a los trabajadores y liquide sus organizaciones, para levantar más tarde -sobre terreno yermo- las banderas de la «democracia, la libertad y el cristianismo».

Se trata de un juego sucio, cobarde y sin destino. En los mismos instantes en que miles de trabajadores caían en las calles de Santiago, cuando se cazaba como fieras a los hombres de izquierda y la soldadesca destruía y rapiñaba sus hogares, la DC convalidaba moralmente el golpe [13 de septiembre], expresando sobre el cadáver del presidente asesinado, que «las Fuerzas Armadas no buscaron el poder y que sus propósitos de restablecimiento de la normalidad institucional y de la paz y unidad entre todos los chilenos, interpretan el sentimiento y merecen la patriótica cooperación de todos los sectores».

La misma devoción en el nuevo régimen reitera Eduardo Frei en la carta dirigida a Mariano Rumor, presidente de la Unión Mundial Demócrata Cristiana, el 8 de noviembre de 1973: «Todos los chilenos, o al menos la inmensa mayoría, estamos vitalmente interesados en que se restablezca la democracia en Chile, y para esto es necesario que el país salga del caos, y en consecuencia que el gobierno actual tenga éxito. Las Fuerzas Armadas -estamos convencidos- no actuaron por ambición, más aún, se resistieron largamente a hacerlo. Su fracaso ahora sería el fracaso del país...»
Sólo en diciembre de 1975 -trascurridos más de dos años de barbarie- Eduardo Frei asume, en un documento personal, una posición comedidamente crítica frente a la junta fascista. Por primera vez, se da por apercibido de la práctica sistemática de torturas, de la violación persistente de los derechos humanos y de la bancarrota económica, social y moral del país. Su administrado silencio -mientras Pinochet se agotaba en la faena de exterminio físico de los mejores cuadros de la izquierda revolucionaria- se rompe también en una instancia astutamente calculada: cuando las presiones externas e internas sobre la junta restringen el margen de riesgo personal y político de su ataque. Por cierto, la crítica a la dictadura se formula desde las mismas categorías reaccionarias que sellaron su vida política: democracia, con proscripción del marxismo, y paz interna, con perdón de los verdugos.

LA DC: ALTERNATIVA AL MOVIMIENTO POPULAR

Es pues, a la luz de esta conducta históricamente sostenida, de donde se infieren las posiciones que el Partido Socialista asumió frente a la Democracia Cristiana. Es la práctica, tenazmente reiterada, la que hace irrelevante la pretensión de atribuir a la incapacidad de la UP o al sectarismo de alguno de sus partidos, el no haber aprovechado y estimulado «las potencialidades revolucionarias» de la DC. Tales «potencialidades» -no descubiertas antes ni durante el proceso por ninguno de los dirigentes de la izquierda- jamás existieron y resulta poco serio y acientífico inferirlas del sólo quehacer de un ala progresista, cuyo destino lamentablemente ha sido la frustración constante.

Tal cual se dio la lucha política en Chile, la unidad con el partido de Frei nunca se planteó en las filas revolucionarias.

Desde 1958, la DC y los partidos obreros antagonizan como dos opciones de poder y ésta es la constante en el desplazamiento político de una y otros.

Como lo hemos visto, el Programa de Gobierno de la UP enjuiciaba severamente la experiencia demócrata cristiana: «En Chile, las recetas «reformistas» y «desarrollistas» que impulsó la Alianza para el Progreso e hizo suyas el gobierno de Frei, no han logrado alterar nada importante. En lo fundamental ha sido un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero, cuyos débiles intentos de cambio social naufragaron sin pena ni gloria entre el estancamiento económico, la carestía y la represión violenta contra el pueblo. Con esto se ha demostrado, una vez más, que el reformismo es incapaz de resolver los problemas del pueblo.» Este juicio expresaba la opinión unánime de los partidos que integran la Unidad Popular.

El diálogo deseado y formulado por el conjunto de la coalición de gobierno fracasa -exclusivamente- porque así lo quiso la dirección de la DC. Y ello no ocurrió por un subalterno capricho partidario. Ese diálogo era intrínsecamente inviable, porque el sólido circuito que conectaba al PDC con los intereses norteamericanos y de la gran burguesía hacía ilusorio cualquier apoyo, incluso circunstancial, al proceso revolucionario. Suponerlo era una ingenuidad inexcusable. Su ideología esencialmente antimarxista, y la naturaleza de la representación de clase que asume en la sociedad, obstruía, inevitablemente, cualquier compromiso. En Chile, al igual que en el resto del mundo, su invariable pretensión alternativista frente a un auténtico proceso de cambio, la inhabilitaba para converger con las fuerzas revolucionarias en una gran empresa.

Queremos precisar aún más nuestro pensamiento. Entendimos ayer, como entendemos hoy, que una alianza con la DC en el contexto de una estrategia revolucionaria era y es un factor básico para acumular más fuerzas. Y porque así también lo entendió la burguesía y la dirección derechista del PDC, es que se apresuraron a impedir su concreción.
Ahora bien, tal alianza no depende de nuestra voluntad ni del empeño desplegado por los sectores más avanzados de la Democracia Cristiana. La más resuelta disposición de ánimo, los llamados unitarios más inflamados y amplios, se estrellarán con el antagonismo sustantivo condicionado por las leyes objetivas del desarrollo de una revolución socialista. Debemos afirmar, aun a riesgo de parecer esquemáticos, que el obstáculo esencial está determinado por la incompatibilidad entre revolución y reformismo. Los «porfiados hechos» siguen pesando más que los buenos deseos. Hoy, a tres años del golpe militar, la DC no sólo deja sin respuesta los llamados unitarios de la UP, sino declara explícita y reiteradamente no estar dispuesta a formar un frente único antifascista ni a concertar compromisos ni acciones comunes con los partidos marxistas.

Con todo, el DC es en sustancia un partido pequeñoburgués. Son los valores fundamentales de la burguesía, adoptados por las capas medias, mayoritarias en su seno, los que han marcado su conducta política en Chile y en el resto del mundo. Frente a una experiencia revolucionaria o en instantes históricos decisivos, se ha inclinado siempre por la conservación del estatus burgués, incluso cuando éste supone el terror fascista.

Ésta ha sido sin excepciones la experiencia universal. Derrotado en Europa el fascismo, los pequeños partidos demócrata cristianos, anteriores a la conflagración, se alzan como organizaciones poderosas. Su vertiginoso crecimiento nace precisamente del papel asignado en el esquema político de posguerra: ser la nueva alternativa reaccionaria, apoyada firmemente por EU, frente a los movimientos progresistas y al poderío sobreviniente de los partidos comunistas europeos. En el hecho, sustituyen al fascismo como expresión derechista en el nuevo espectro político. Así ocurre en la República Federal Alemana, Italia, Bélgica, Francia y Austria. No es aventurado pronosticar que en España ocurrirá algo similar. Un fenómeno semejante, aunque con cierto retardo, se da en América Latina. Acá, desde posiciones de centro, la DC en Chile y en Venezuela, emergen como contrapartida de los movimientos populares en ascenso.

¿De dónde entonces deducir que en Chile era posible concitar el apoyo de la DC a un proyecto revolucionario? ¿Por qué atribuirle en nuestro país especificidades capaces de imprimirle una conducta política diferente a la de sus congéneres europeas y latinoamericanas? Ella nace con el mismo sentido histórico, asume la misma representación social, y su dirección la hegemoniza la clase dominante, al igual que en otros lugares del mundo. Es ello lo que condiciona sus actitudes de ayer y de hoy. Puede ubicársela más o menos a la derecha. Dependerá de los marcos de referencia del espectro político de cada país. Si en Chile aparece a la izquierda de la Democracia Cristiana de Alemania Federal, es porque aquí todo el espectro político está «corrido a la izquierda». La presencia de poderosos partidos obreros de inspiración marxista la obliga a plantearse, si aspira a ser alternativa, con una imagen nueva, progresista y modernizante. Pero ello no altera su esencia como expresión defensista del estatus.

¿ Por qué entonces sorprenderse por no haberse dado -precisamente en el Chile revolucionario- un compromiso, ausente no sólo en toda la historia del país, sino también en cualquier latitud de la tierra?

Debemos entenderlo definitivamente. La respuesta de la DC en Chile fue legítima, al amparo de su propia lógica. Era la respuesta de la pequeña burguesía chilena enganchada en la empresa burguesa, y sobre todo norteamericana, de impedir las trasformaciones estructurales reclamadas por el atraso, la dependencia y el subdesarrollo. Era la respuesta que nacía de su condición de alternativa burguesa al movimiento popular.

7.- PODER POPULAR: EXIGENCIA DE LAS MASAS

Los trabajadores de Chile, con la insondable intuición de la clase, sobrepasan a sus vanguardias al enunciar una consigna destinada a traducir un sólido e inquietante fenómeno social : ¡Crear, crear, Poder Popular!

Respuesta espontánea de las masas en una coyuntura que presienten definitoria, orientada a llenar un vacío direccional y sustituir la ausencia de una respuesta revolucionaria al problema del poder.

Aquella consigna, planteada en los momentos más álgidos del conflicto, penetra con incontenible fuerza en la conciencia de las masas, generando una reacción de violento dinamismo, en cierta medida, ajena a la tuición de los partidos populares.

La burguesía se atemoriza. Percibe de inmediato los peligros de un fenómeno preñado de extraña vitalidad y descubre la potencialidad revolucionaria inmersa en él. La Unidad Popular -en conjunto vacila, observa en el poder emergente un vago antagonismo, intuye las dificultades para someterlo a control y, en definitiva, se sustrae a la tarea de hacerlo consciente, orientarlo y canalizarlo.
No obstante, la generación de este poder popular, a no dudarlo, es la creación más original del proceso revolucionario chileno. Es consecuencia directa de éste, de la fortaleza y pujanza adquirida por el movimiento popular, de la participación protagónica y creciente de los trabajadores en la conducción del proceso, y de la formidable contraofensiva de clase, lanzada por la gran burguesía financiera e industrial, coludida con el gobierno de EU.

El Poder Popular expresa el extraordinario desarrollo de la conciencia individual y colectiva de las grandes masas urbanas y -en menor medida- la de los estratos más pobres del campesinado. Es un grado de conciencia política definido nítidamente en términos de unidad y de poder que excede cualquier pretensión economicista. Sectores amplísimos de la población, muchos de ellos secularmente marginados (subproletariado del campo y de la ciudad, habitantes de las poblaciones periféricas), despiertan animados por hondos anhelos de participación y por un formidable impulso movilizador que los proyecta en términos de «poder» a la creación de las más variadas organizaciones para responder a las múltiples exigencias generadas por el proceso. Estas organizaciones son sentidas por el pueblo como «su poder» y encarnan su propia y espontánea capacidad de lucha.

La alternativa de crear gérmenes de poder popular a partir de la gestión directa de los trabajadores, ya fue considerada en los documentos que sirvieron de fundamento programático a la Unidad Popular. El programa de Gobierno señalaba: «las trasformaciones revolucionarias que el país necesita, sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente...» Más adelante agregó: «el Gobierno Popular asentará esencialmente su fuerza y su autoridad en el apoyo que le brinde el pueblo organizado», para concluir que sólo «a través de una movilización de masas, se construirá desde las bases, la nueva estructura del poder...»

Si bien estos textos no configuraban una noción precisa acerca de lo que debía ser el Poder Popular, ni entregaban criterio claro sobre su carácter y naturaleza, está presente, en cambio, la idea central de impulsar en la base la constitución de órganos de poder, destinados a resolver los problemas de las masas, su participación real y efectiva en la conducción del proceso, y su profundización y defensa. Por cierto que entre esas previsiones programáticas y la elaboración intuitiva, vital y creadora de las masas, nacida al calor del proceso, hay una gran distancia. Las variadas formas de poder surgidas en las bases, no se limitaban a un quehacer coadyuvante de la acción del Estado, sino que además realizaban una actividad paralela y autónoma.

El proceso revolucionario ponía en evidencia -una vez más- la inmensa superioridad de la vida sobre las más brillantes teorizaciones.

LA GENERACIÓN DEL NUEVO PODER

Inicialmente, el nuevo poder se manifiesta como una respuesta urgente e improvisada a las acuciantes necesidades planteadas por la experiencia revolucionaria. Se gestan al calor de la lucha de clases y va desarrollándose en la misma medida en que ésta se agudiza. Nace como una formación político-social, con objetivos y tendencias imprecisas y contradictorias. Comienza ejerciendo funciones de colaboración y control sobre los organismos del gobierno, pero más tarde se trasforma en instrumento de poder autónomo, al ganar fuerza e influencia creciente en el proceso.

De partida, se concibe como órgano de apoyo concreto a las tareas del Gobierno Popular, obstruidas por la burguesía y por las trabas burocráticas del aparato estatal. Para defender el consumo amenazado por la especulación y el mercado negro, surgen las «Juntas de Abastecimientos y Precios» (JAP), encargadas de organizar la distribución en todos los centros poblacionales y denunciar y sancionar la especulación, el agio y el acaparamiento. Los «Comandos Comunales» tienen como función coordinar a nivel local los variados problemas de la comunidad: movilización, agua potable, luz eléctrica, teléfono, alcantarillado, abastecimiento: los «Consejos Campesinos» se estructuran como mecanismos relacionadores entre los organismos burocráticos del Estado y las exigencias de la Reforma Agraria; estudian los problemas campesinos, las prioridades en materia de expropiaciones y promueven el suministro de insumos e implementos agrícolas. También se crean «Comités de Vigilancia de la Producción», «Comités de Protección» de las Industrias y «Consejos de Administración» en las empresas, destinados a asegurar la participación directa y efectiva de los trabajadores en el proceso de la producción y en su defensa. Finalmente, la dramática experiencia recogida en el enfrentamiento con la huelga insurreccional burguesa, en octubre de 1972, impone la necesidad de coordinar las acciones defensivas del proletariado industrial en las grandes áreas urbanas. Nacen así los «Cordones Industriales», una de las más importantes creaciones de la intensa lucha de clases de esos años.

En forma progresiva todos estos organismos van cobrando autonomía, ampliando sus objetivos, adquiriendo conciencia

de sus posibilidades, hasta constituirse en elementos de presión y de poder real. En ellos se manifestaba un proceso de extraordinaria democratización de la vida nacional, como nunca antes la hubo, a la par que van acuñándose formas de poder popular, convertidos en alternativa al aparato estatal burgués.

No fueron una creación arbitraria de las masas, más de alguna vez así se ha pretendido. Como fenómeno social, el poder popular encuentra su fundamento en causas concretas y objetivas que legitiman ampliamente su generación y conducta.

Las masas comprendieron desde un comienzo, que su sola instalación en uno de los órganos del poder burgués, no alteraba sustancialmente los obstáculos que el Estado liberal en su conjunto oponía al proceso trasformador: la estructura burocrática no estaba capacitada para satisfacer las necesidades más apremiantes de las numerosas y extensas poblaciones marginales; el aparato represivo no era apto para asegurar protección al proceso productivo permanentemente saboteado por el enemigo; la legislación vigente no permitía combatir con eficacia el mercado negro, el acaparamiento y el agio.

De otra parte, el poder popular constituye una respuesta a la obstrucción sistemática de los partidos burgueses, atrincherados en la Corte Suprema, en la Contraloría y en el Parlamento. El hostigamiento persistente para estrechar el marco de acción legal del gobierno y mutilar sus atribuciones, obligaba a una respuesta concreta de las masas. Frente a las nuevas organizaciones y formas de lucha de la burguesía, el pueblo también se daba nuevas organizaciones de clase e intentaba alterar las formas de lucha tradicionales.

Por cierto, este nuevo poder de los trabajadores del campo y la ciudad, planteaba una contradicción con la legalidad demoliberal. Su participación en la pugna social, sin la cual difícilmente transcurre una auténtica revolución, rebasaba necesariamente las estructuras jurídico-institucionales. Y no podía ser de otra manera. El conjunto de sentimientos, de estados de ánimo, de tensiones, de exaltación emocional, desatados por un proceso trasformador, rompe los moldes heredados, los viejos hábitos y costumbres y las normas tradicionales.

El desarrollo de cierta conducta autónoma de las masas, fue tan inevitable en Chile, como lo ha sido sin excepción en todas las experiencias revolucionarias del mundo. Aquéllas se generan invariablemente cuando los órganos represivos del Estado se niegan a enfrentar la continua provocación burguesa. En tal encrucijada, difícilmente puede exigirse a las masas confianza en el Estado, instrumento global de la clase burguesa, y capacidad para entender que la «vía elegida» supone mantener la paz social y el respeto al ordenamiento jurídico vigente. Y en el caso hipotético de ser posible, los riesgos son considerables.

El Poder Popular estaba íntimamente vinculado a la participación creciente de los trabajadores en la dirección de la economía, y en general a todas las instancias del acontecer revolucionario. El trabajador participante adquiría doble conciencia de su valer, desarrollaba espíritu combativo y voluntad de poder, y por el solo hecho de hacerlo, se trasformaba en un agente activo de la revolución, transfiriendo a su comunidad ese espíritu, esa conciencia y esa voluntad.

Para profundizar el proceso y hacerlo irreversible era necesario, y más aún imprescindible, incorporar efectivamente a las masas al ejercicio del poder. Era esto -básicamente esto- lo que les permitía constatar en forma directa, vivida y tangible que el gobierno era «su gobierno» y las educaba en el ejercicio de «su poder».

El Partido Socialista así lo entendió. En el Pleno de Algarrobo celebrado en febrero de 1972 expresamos:
Para edificar la sociedad socialista es imprescindible contar con la participación directa, mayoritaria y real de los obreros y de los campesinos en todas las etapas del proceso de transición de la sociedad capitalista a la sociedad socialista y en todos los niveles de la acción política administrativa y económica de la nación. Es fundamental dar vida a la constitución de un auténtico poder popular. Este poder de obreros y campesinos no se instituye por un acto supremo de gobierno. Sólo puede lograrse desde abajo, a través de la acción y de la lucha de las masas. Sólo las reformas que provienen de la acción de las masas tienen potencialidad revolucionaria. Las reformas superestructurales impuestas por la administración central tenderán inevitablemente a deformar el proceso revolucionario y concluirán por convertir al gobierno en un gobierno reformista, burocrático y paternalista.

Pero también dejamos en claro que:

La radicalización política del proceso no podrá ser resultado de la acción espontánea de los trabajadores de la ciudad y del campo. Por eso nos pronunciamos categóricamente en contra de las concepciones simplemente espontaneístas. Condenamos «las tomas indiscriminadas de sitios urbanos, de predios agrícolas, de fábricas, minas y edificios públicos o privados». Y agregamos: «Los partidos revolucionarios tienen como imperativo superior darla a la acción de las masas un objetivo estratégico y una gran bandera de lucha, cual es, la conquista del poder pleno para crear una nueva sociedad.

El proceso se concebía, sí, como resultado de la acción convergente del Estado y de la organización y movilización de las masas. Esta concepción excluye las connotaciones paternalistas y burocráticas, no pocas veces atribuida a la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas estatales y en otras áreas de la actividad nacional. En cierta medida, esas deformaciones estaban determinadas por la falta de una comprensión cabal del papel de las masas como protagonista decisivo del proceso trasformador, y como elemento esencial, a través del cual los triunfos políticos parciales debían traducirse en poder proletario. Allí donde la participación obrera fue real y efectiva, los resultados productivos fueron óptimos, más rápido el desarrollo de la conciencia política y más activa la presencia del pueblo trabajador en la defensa del proceso. Tal es el caso, por ejemplo, de la empresa textil Yarur: «El aumento de un 20% de la producción desde que se estatizó la empresa, observado políticamente vale un 100%, porque ése fue un

aumento basado en la conciencia de los trabajadores, basado en la dirección colectiva, basado en el odio al burgués, que los explotó durante décadas. Lo mismo puede afirmarse en los casos de Bellavista, del Carbón, de Purina, de Fiap y otras empresas estatizadas.» (Informe del CC del PS al Pleno de Algarrobo, febrero de 1972.)

La huelga patronal provocada en octubre de 1972, llevó a la Unidad Popular a crear una serie de organizaciones sectoriales, orientadas a neutralizar la movilización burguesa en algunos frentes de lucha donde la confrontación había adquirido especial intensidad. Se constituyeron así los Frentes Patrióticos de Mujeres, de Profesionales y de juventud; el Movimiento Patriótico de Renovación de los Trasportistas (MOPARE) y el Movimiento Amplio de Comerciantes. Estas organizaciones fueron creadas en forma precipitada, al calor de la exigencia formulada por la violenta ofensiva reaccionaria. No obstante ser el resultado de un trabajo mínimo e improvisado, encontraron una rápida y amplia acogida, desempeñando un papel valioso en los momentos más críticos del enfrentamiento.

La respuesta resuelta que el proceso encontró en la estructuración de organizaciones defensivas de los sectores de la pequeña burguesía. pone en evidencia una seria omisión: existió una posibilidad real, desestimada, de intentar un esfuerzo de mayor envergadura, en el seno de la pequeña burguesía. Los resultados fueron óptimos si consideramos que se trataba de iniciativas improvisadas, hechas con criterio de emergencia y bajo presión de circunstancias críticas. En todo caso, hubo una amplia respuesta de trasportistas, profesionales, comerciantes, mujeres, estudiantes y pequeños agricultores, a un requerimiento precipitado y carente de una perspectiva seria. Incluso la adhesión que estos sectores entregaron, no siempre contó con la atención debida y el respaldo decidido del gobierno, lo cual conspiró contra su eficacia y desarrollo.

Estos frentes y otros organismos promovidos por la Unidad Popular (Consejos de Administración, Comités de Producción), no obstante su generación inducida, eran también expresión -aunque con características propias- del nuevo poder de los obreros, campesinos y pobladores marginales.

El Poder Popular se construyó al margen de las organizaciones tradicionales de la clase obrera (Central única de Trabajadores, sindicatos, confederaciones campesinas, etc..), llenando en cierto modo vacíos no cubiertos por aquéllas. La notable experiencia contrarrevolucionaria de octubre de 1972, permitió hacer aflorar la extraordinaria potencialidad creadora y organizativa del proletariado y en general de las masas. Cuando la oligarquía dispuso la paralización del país, los trabajadores, por primera vez en la historia, enfrentaron copio clase «la huelga patronal». Toman en sus manos con inobjetable responsabilidad la tarea de mantener en pie la producción nacional. Ocupan las industrias y fundos abandonados, organizan el abastecimiento de la población, mantienen el funcionamiento de los servicios esenciales; en una palabra, sostienen en funcionamiento la economía cuando se pretendía ahogarla por la acción concertada imperialista-burguesa. Nunca en las luchas continentales la clase obrera como tal exhibió un caudal tan rico y variado de recursos. La reacción fue derrotada. Por primera vez en la historia del país, los trabajadores tuvieron la totalidad de las fábricas bajo su poder. Durante 26 días asumieron el control de la producción y la distribución de productos y mercancías.

Sin embargo, las luchas de octubre pusieron en evidencia la necesidad de coordinar las tareas de las más importantes áreas industriales y de defenderlas a través de estructuras de carácter popular. Así nacen los «cordones industriales» la expresión más dinámica, vigorosa y controvertida del nuevo Poder Popular. Los siete cordones creados -en los principales centros fabriles de Santiago- y los que más tarde se organizan en Concepción y Valparaíso, tienen su base casi exclusivamente en el proletariado industrial.

Pero además existe otra vertiente social que otorga al poder popular su connotación masiva y omnipresente : el subproletariado de la ciudad y del campo, hasta entonces ausente en las dilatadas luchas sociales del país.

En Santiago, como en la mayoría de las capitales sudamericanas, se ha concentrado en las últimas décadas una gigantesca y abigarrada masa periférica, producto de las incesantes migraciones del campo y las provincias a la metrópoli. En Chile, más de la tercera parte de su población vive en la capital y sus aledaños. Allí existe un inmenso cordón de miseria y atraso, en el cual habita el 40% de sus habitantes. Son las poblaciones marginales o «callampas», réplica criolla de las «favelas» brasileñas, las «villas miserias» argentinas y los «cantegriles» uruguayos.

Esta masa multitudinaria vive en condiciones subhumanas, carente de los servicios más esenciales -luz eléctrica, agua potable, alcantarillado, pavimento, teléfono; en viviendas infectas, al margen de la educación y de toda protección sanitaria.

Durante el gobierno de Frei se ensayaron con criterio paternalista algunas formas de organización de las poblaciones marginales, las cuales no alteraron en esencia su orfandad social.

Las tensiones liberadas por el proceso revolucionario, enfrentan violentamente a estos sectores con la necesidad de satisfacer expedita y directamente sus problemas. Se constituyen en factores de presión, buscan e imponen con criterio realista soluciones viables y adecuadas, e impiden en parte la mediatización de los organismos burocráticos estatales. La población marginal se activa en centros de madres y juntas de vecinos (creadas en la administración anterior), rescata estas organizaciones de los viejos esquemas populistas, las fortalece y las hace asumir nuevas tareas, sustituyendo de hecho los organismos del Estado. Nuevas organizaciones de base confluyen, a través de una poderosa red, en los Comandos Comunales, los cuales no dan tregua al aparato estatal: lo vigilan, lo presionan, lo denuncian y lo estimulan.

Podemos imaginar el inmenso potencial acumulado, si consideramos que sólo el subproletariado representaba aproximadamente una cuarta parte de la población total del país.

OBJETIVO ÚNICO : EL PODER

El efecto más impactante de esta voluntad de poder emergente en el seno de obreros, campesinos y subproletariado marginal, es la proyección directa e inmediata sobre su conciencia política y de clase. Incluyendo las grandes trasformaciones estructurales -nacionalización del cobre, reforma agraria, constitución de un área de propiedad socialningún otro hecho conmueve tan dramáticamente a las masas como la certidumbre de este nuevo fenómeno: sentirse y saberse protagonistas principales de una experiencia histórica inédita. Descubren el valor de su fuerza congénita, no como simple referencia retórica y discursiva, sino como realidad práctica y actuante. Al igual que en otros procesos, el proletariado revolucionario y los campesinos políticamente más evolucionados, empiezan a confiar, ante todo, en sus propias fuerzas. Dudan de las posiciones vacilantes, no admiten las «medias tintas», su programa «mínimo» pasa a ser la revolución. El fenómeno, naturalmente, se da en medio de una gran confusión táctica, política e ideológica, pero dentro de la más diáfana claridad estratégica: ganar el poder.

Si hay algo de sorprendente en la experiencia chilena, fue la extraordinaria lucidez de las masas para prever la insurgencia del fascismo. Sus organizaciones de base fueron casi más receptivas al desenlace fatal e inminente que sus direcciones políticas. No sólo entendieron que la institucionalidad burguesa se había revertido contra la revolución, sino además, percibieron con claridad la dictadura fascista como régimen sustitutorio. Esta lucidez no era consecuencia de poderes clarividentes ni del simple instinto de conservación. Era el efecto natural del alto grado de capacidad política y de conciencia revolucionaria alcanzado en el ejercicio de «su poder». De allí la firmeza con que demandan la adopción de medidas necesarias para asegurar la defensa del proceso. De allí sus reiteradas expresiones de inquietud y desconfianza.

El 5 de septiembre de 1973, apenas una semana antes del asalto fascista, todos los órganos de Poder Popular de la provincia de Santiago, dirigieron una carta pública al presidente Allende. Este documento constituye una curiosa radiografía demostrativa de la extraordinaria intuición de las masas. Tras la descripción de la dramática coyuntura vivida, contiene el requerimiento categórico y severo, en orden a romper la dinámica defensista y de repliegue que atrapaba a la dirección revolucionaria.

Aquella histórica y dramática requisitoria empieza por señalar la convicción del desenlace fatal:

Ha llegado el momento en que la clase obrera, organizada en la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales, el Comando Provincial de Abastecimiento Directo, y el Frente Unido de Trabajadores en Conflicto, ha considerado de urgencia dirigirse a ustedes, alarmados por el desencadenamiento de una serie de acontecimientos, que creemos nos llevarán no sólo a la liquidación del proceso revolucionario, sino a corto plazo, a un régimen fascista del corte más implacable y criminal. Antes teníamos el temor de que el proceso al socialismo se estaba transando, para llegar a un gobierno de centro, reformista, democrático-burgués, que tendía a desmovilizar a las masas o a llevarlas a acciones insurreccionales de tipo anárquico, por instinto de conservación. Pero ahora, analizando los últimos acontecimientos, nuestro temor ya no es ése, ahora tenemos la certeza de que vamos a una pendiente que nos llevará inevitablemente al fascismo.

Los trabajadores veían, palpaban y sentían exasperadamente cómo la ofensiva adversaria carecía de respuesta. El cerco burgués-imperialista no tenía correlato en el accionar del gobierno. La impunidad de la reacción aparecía garantizada, a sus ojos, por una política defensiva, de apaciguamiento y retroceso constante.
Tras una gráfica y minuciosa descripción de la situación, que mantiene al gobierno y al pueblo a la defensiva, los trabajadores previenen sobre los acontecimientos por venir. Su anuncio parece premonitorio. El acontecer se encargará de confirmarlo línea por línea, desde el formidable error del freísmo hasta la factura brutal de la tiranía militar:

Claro que el señor Frei también es ingenuo, porque cree que tal dictadura militar seria sólo de transición, para llevarlo a él a la postre a la presidencia. -Estamos absolutamente convencidos que históricamente el reformismo que se busca a través del diálogo con los que nos han traicionado una y otra vez, es el camino más rápido hacia el fascismo. -Hasta hace poco «fascismo» era solamente una palabra que no todos los compañeros comprendíamos. Teníamos que recurrir a lejanos o cercanos ejemplos: Brasil, España, Uruguay, etc.. -Pero ahora ya lo hemos visto en carne propia, en los allanamientos, en lo que está sucediendo a marinos y suboficiales, en lo que están sufriendo los compañeros de Asmar, Famae, los campesinos de Cautín. -Ya sabemos que el fascismo significa terminar con todas las conquistas logradas por la clase obrera, las organizaciones obreras, los sindicatos, el derecho a huelga, los pliegos de peticiones. -Al trabajador que reclama sus más mínimos derechos humanos, se le despide, se le aprisiona, tortura o asesina. consideramos que no sólo se nos está llevando por el camino que nos conducirá al fascismo en un plazo vertiginoso, sino que se nos ha estado privando de los medios para defendernos. -Por lo tanto, le exigimos a usted, compañero Presidente, que se ponga a la cabeza de este verdadero ejército sin armas, pero poderoso en cuanto a conciencia, decisión que los partidos proletarios pongan de lado sus divergencias y se conviertan en verdadera vanguardia de esta masa organizada, pero sin dirección.

Señalarán finalmente que si su requerimiento no es escuchado: en este país habrá no una guerra civil, que ya está en pleno desarrollo, sino una masacre fría, planificada de la clase obrera más consciente y organizada de América Latina y la destrucción y descabezamiento quizás a qué plazo y a qué costo sangriento, de no sólo el proceso revolucionario chileno, sino también el de todos los pueblos de Latinoamérica que están luchando por el socialismo.

El rasgo más característico de la nueva conciencia que alienta la formación del poder popular, es su autonomía. Sin embargo, ésta no se formula básicamente en un plano competitivo y antagónico con la dirección política del movimiento popular. Expresa en cierto modo la agudización y polarización del proceso, cuya velocidad ha replegado -a pesar suyo- a las vanguardias políticas, reflejando su imprevisto dinamismo. Esto lleva a las masas a concebir nuevos métodos de

lucha, diseñar caminos originales y asumir misiones de envergadura, sin desdeñar los mecanismos estatales, pero tampoco atados a ellos.

El poder popular contaba con sus propios medios de difusión. Los Cordones Industriales editan periódicos de gran circulación, los Comandos Comunales publican otros de tiraje local, hacen afiches, publican folletos, lanzan volantes. Nace así una prensa obrera combativa y ágil, donde la clase contabiliza sus luchas y experiencias.
En términos generales el poder popular se manifiesta como una estructura de apoyo al Gobierno Popular. En términos generales sus acciones estuvieron orientadas a concretar iniciativas y tareas gubernamentales, a colaborar en el plano de las soluciones locales y a facilitar la atención de problemas a los cuales no accedía con agilidad la burocracia estatal. Como fenómeno social, lo hemos dicho, atemoriza profundamente a la clase dominante. Por primera vez ésta percibe al proletariado no como una masa primaria, ignara, difusa, incoherente y fragmentada, sino como un todo compacto, sólido, con plena conciencia de su identidad y con la firme voluntad de desplazarla del poder. Y no se trata sólo de un temor abstracto. Cuando el proletariado desfila, cuando realiza sus actos y grita sus consignas, cuando ve sus puños levantados al cielo, la burguesía siente pavor físico y se repliega en sus mansiones.

Era ya tradicional en Santiago, que cuando los obreros de la municipalidad de Las Condes, una de las comunes acomodadas de la capital, se desplazaban al centro de la ciudad a través de las arterias elegantes, se entornaban las puertas de los establecimientos comerciales y se cerraban rigurosamente las entradas de las grandes residencias. Nunca aquellos trabajadores habían quebrado un solo vidrio de una ventana o cometido un desmán. Pero en ellos la burguesía visualizaba el despertar de una clase a la que temía, en la misma medida que odiaba.

Globalmente la up no comprendió ni captó la poderosa fuerza inmersa en el Poder Popular. Lo percibió como una expresión «izquierdista» y anarquizante de cuyo control desconfiaba.

Esta actitud tenía sin embargo una fundamentación lógica. El proceso revolucionario había abierto una brecha creciente entre exigencias y respuestas. La necesidad objetiva de conquistar el poder, agudizada por la violencia de la confrontación social, se había elevado a niveles extremos, y demandaba un correlato natural en la madurez política y orgánica de la conducción revolucionaria, en la unidad y coherencia efectiva de la dirección y en una mayor capacidad para organizar al pueblo en la lucha por la disputa del poder.

Para ello era indispensable trasformar la dirección de la Unidad Popular en una dirección única y coherente. Sin embargo, los acontecimientos adoptaron un ritmo no previsto ni deseado por la dirección. Las respuestas quedaron rezagadas, y quizás en esto se encuentre la clave metodológica para explicar muchos de los problemas del movimiento popular.

A esta altura, la fuerza de la revolución se manifestaba en tres niveles: el Gobierno Popular, la Unidad Popular y sus organizaciones políticas y sindicales y el Poder Popular. En el contexto de un lineamiento estratégico correcto, estos tres niveles tenían que actuar en forma armónica y coherente. Bajo este supuesto, el poder popular debía generarse en la base, con el apoyo del gobierno y bajo la dirección de la Unidad Popular, aunque independiente del aparato estatal. Así, pasaba a ser un poder convergente, cuya autonomía no era necesacio cuestionar y en el que estaba la presencia educadora y la orientación de la dirección revolucionaria.

Ausente -en parte- este factor direccional y un correcto diagnóstico de la naturaleza y vitalidad del nuevo poder, se le empuja peligrosamente a una desviación: la de desarrollarse como poder alternativo o dual, antagónico al Gobierno Popular.

Esta desviación «izquierdizante» adquiere cierta solidez al tratar de trasponer mecánicamente a Chile, la experiencia de los «soviets rusos» en el período comprendido entre febrero y octubre de 1917.

Efectivamente, los «soviets» constituyeron la forma por excelencia de poder popular y como estructura político-social, en su generación y en su desarrollo, exhiben cierta analogía con el fenómeno chileno. También es efectivo que devinieron en una instancia paralela y alternativa a las instituciones del Estado burgués encabezado por Kerensky. Hasta aquí el símil parece aceptable. Pero si el doble poder exhibe plena legitimidad en la Rusia de 1917, es porque el poder estatal en términos absolutos, era instrumento de la burguesía. Y cuando los bolcheviques dirigieron la insurrección bajo la consigna: «¡Todo el poder a los soviets!», estaban buscando la sustitución de un Estado, en el cual los trabajadores no estaban presentes. No era, por cierto, el caso de Chile. Ver al Gobierno Popular como enemigo, prescindir del hecho de que éste se había constituido en la principal palanca de poder de la clase trabajadora y del campesinado, era un error, y un inexcusable subjetivismo.

A modo de conclusión nos atrevemos a afirmar que el Poder Popular generado al calor de la experiencia revolucionaria chilena jugó un papel real y extraordinariamente positivo. Lamentablemente la dirección del proceso no tuvo capacidad para comprender la vitalidad y riqueza creadora liberada en el seno de las masas. No fue capaz de captarlas y canalizarlas en favor de la Revolución.

8.- EL «IZQUIERDISMO» EN LA EXPERIENCIA CHILENA

En el debate sobre el proceso revolucionario chileno, se atribuye una relevancia inusitada a las actividades del «izquierdismo», el cual no pocas veces ha sido aislado como factor decisivo de la derrota. Pero es indudable que esta exhibición magnificada de su conducta e influencia, no guarda proporción alguna con la debilidad física y la precaria fuerza ideológica del «gauchismo» chileno.

Su expresión orgánica más importante radica, sin duda, en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que nace en los primeros años de la década del sesenta, como un grupo pequeñoburgués de influencia localizada en la ciudad de Concepción. También -forzoso es reconocerlo- «la mentalidad izquierdista» encontró audiencia, aunque de manera limitada e inorgánica, en algunos sectores del Partido Socialista. Grupos trotskistas y chinoístas, prolíferos en otros países de América Latina, en Chile no tuvieron eco y apenas alcanzaron algún grado de desarrollo.

Desde su nacimiento en 1965, el MIR sólo tuvo un crecimiento discreto. Si bien se organiza en las provincias más importantes del país, no llega a configurar un núcleo de influencia real en el seno de las masas: ni en la clase obrera, ni en el campesinado, ni en los sectores marginales. Tampoco logra penetrar en el conjunto del estudiantado universitario, ámbito en el cual nace y despliega mayor dinamismo.

Sus frentes de masas, orgánicamente bien estructurados, no evidenciaron progresos cuantitativos importantes. En las últimas elecciones de la Central única de Trabajadores, avanzado ya el proceso revolucionario, levantaron la candidatura de Clotario Blest, vieja y venerable figura del movimiento obrero chileno, y a pesar de ello difícilmente logran superar el 2% de los votos. En las confrontaciones estudiantiles -salvo en la Universidad de Concepción- su fuerza era sólo ligeramente superior a la de la CUT. En las elecciones para designar rector de la Universidad de Chile -en la cual también votaban los estudiantes y el personal administrativo- con un candidato propio, opuesto a los de la Unidad Popular y la derecha, el MIR obtuvo una ínfima proporción de votos.

De otra parte, jamás participó directa ni indirectamente en la gestión gubernativa. Por el contrario, su posición frente al gobierno era globalmente crítica, ofreciéndose siempre como una alternativa. Los contactos UP-MIR fueron sólo ocasionales, y por lo general sobre cargados con una fuerte dosis de sectarismo. Con el PS las conexiones fueron bastante más estrechas, pero tampoco se tradujeron en relaciones estables y orgánicas.

Considerando estos hechos, es absolutamente equivocado atribuir a la ultraizquierda una responsabilidad desproporcionada a su real peso y capacidad, en la evolución del proceso social y político chileno, y menos aún, en su desenlace final. En Chile, la ultraizquierda no tenía fuerza ni influencia en el pueblo ni gravitación real en el gobierno. No obstante haber planteado algunas críticas correctas a la dirección revolucionaria de la UP, su concepción en conjunto fue errónea. Sus errores sólo tuvieron el alcance que les otorgaba su condición de minoría pequeñoburguesa básicamente subjetiva. Esta afirmación en modo alguno pretende desconocer el daño y los problemas, no escasos, causados al Gobierno Popular, por la mentalidad inmadura y las acciones espontaneístas del «izquierdismo».

Indudablemente, éstas facilitaron el juego del adversario, alimentando la tenaz campaña reaccionaria implementada metódicamente para amplificar la magnitud, el alcance y los efectos de las acciones ultristas, las que directa o indirectamente, eran atribuidas al gobierno y al conjunto de la izquierda. El formidable aparato de difusión de la burguesía - EL Mercurio a la cabeza- escandalizaban diariamente sobre excesos reales o ficticios acaecidos en Chile o en el extranjero. Titulares, comentarios y editoriales mantenían las prácticas del izquierdismo en el centro de la noticia. Así, mientras por una parte se transferían a la población imágenes de inquietud y de temor, por otra se creaban artificiosamente legitimantes morales a la estrategia insurreccional del imperialismo. El ejemplo más elocuente de los servicios inconscientes prestados a la contrarrevolución, fue sin duda el asesinato del ex ministro Edmundo Pérez Zujovic, perpetrado por una insignificante organización extremista. Aquel acontecimiento dramático, ajeno en absoluto al gobierno y a los partidos populares, hizo posible soldar anticipadamente la fractura aún subsistente en el seno de la burguesía. Por cierto este fenómeno era inevitable en el acontecer chileno. No dependía de un crimen tan estúpido como inútil, pero éste dio el pretexto moral y político que el freísmo esperaba para unificar la oposición burguesa.

La ultraizquierda chilena no se singulariza respecto de otras expresiones similares existentes en América y en Europa. Quizá sí su única característica distintiva sea su resistencia al fraccionamiento grupuscular, en el que se han atomizado las diversas versiones latinoamericanas y europeas. En general no hay variantes fundamentales: la misma incapacidad básica para ligarse con las masas; idéntica insuficiencia para expresar los intereses históricos de la clase obrera; la misma tendencia a interpretar subjetiva y dogmáticamente la realidad y el mismo vértigo irresistible al verbalismo insurreccionalista. Al igual que en el resto del mundo, carece de definición y ubicación frente a las grandes fuerzas internacionales en pugna, cual no sea una franca y declarada aversión antisoviética. Toda disensión en el campo socialista es acogida con entusiasmo, aunque ella se plantee desde posiciones reformistas o nacionalistas estrechas. Como expresión social, el «izquierdismo» también representó en Chile las tendencias revolucionarias de la pequeña burguesía ilustrada.

Sin embargo, preciso es reconocer que el MIR, en cuanto expresión orgánica del «izquierdismo» criollo, logró superar en el quehacer de sus militantes, defectos y vicios hondamente arraigados en las ideas y conductas de militantes de otros partidos de la izquierda chilena. Estas deficiencias conforman una verdadera «mentalidad», que tipifica el revolucionarismo pequeñoburgués: ausencia de aptitud para la tarea anónima y diaria; individualismo refractario al trabajo colectivo; insatisfacción permanente; inestabilidad emocional que oscila entre la euforia exitista y la depresión derrotista. Además, esta mentalidad es hostil a cualquier disciplina y rechaza todo comportamiento orgánico y metódico; se nutre en la rebeldía y en el impulso emocional; mientras políticamente se desgasta en un liberalismo desintegrador, que esteriliza todo accionar coherente y sistemático.

Reiteramos que esta «mentalidad» se dio en Chile principalmente fuera del MIR. Éste, bajo un severo sistema de centralismo democrático, con sólidos hábitos de disciplina, trabajo y sacrificio, no ofrecía un «terreno de cultivo» adecuado para su desarrollo. Proliferó en cambio, en estructuras orgánicamente menos rígidas, de vida interna más flexible y liberal, condiciones ambientales necesarias para el ejercicio del verbalismo sin destino y de la prédica sin práctica.

En el quehacer del movimiento popular chileno, antes y durante el proceso revolucionario, la ultraizquierda demostró siempre una pertinaz incomprensión del problema de las alianzas. Desde un pretencioso «purismo revolucionario», descalificó sistemáticamente toda clase de compromisos, los cuales eran presentados como transacciones espurias o bien traiciones. Subvalorizaban la imprescindible tarea revolucionaria consistente en acumular fuerzas, prescindiendo, voluntarista y temerariamente, de toda evaluación real del poder del enemigo. Desde estas concepciones, se desinteresaron por cualquier esfuerzo orientado a ganar o neutralizar a las capas medias, a las cuales, por el contrario, su accionar atemorizaba y su verbalismo revolucionario alejaba.

Frente al Gobierno Popular y a la que el MIR llamó «izquierda tradicional», asume una presuntuosa postura alternativista. Su incapacidad para realizar un análisis teórico correcto de la realidad nacional, impulsó al «izquierdismo» a desconocer la inmensa importancia que tenía para la revolución ganar una posición importante del poder burgués, en la perspectiva de capitalizar fuerzas y mejorar sustantivamente su correlación. Esto lo llevó a ubicarse, invariablemente, en posiciones antagónicas al llamado reformismo de los partidos obreros.

El Informe del Pleno de Algarrobo, del Comité Central del Partido Socialista, celebrado en febrero de 1972, precisó acertadamente las características esenciales de la política «izquierdista» frente al proceso:

La esencia de la política del MIR es levantar una alternativa distinta de la que ofrece la UP. A juicio del MIR, el programa de la UP no es revolucionario y la alianza que lo sustenta no es revolucionaria; luego el Gobierno Popular tiene un carácter de conciliación de clases y reformista; en definitiva, Chile no está viviendo un proceso revolucionario. Para el MIR lo revolucionario sería un programa que plantease terminar de una sola vez con todas las formas de explotación, basado en una alianza de obreros y campesinos casi exclusiva y un proceso en que se enfrentan violentamente los explotados con todos los explotadores (imperialistas, monopolios, terratenientes, burguesía mediana y pequeña, etc..). Desconoce en general, en sus acciones, la necesidad de acumulación de fuerzas junto al proletariado, de aprovechar aunque sólo sea circunstancialmente las contradicciones de intereses por pequeñas que sean entre los medianos y pequeños empresarios por un lado y los monopolios y la gran burguesía por otro. Se niega a reconocer el valor del gobierno en manos de los trabajadores, para debilitar y socavar el poder económico, ideológico e institucional de los enemigos fundamentales.

Durante los tres años del Gobierno Popular, la conducta de la ultraizquierda está sellada por el peso y variedad de sus desviaciones. Es maximalista e impaciente. Trata de situarse siempre a «la izquierda de la izquierda», moviéndose en una dicotomía irreal: blanco o negro, todo o nada. Tiende a considerar las medidas y métodos radicales, como los más revolucionarios, y a trasformar el objetivo final en inmediato.

Sus actuaciones estuvieron -por lo general- marcadas por el signo de la improvisación y el halago indiscriminado a las masas. Una proclividad agitativa inorgánica lo empuja a la acción por la acción misma. Si hay posibilidad de tomar una predio agrícola o una pequeña o mediana industria, impulsa de inmediato la tarea, al margen de cualquier consideración, sobre su justificación y consecuencias.

Esta evasión de la realidad, condujo al ultrismo a formular llamados abiertos a la división horizontal de las Fuerzas Armadas. Típico error subjetivista, que prescindía del formidable peso de la ideología castrense, esencialmente jerárquica y disciplinada, sobre todo en el caso chileno.

Los empeños por ordenar la economía, elevar la producción, imprimir eficiencia y disciplina en el trabajo, eran considerados como preocupaciones de «tecnócratas» y «reformistas».

Incapaz de entender el verdadero papel del «poder popular», trató de arrastrarlo hacia una posición alternativista; trasformarlo en un doble poder, opuesto al conjunto de la institucionalidad burguesa, olvidando que en órganos importantes de ésta estaban instaladas las fuerzas populares. En esa perspectiva, confluía a deteriorar la autoridad del gobierno, estimulaba la indisciplina, introducía brechas en la unidad de la izquierda, y contribuía a confundir a la clase obrera y al campesinado.

De otra parte, y a pesar de su fetichismo armado, apelaba ingenuamente a la exaltación de un poder popular desprovisto de fuerza militar de sustentación. Un poder popular sin armas, frente a un poder burgués armado hasta los dientes.

En esta forma, vemos cómo la ultraizquierda incurre frente al proceso revolucionario, desde puntos de vista opuestos, en similar incapacidad a la demostrada por otros sectores del movimiento popular, cuyas desviaciones de derecha los inhabilitaba para comprender el papel que las instituciones democráticas desempeñaban en el proceso, y las condiciones y coyunturas que exigían su remplazo.

Mientras para unos, el peso de la institucionalidad operaba mecánicamente sobre las Fuerzas Armadas, coartando su papel natural en la lucha de clases, otros idealizaban un poder popular milagroso y omnipresente capaz por sí solo de derrotarlas militarmente. Mientras unos acusaban su desconfianza en la fuerza de las masas y en su capacidad creadora, refugiándose en la legalidad burguesa, otros atribuían al espontaneísmo de aquéllas una suerte de poder

mágico y autosuficiente. Mientras unos alzaban la consigna de «la batalla por la producción», trasformándola en la respuesta principal a los problemas, otros despreciaban el ordenamiento económico y financiero, la disciplina en el trabajo y la preocupación por la eficiencia, como meras desviaciones reformistas y tecnocráticas. Mientras por una parte, se radicaba poco menos que el destino del proceso revolucionario chileno, en la posibilidad de establecer un «entendimiento en la cúpula» con la Democracia Cristiana; de otra, se desestimaba el empeño por atraer a sus bases, y en general, por ganar a las capas medias para la revolución o bien neutralizarlas.

En cada situación general o particular del proceso, frente a los pequeños o grandes problemas planteados, se manifestaban inalterablemente los mismos criterios reiterativos y polarizados. El mismo maniqueísmo conceptual.

No obstante, y deseamos insistir en ello, a nuestro juicio es una grave equivocación suponer una especie de equilibrio compensatorio entre «las desviaciones de derecha» y «las desviaciones de izquierda». Estas últimas, con ser graves, múltiples y profundas, carecían de real peso en el movimiento revolucionario chileno. En definitiva, serán las desviaciones de derecha las condicionantes esenciales del epílogo trágico.

Se ha insistido en enfatizar sobre el papel disgregador jugado en ciertas coyunturas por el MIR e incluso por algunos militantes del Partido Socialista y de otras colectividades de la UP. Es necesario enfrentar tal concepción en términos adecuados. No desconocemos los efectos negativos provocados por planteamientos y acciones que facilitaron el trabajo de la reacción. Pero como lo hemos adelantado, atribuirle a este quehacer un carácter definitorio en el desenlace, es una ligereza analítica o un subterfugio intelectual, que no pretende otra cosa que distraer la atención sobre las verdaderas y profundas causas de la derrota.

Finalmente, pensamos se incurre en una seria omisión cuando se mide el valor de la ultraizquierda sólo en función de sus debilidades y desviaciones. Desde luego, conformaban una expresión revolucionaria. Ello no está en discusión. En las luchas sociales de la última década dilapidaron coraje y desinterés, asumiendo sin reserva el compromiso revolucionario.

El MIR, no obstante su desarrollo insuficiente en el seno de las masas, nunca fue percibido como un grupúsculo intrascendente. Aportó a las luchas de nuestro pueblo un plantel direccional de extraordinario valor intelectual y político, y un contingente cualitativamente significativo de cuadros eficientes y disciplinados, cuya aptitud y valor han sido generosa y ampliamente confirmados en -la lucha contra la tiranía.

Miguel Enríquez, su más alta y consecuente expresión, muere heroicamente, asesinado por el fascismo, después de haberlo enfrentado durante más de un año desde la clandestinidad. Su muerte, tanto como su vida y su ejemplo, le ubican entre los revolucionarios más destacados del continente. Muchos de sus camaradas han seguido el camino señalado por él, ganando la gratitud y el respeto de nuestro pueblo.

Por ello, en la misma medida en que hemos discrepado de sus posiciones, también hemos defendido su derecho a transitar junto a los partidos de izquierda en las luchas venideras. Si logran superar sus debilidades, sin duda representan en Chile un potencial de energía revolucionaria que sería torpe desperdiciar.

9.-ESTADOS UNIDOS Y EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO

CHILE: UN MODELO NO PREVISTO

Casi exactamente diez años después del triunfo de la Revolución cubana, accede al gobierno de Chile un movimiento popular, cuyo eje central son los dos partidos marxistas más poderosos del continente, exceptuando el cubano.

La victoria popular, alcanzada a través de elecciones libres y democráticas, suponía una innovación imprevista en las tácticas revolucionarias, la cual sorprende y al parecer rebasa las barreras defensivas militares del sistema interamericano. Éste se había adecuado para enfrentar «al marxismo» en el terreno de la guerrilla militar, conforme al canon impuesto por el éxito de la experiencia cubana.

Cuba alteró -con la poderosa fuerza expansiva de su ejemplo -el esquema político latinoamericano. De hecho irrumpe como un formidable factor dinamizador de las luchas revolucionarias de liberación. Abre nuevos caminos y señala nuevas perspectivas que agitan las aguas quietas de los años anteriores. La guerrilla sacude la tranquilidad del sistema de dominación y amenaza con «incendiar la pradera». Los dispositivos de defensa se readecuan rápidamente para enfrentarla y derrotarla. En definitiva lo consiguen.

Pero en la misma medida en que la Revolución cubana se proyecta sobre las masas como factor concientizador, concientiza también a las clases dominantes. Éstas empiezan a visualizar -desde entonces- en cada movimiento popular emergente el peligro de un salto cualitativo hacia el socialismo. Cuba es entonces para la América Latina de 1960, lo que la Revolución bolchevique fue para la Europa de los años veinte.

Esta doble incidencia de la Revolución cubana se proyecta en toda su dimensión, cuando Fidel Castro visita Chile, en diciembre de 1971. Lo recibe en Santiago un millón de personas. La más grande manifestación de masas vista en la historia del país. A lo largo de todo Chile los trabajadores se agitan con entusiasmo y fervor revolucionario y se desplazan para dialogar con Fidel. Es el impacto sobre el pueblo. Pero aquella visita marca también el inicio de la contraofensiva burguesa, la cual adquiere también consistencia masiva. La reacción vislumbra en el huésped indeseado el peligro de la reiteración en Chile de una experiencia que le es hondamente hostil y a la cual teme por sobre todas las cosas.

La victoria de 1970 logra neutralizar los mecanismos defensivos del sistema no sólo por la novedad de la variante, sino también, por la legitimidad política y moral de una victoria de «partidos marxistas», que proclaman una vía revolucionaria en pluralismo, libertad y democracia. Aun cuando se había hecho lo necesario -en términos tradicionales- para impedir el triunfo de Allende, no estaban preparados todavía para evitarlo en términos militares.

EL GOBIERNO POPULAR FRENTE A ESTADOS UNIDOS

El Gobierno Popular no desestimó la magnitud del problema, que su sola existencia significaba para EU, ni la influencia que sus relaciones tendría sobre el trascurso del proceso revolucionario.

En los primeros meses de su administración, el presidente Allende anunció la decisión de desarrollar una política amistosa con EU. Se trataba de ejercer a plenitud la soberanía nacional, sin concesiones principistas y en un plano de entendimiento y de respeto mutuo, que suponía por parte de Norteamérica una disposición básica para comprender la legitimidad moral y política del quehacer del gobierno chileno. Así lo dejó establecido el Presidente en su primer Mensaje Constitucional al Congreso:

Es propósito de mi gobierno mantener con los Estados Unidos de América relaciones amistosas y de cooperación. Nos hemos empeñado en crear las condiciones de comprensión hacia nuestra realidad, que impidan la generación de conflictos y eviten que cuestiones no esenciales perjudiquen ese propósito obstaculizando las soluciones negociadas y amistosas de los problemas que puedan plantearse. Creernos que esta conducta realista y objetiva, será correspondida por el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos.

En esta perspectiva los puntos más conflictivos contemplados por el Programa de Gobierno no fueron abordados y se prefirió diferirlos, a fin de no provocar conflictos artificiales, eventualmente utilizables por EU. Así por ejemplo, no se denuncian los pactos militares de ayuda mutua ni la Carta de la OEA, como lo establecía el programa. Por el contrario, y volveremos a insistir sobre ello, la ayuda militar de EU se mantuvo y elevó en términos por demás sugestivos.

En el plano internacional, se situó a Chile en una posición independiente, incorporándolo activamente al movimiento de países «No Alineados». Nunca pretendió el gobierno de Allende ubicar a Chile en el campo socialista, entendiendo que sus condiciones socioeconómicas y políticas lo identificaban con la problemática del Tercer Mundo.

Chile reivindicó el derecho soberano de establecer relaciones -sin consultas obsecuentes- con todos los países del mundo. Así lo hace con Cuba, el Gobierno Provisional Revolucionario de Vietnam del Sur, la República Democrática de Vietnam, la República Popular Democrática de Corea, la República Democrática Alemana y la República Popular China. En estos dos últimos casos EU presionó abiertamente por impedirlo. Aun cuando Nixon ya había anunciado su viaje a China, deseaba mantener la unidad del bloque regional y evitar el establecimiento de relaciones bilaterales.

En el plano de las relaciones económicas, el comercio con EU continúa siendo el más importante. No hubo acto del Gobierno Popular orientado a reducirlo.

Ya hemos señalado cómo en el plano de las relaciones militares no existió ninguna intención dirigida a desconocer la

vasta red de compromisos existentes. Se mantienen los programas de formación de oficiales en Panamá y los cursos de adiestramiento en diferentes centros militares norteamericanos; no se obstaculiza el desarrollo de las «Operaciones Unitas»,(1) programadas anualmente con la Marina norteamericana; y tampoco se alteran los programas de adquisiciones bélicas contempladas en el pacto militar.

No obstante, la más trascendente medida adoptada por el Gobierno Popular -la nacionalización del cobre- hiere importantes intereses privados norteamericanos.

La recuperación de los recursos básicos constituía -como más de alguna vez lo expresara el presidente Allende- una reivindicación histórica. Aproximadamente el 80% de las exportaciones nacionales provenían del cobre controlado por monopolios extranjeros, los cuales durante medio siglo habían expoliado el patrimonio de la nación, transfiriendo al exterior el grueso de sus utilidades. No fue éste un acto arbitrario y unilateral del gobierno «marxista». La nacionalización del cobre se efectúa por decisión unánime del Parlamento, en el cual la coalición gobernante estaba en minoría.

Y bajo el amparo de las mismas disposiciones constitucionales, el Gobierno Popular, reparando una injusticia histórica, y con la más plena legitimidad moral, acuerda deducir de las indemnizaciones a pagar, las utilidades excesivas, consideradas como tales, las que excedían del 12% anual, a contar desde 1955.

De tal modo eran exorbitantes las ganancias acumuladas en los últimos 15 años, que al establecerse como utilidad más que razonable el porcentaje señalado, las empresas expropiadas vieron seriamente reducidas sus indemnizaciones y algunas, incluso, quedaron adeudando ingentes sumas.

Esta resolución afectó fundamentalmente los intereses de Anaconda Company y de Kennecott Cooper Co., copropietarias de las empresas de la gran minería del cobre : Chuquicamata, El Salvador y «La Exótica», la primera; y «El Teniente», la segunda.

No está de más señalar que las empresas nacionalizadas habían emprendido planes de expansión, los cuales -no obstante las extraordinarias utilidades percibidas- fueron financiados con créditos externos. Los planes aprobados y ejecutados bajo el gobierno de Frei, en gran medida fracasaron, lo que no fue óbice para que el Estado chileno, en cumplimiento de las disposiciones legales, se hiciera cargo de las deudas contraídas, ascendentes a la enorme cifra de 727 millones de dólares.

En resumen, Chile observó escrupulosamente el ordenamiento jurídico interno y las normas del derecho internacional. En resguardo de la vida de su pueblo y de su soberanía, afectó legítimamente intereses privados norteamericanos, que por décadas expoliaron su economía y sellaron su retraso. Al hacerlo, invocó las propias resoluciones de las Naciones Unidas, las cuales reconocen el derecho soberano de cada país a disponer de sus recursos naturales.

Por hacerlo fue víctima de una encarnizada agresión, agresión artera y terriblemente eficaz, destinada a sancionar el ejercicio de sus derechos como Estado soberano.

Finalmente, debemos consignar que otras importantes empresas norteamericanas fueron expropiadas mediante acuerdos bilaterales entre el Gobierno Popular y las compañías afectadas. Así ocurrió, entre otros casos, con el First National City Bank, la Bethelem Steel Corp. y la Cerro Corporation, que era propietaria del mineral de cobre «La Andina».

AGRESIÓN: RESPUESTA NORTEAMERICANA

El proceso de trasformaciones no podía llevarse adelante sin enfrentar las naturales dificultades y resistencias externas. Así lo entendíamos. Ello era previsible en la perspectiva del ominoso historial intervencionista norteamericano.

Sin embargo, la decisión y magnitud de la agresión superó en mucho aquella previsión.

Nixon, quien «casualmente» había olvidado enviar el saludo de rigor al nuevo mandatario, expresó en un primer instante que «EU mantendría con Chile las relaciones que Chile quisiera tener». Una afirmación razonable. Pero los hechos demostraron más tarde, que cuando el presidente norteamericano la formulaba, tanto él como el Departamento de Estado ya habían elaborado y puesto en ejecución una estrategia de guerra.

El gobierno norteamericano, en el ejercicio de los derechos «legítimos» que hoy reclama y proclama Ford, interviene, especialmente en las dos últimas elecciones presidenciales, para impedir que las fuerzas populares puedan acceder al gobierno. Debemos recordar, que en 1964 aportó a la candidatura demócrata cristiana la suma de tres millones de dólares. Otros cinco millones de dólares habrían sido infiltrados en 1963 por intermedio del sacerdote jesuita Roger Vekemans para ayudar también al triunfo de Frei, hecho denunciado por el New York Times.

Durante la campaña presidencial de 1970 la ayuda financiera fue reorientada hacia la candidatura de Jorge Alessandri. El diputado norteamericano Michael Harrington denunció la entrega de otras importantes cantidades de dólares a los partidos de oposición en cartas dirigidas simultáneamente, el 18 de julio de 1974, al presidente de la Cámara de Representantes, Thomas Morgan, y al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, William Fulbright. Esta denuncia es elocuentemente expresiva de la desvergonzada intervención practicada en Chile durante los últimos diez años.

(1) Se da este nombre a las maniobras conjuntas que anualmente realiza la Marina de EU y sus congéneres de América Latina.

El triunfo sorpresivo de Allende lleva a la CIA y al Departamento de Estado a buscar una fórmula que permita revertir el resultado de los comicios electorales. Inicialmente -según Colby- se autorizó el gasto de 350 mil dólares para soborno de congresistas chilenos en los momentos en que el Parlamento debía decidir entre Allende y el candidato de la reacción. (El soborno fue evaluado posteriormente como ineficaz.)

Se decide entonces recurrir a métodos más expeditivos. El New York Times pone en descubierto las diversas variantes consideradas para impedir que el presidente electo asumiera el poder. El influyente periódico norteamericano señala que Richard Nixon dio carta blanca a la CIA, en 1970, para evitar la asunción de Allende y que su director adjunto Thomas Karamossines (jefe de operaciones encubiertas) fue enviado de inmediato a Santiago. Citando «fuentes gubernamentales autorizadas» el diario añade que la cIA se «halló así implicada en dos tentativas de golpe militar y que ambas preveían el secuestro del general René Schneider, comandante en jefe del Ejército, asesinado cuando resistió a sus agresores». Una de ellas estaba liderizada por el general Roberto Viaux (quien posteriormente denunció ante los tribunales militares la participación en el complot del propio Frei) y la otra, a cargo de un grupo encabezado por el general Camilo Valenzuela, jefe militar de la provincia de Santiago, «al que se llegó a facilitar armas que más tarde fueron recuperadas sin que pudieran ser utilizadas».

Según el matutino neoyorquino, el 15 de septiembre de 1970, once días después de la victoria de Allende, Nixon «convocó a una reunión de alto nivel con la participación del jefe de la CIA, Richard Helms, a quien reprochó su incapacidad para impedir la llegada de Allende al poder». Según «una fuente gubernamental» el Presidente se encontraba «frenético» ante el triunfo de Allende.

No parece extraño el frenetismo de Nixon. Inicialmente no nos resultaba fácil comprender lo que significábamos como amenaza potencial para el imperialismo y la amplitud y proyecciones de esa amenaza. Quizás ello llevó a muchos a abrigar la ilusión de que el gobierno norteamericano podía tolerar la supervivencia del Gobierno Popular. La realidad clara y oportunamente prevista por los estrategas de la Casa Blanca era que Chile constituía un punto focal de desafío a EU en América Latina.

Como modelo político, la Unidad Popular establecía un poderoso precedente capaz de reproducirse en el corazón mismo del núcleo estratégico que representa Europa occidental, al abrir, básicamente, a las izquierdas de Italia y Francia perspectivas de triunfos similares. De otra parte, la implícita intención del Gobierno Popular de actuar fuera de la órbita capitalista y su concepción del pluralismo ideológico, debilitaba la presencia del imperialismo en el continente y desafiaba la hegemonía política de EU. Todo el quehacer de la Unidad Popular representaba un reto sistemático y un peligro de alcances incalculables para los intereses económicos y estratégicos norteamericanos.

Apenas diez días después de la elección -el 14 de septiembre de 1970-, Kissinger define el significado estratégico trascendental que atribuye al Gobierno Popular en un discurso pronunciado en Chicago:

Es bastante fácil predecir que si Allende gana hay muchas posibilidades de que se establezca durante un período de años una suerte de gobierno comunista. En este caso no tendríamos un gobierno de este tipo en una isla que no tiene relación tradicional ni impacto en América Latina, sino un gobierno comunista unido, por ejemplo, a Argentina, que ya está profundamente dividida; unido a Perú que se ha estado moviendo en direcciones que dificultan tratar con él, y unido a Bolivia que también ha avanzado en una dirección más izquierdista, contra los EU, incluso sin ninguna de estas características. Así que yo creo que no debemos engañarnos con que la subida al poder de Allende en Chile no nos presente problemas masivos a nosotros y a las fuerzas democráticas favorables a EU en América Latina, y por cierto a todo el hemisferio occidental o a la Organización de Estados Americanos, es extremadamente problemático... Es una de esas situaciones poco afortunadas para los intereses norteamericanos... La evolución política de Chile -agrega- es muy grave para los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos en razón de sus efectos en Francia e Italia.(2)

Por su parte, y en forma más directa que su asesor, Nixon había señalado: «EU no puede tolerar ninguna forma transaccional de cambio hacia la sociedad socialista en América Latina.»

Las citas son bastante reveladoras del pensamiento del presidente Nixon y del señor Kissinger. Se desempolva la retórica de la guerra fría para exhibir un peligro hemisférico más serio que el cubano. Estos hechos adquieren aún mayor significación, cuando con posterioridad al triunfo electoral de 1970, nos hemos impuesto de la intensa actividad desplegada por la Casa Blanca para impedir la victoria popular y que las medidas operacionales acordadas fueron implementadas desde el instante mismo de conocerse el resultado de la elección.

En el propósito de impedir el acceso de Allende al gobierno, se articula un plan operativo en base a las proposiciones formuladas por la Internacional Telephone and Telegraph (ITT), plan revelado por el periodista norteamericano Jack Anderson, en julio de 1972.

El modelo propuesto fue puesto en ejecución entre el 15 de septiembre y el 24 de octubre. En aquel período el embajador de EU, Edward Korry, recibió «finalmente un mensaje del Departamento de Estado, dándole luz verde en nombre del presidente Nixon. El mensaje le daba autoridad máxima para hacer todo lo posible -menos una acción de tipo República Dominicana- para impedir que Allende tome el poder».

(2) Citado en artículo de P. Jenkins en The Guardian (Londres) de octubre de 1973. Reproducido por Le Monde Diplomatique (París, noviembre de 1973).Esta misma declaración fue presentada en los hearings del Senado norteamericano sobre la intervención de la CIA y la ITT en Chile, en la primavera de 1973.

El plan en ejecución buscó crear una situación objetiva y subjetiva de crisis económica mediante el sabotaje de la producción, la amenaza de un colapso económico inminente y la restricción del crédito externo. En el plano político se trataba de provocar un clima de agitación y desorden que justificara la intervención armada, a la par que se intensificaron las campañas de amedrentamiento, utilizando el supuesto peligro del «marxismo totalitario». De otra parte, se desata una presión constante sobre las Fuerzas Armadas para obligarlas a intervenir.

La proclamación de Allende, por el Congreso Pleno el 24 de octubre de 1970, selló el fracaso de la estrategia parcial puesta en práctica para impedir la ratificación legal de la victoria del 4 de septiembre. Diversos factores confluyeron en el desenlace. Desde luego, la madurez del movimiento popular triunfante que no se dejó arrastrar a la provocación. El pánico financiero que se pretendió crear no alcanzó las proporciones previstas. De otra parte, el sector progresista de la DC se jugó internamente por la ratificación del triunfo popular y finalmente, el asesinato del general René Schneider actuó como elemento de inhibición dentro de las Fuerzas Armadas.

Las siete semanas transcurridas entre la elección y la ratificación parlamentaria del triunfo popular disipan cualquier duda sobre la posición de EU hacia Chile. La resuelta voluntad del imperialismo era atajar una alternativa socialista en Chile, así ella se ensayara por una vía democrática, en pluralismo y libertad. Su triunfo implicaba consecuencias desastrosas para los intereses norteamericanos. Si se confirmaba la viabilidad de un camino institucional al socialismo, ello desencadenaría aspiraciones similares no sólo en el resto del hemisferio, sino también en Europa occidental. En consecuencia, el problema no radicaba en nacionalizar o no nacionalizar el cobre; pagar o no pagar las indemnizaciones reclamadas. No eran sutilezas procesales del derecho internacional las que alteraban el sueño de Nixon, del Pentágono y la CIA, sino el efecto «dominó» de la «vía chilena» al socialismo. La decisión de aplastar la experiencia chilena, no puede resultar extraña en nuestros días, al menos a la luz del intimidatorio apercibimiento formulado recientemente por Kissinger frente a eventuales alteraciones del esquema político en algunos países de Europa. Si los EU declaran, abierta y tajantemente, que no permitirán la participación de un partido comunista en el gobierno de un país de Europa occidental, podemos inferir su reacción frente a la misma participación en un país de América Latina.

El modelo subversivo fracasado antes del 4 de noviembre de 1970, fue reelaborado con minuciosa amplitud y extraordinaria eficacia después de esa fecha. Si antes se había jugado con algunas posibilidades aleatorias y coyunturales, ahora -con ilimitada profusión de medios- se monta una ofensiva que recién se extinguirá entre las llamas de La Moneda, el 11 de septiembre de 1973. Ya hemos precisado la enorme complejidad y sofisticación del modelo puesto en práctica. Queremos únicamente insistir en algunos de sus aspectos específicos.

Allende habló en alguna oportunidad del «bloqueo invisible». Se refería con ello al ataque oblicuo y subterráneo dirigido a estrangular la economía nacional. Los consorcios internacionales, con el aval implícito del Departamento de Estado, empezaron a operar en la penumbra.

Hasta 1970, Chile percibía por concepto de préstamos de los organismos financieros internacionales (BID, FMI, Banco Mundial) una cifra aproximada a los 80 millones de dólares al año. Estos financiamientos se cerraron abruptamente. La Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) también suspendió drásticamente créditos que en años precedentes se habían otorgado en un promedio de 50 millones de dólares anuales. Los gobiernos anteriores contaron con líneas de crédito en la banca privada norteamericana por cerca de 250 millones de dólares. Asumido Allende, son reducidos a cifras irrisorias negándose los acreedores a renovar las operaciones.(3)
De otra parte, préstamos contratados antes de 1970 con agencias del sector público de Estados Unidos, y aún en plena vigencia, también fueron suspendidos, obligando a mantener la ejecución de los proyectos en marcha mediante compras al contado en el mercado norteamericano, ante la imposibilidad de remplazar las fuentes de importaciones.

Igualmente fue bloqueado nuestro comercio exterior. Chile, al igual que los demás países de América Latina, debe recurrir al mercado norteamericano para las adquisiciones de bienes de capital. También los proveedores habituales se incorporaron al asedio, forzando al Gobierno Popular a cancelar anticipadamente los pedidos, con la natural presión sobre la balanza de pago. Se limitan además, severamente, las posibilidades de abastecimiento de equipos, repuestos, insumos, productos alimenticios y hasta medicamentos.

A la agresión financiera y comercial, se suman las acciones dirigidas contra el comercio del cobre por una poderosa empresa transnacional, la Kennecott Cooper Co., quien a pesar de haber reconocido la jurisdicción de los tribunales chilenos, dedujo demandas ante los tribunales de Francia, Holanda y Suecia, obteniendo el embargo provisorio de embarques cupríferos. Las demandas iniciadas -en definitiva rechazadas- pretendían que tribunales de aquellas naciones se pronunciaran sobre la nulidad de un acto soberano del Estado chileno, adoptado de acuerdo a la Constitución política y refrendado por su Parlamento. Al margen de la arbitrariedad, la intención final era entorpecer el comercio de cobre con Europa occidental y bloquear operaciones financieras en tramitación, creando de paso un clima de inseguridad entre nuestros compradores.

FORD, EL CINISMO Y LA CIA

Aparte del daño ocasionado a Chile y a su pueblo mediante aquel implacable cerco financiero, el papel de mayor incidencia en la «desestabilización» lo desempeñará la Agencia Central de Inteligencia de EU.

Por primera vez en su largo historial, la presencia de la CIA, siempre sobrentendida, es puesta al descubierto, y ello ocurre en el corazón mismo del imperio. Las denuncias formuladas por periodistas y parlamentarios norteamericanos se entrecruzan con las confesiones públicas y desafiantes de sus más altos personeros. Las evidencias son de tal manera abrumadoras, que hacen perder el pudor y los nervios a Ford, al extremo de improvisar una declaración,

(3) El Export Import Bank postergó indefinidamente la concesión de nuevos créditos sosteniendo que Chile no era un «deudor solvente»

considerada por el New York Times como «la más desafortunada que haya hecho jamás el jefe de un gobierno presuntamente respetuoso de la ley».

El presidente de EU no sólo reconoció explícitamente la descarada participación de la CIA en Chile, sino además reivindicó el derecho de su país a subvertir gobiernos constitucionales mediante el soborno y la violencia. El «esfuerzo» hecho en Chile -según él- estaba determinado por la necesidad de proteger «los mejores intereses norteamericanos». Cuando un periodista le pregunta: ¿Bajo qué estatuto internacional los EU tienen derecho a atentar contra la estabilidad de un gobierno de otro país, elegido constitucionalmente?, responde: «No voy a emitir juicios sobre si ello es permitido o autorizado por el derecho internacional. Es un hecho reconocido, históricamente, al igual que en el presente, que tales medidas se toman en bien de los intereses de los países afectados.»

Pocas veces en la historia se ha vertido una expresión más bárbara y cínica de matonaje internacional. Nunca las banderas filibusteras defendidas con tanta soberbia y arrogancia. Jamás una legitimación tan grosera de la voluntad imperial en orden a someter y administrar el destino de las «naciones de segunda clase». Con el mismo desenfado Mr. Ford se quejaría más tarde, de que el escándalo producido por las actividades de la CIA en Chile, «le había impedido enviar hombres a Portugal». Por supuesto, en resguardo «de los intereses del pueblo portugués».

En septiembre de 1974, se realizó en Washington, un simposio sobre las actividades de la CIA en Chile, organizado por los senadores Philip Hart y Edward Broocks. Uno de los participantes, John Marks, ex director de la Oficina de Inteligencia e Investigaciones del Departamento de Estado y coautor del libro La CIA y el culto de la inteligencia, reveló que «la agencia había mantenido en Chile -durante el gobierno de la UP- alrededor de cuarenta hombres. Entre ellos -dijo- había chilenos, incluso algunos periodistas». Por su parte, Marchetti, agente durante 14 años de la CIA y coautor del libro mencionado, reveló en el simposio que ese aparato de inteligencia norteamericano cuenta con unos 200 mil empleados y tiene un presupuesto anual de seis mil millones de dólares. «En Chile -dijo- el esfuerzo fue por desestabilizar un gobierno legalmente electo mientras en Vietnam se dedica a sostener a un dictador corrompido que no podría permanecer en su cargo treinta días sin el respaldo de la CIA.»

Una investigación privada, promovida por la North American Congress on Latin America (NACLA), señala cómo en Chile se destacó un personal altamente especializado. De diez agentes identificados, dos habían participado en el golpe de Guatemala, en 1954, dos estaban «en labores» en la República Dominicana durante la invasión de 1965, y tres tuvieron activa participación en la brutal represión del movimiento de liberación en Guatemala, entre los años 1966 y 1969.

El debate promovido por sectores progresistas de Estados Unidos, acerca de las actividades de la Central de Inteligencia, junto con desnudar la magnitud de su injerencia en la vida política de otras naciones, puso también en evidencia la amplitud de su poder interno y sus profundas ramificaciones en la sociedad norteamericana. Cuando el senador Fulbright dio respuesta a una demanda del representante Harrigton en orden a promover una investigación del Congreso sobre las actividades de la CIA, expresa su escepticismo en los siguientes términos:
Comparto su frustración sobre esta situación, pero como usted bien sabe esto es algo que ha estado sucediendo también en otros países durante muchos años. . . No creo que la investigación a fondo por parte del Comité de Relaciones Exteriores, produciría mucho más de lo que ya sabemos, y aunque produzca más, no hay nada que podamos hacer, a menos que haya un tremendo cambio en la actitud de los miembros del comité... El Senado -afirma luego- no ha querido ejercer un control serio sobre la CIA y aparentemente aprueba las actividades en Chile a que usted se refiere y yo creo que sean actividades que la CIA ha realizado en otros países.

Sin embargo, y no por cierto «para ejercer un control serio sobre la CIA», el Senado norteamericano se vio forzado a promover una seria y meticulosa investigación sobre el quehacer de la agencia en Chile y en el resto del mundo. La opinión pública de EU, profundamente conmovida por el drama chileno, creó las condiciones que hicieron posible la revelación descarnada de la impúdica y brutal manipulación ejercida en la vida política y social de Chile, en los últimos trece años.

El informe de la comisión, presidida por el senador Frank Church, descorre los velos de una intervención sostenida y desvergonzada. Desde 1962 hasta hoy, la CIA y la embajada norteamericana, interfirieron todas y cada una de las manifestaciones de la actividad política de nuestro país. Han orientado campañas de opinión, financiado partidos, alquilado periodistas, sobornado a dirigentes políticos y legisladores, infiltrado las Fuerzas Armadas, e influido en mayor o menor medida, en cada decisión ciudadana. El estudio precisa, metódica y cronológicamente, el itinerario de las «acciones encubiertas» y la amplitud de los medios utilizados. Su franqueza es casi grosera. Nada queda entregado a la imaginación. Personajes, partidos, instituciones son exhibidos sin siquiera una pudorosa hoja de parra. La participación en la tarea de «desestabilizar» el gobierno constitucional se proyecta hasta en los más recónditos detalles. Frente al aluvión de evidencias, los desmentidos tímidos o airados nacen abortados por el ridículo.

¿Cómo y en qué forma actuó la CIA entre 1970 y 1973?

No fue la suya una actividad complementaria y tangencial a la rabiosa ofensiva burguesa. Después del triunfo popular se amplió considerablemente el staff local para asumir con «carta blanca» la dirección y ejecución del modelo contrarrevolucionario. De esta suerte, planifica, subvenciona y actúa en función del objetivo estratégico perseguido: el derrocamiento del gobierno constitucional.

Sus huellas digitales quedarán impresas tanto en los acontecimientos que preceden a la elección presidencial como en las acciones que la red subversiva pacientemente irá tejiendo más tarde. Desde aquella marcha de las «cacerolas», que vuelca sobre las calles de Santiago a mujeres de la alta burguesía, reclamando alimentos, hasta los actos

terroristas de los instantes postreros, ejecutados con una elevada precisión tecnológica, a la cual no tenían acceso los «especialistas» nativos.

Las revelaciones del Informe de la Comisión Church, descubren un tejido de sobrecogedora amplitud, extendido sobre todas las áreas de la actividad nacional. La sola y sintética enunciación de las acciones y medidas ejecutadas, sorprenderá al lector, ofreciéndole un cuadro no imaginado de la magnitud de la intervención. Sólo en el período que antecede a la elección de 1970, el Informe senatorial explícitas las siguientes actividades:

Conexión de la CIA con varias corporaciones multinacionales para impedir la elección de Allende; entrega de fondos al Partido Demócrata Cristiano, al Partido Nacional; disposición de fondos para el soborno de parlamentarios en el evento de una votación en el Congreso Pleno; fondos para el montaje de una «operación de deterioro» antiallende; campaña de propaganda intensiva que utilizó «virtualmente» todos los medios de comunicación dentro de Chile; instalación de «elementos activos» en diarios y radios derechistas; «campaña del terror», implementada con películas, afiches, volantes, correspondencia directa, titulares de diarios, rayado mural, impresión de libros con fotografías, propaganda «negra», esto es, material falsamente imputado a determinados grupos o personas; subsidios a revistas y algunos semanarios de derecha; avisos radiales, informativos en radios de Santiago y de provincia; organización de acciones de provocación; subvención a grupos de acción cívica; subvención a El Mercurio y ubicación de «elementos activos» en su dirección y consejo de redacción; edición de folletos masivos; pintura de eslogan en dos mil murallas de Chile; apoyo a prensa clandestina derechista; financiamiento de los partidos de oposición para la compra de imprentas y radios; esfuerzo para quebrar al Partido Radical antes de la elección; reproducción en periódicos europeos y latinoamericanos de artículos hechos por la propia CIA, con predicciones alarmantes sobre el futuro gobierno popular; subvención a «Patria y Libertad»; contactos con oficiales de las Fuerzas Armadas para promover un golpe militar antes que Allende asumiera el gobierno; entrega de armas; promoción de pánico financiero; apoyo económico a organizaciones del sector privado; otorgamiento de fondos a los partidos de oposición en todas las campañas electorales entre 1969 y 1973; asistencia a grupos empresariales subversivos; establecimiento de «elementos activos» de inteligencia en los institutos armados chilenos; intervención directa en el asesinato del general René Schneider; red de contactos con oficiales chilenos «para rastrear el complot para el golpe» ; «operación engaño» sobre el ejército «destinada a alertarlo» sobre una eventual intervención cubana «en su interior»; preparación de información orientada sobre los oficiales de las Fuerzas Armadas.

Si nos atenemos solamente a las actividades oficialmente admitidas por los más altos ejecutivos de la CIA y a las revelaciones irrecusables de la investigación Church, podemos concluir que la agencia tuvo una participación reconocida en las instancias más decisivas del acontecer chileno a partir de 1970:

a) Durante la campaña presidencial de ese año, preferentemente apoya la candidatura derechista de Jorge Alessandri. Aparte de la acostumbrada inyección financiera, la CIA monta un inmenso esfuerzo de amedrentamiento de la opinión pública rearticulando la «campaña del terror» ensayada con éxito en 1964.

b) Organiza y dirige los planes alternativamente implementados entre el 4 de septiembre y el 24 de octubre de 1970 para impedir que el presidente electo asumiera el poder. Ya hemos señalado la complejidad del proyecto concebido: eventual soborno a parlamentarios; estímulo de un clima artificial de pánico financiero; preparación de un golpe militar y, finalmente, el asesinato del comandante en jefe del Ejército.

c) Presta apoyo financiero a los partidos burgueses agrupados en la «Confederación Democrática» en todas las elecciones generales y complementarias, incluyendo la de marzo de 1973. Según las declaraciones de William Colby ante el Comité de Asuntos Latinoamericanos, se invirtió sólo en esta última oportunidad un millón quinientos mil dólares, parte de los cuales fue utilizado para financiar «un influyente, aunque no identificado, periódico antiallendista».

d) Prepara y financia la huelga empresarial de octubre de 1972 y el nuevo paro de gremios y colegios profesionales promovido a contar de julio de 1973. Según el mismo Colby, el «Comité de los Cuarenta» autorizó en agosto de 1973 «un millón de dólares para nuevas actividades de desestabilización política».

El Informe de la Comisión Church, reconoce que el «Comité de los Cuarenta» y los organismos que le precedieron, autorizaron la inversión directa de más de ocho millones de dólares. Esta cifra puede inducir a una apreciación equivocada sobre la magnitud de la intervención. Creernos que es útil formular algunas precisiones. Desde luego, ella corresponde a cantidades directamente entregadas a partidos e instituciones cuyo poder adquisitivo debe medirse en moneda nacional en el contexto de los valores de mercado negro, extraordinariamente superiores (por lo menos 4 veces). No obstante, el Informe senatorial no cuantifica las cantidades invertidas en la ejecución de las acciones encubiertas de la CIA descritas en las páginas anteriores (campañas de propaganda, sobornos, subvenciones a diarios y revistas, asistencia a grupos paramilitares, montaje de operativos, etc..) ni determina los aportes e inversiones de las grandes empresas transnacionales y de otros organismos estatales norteamericanos, así como el costo de las acciones de otras agencias de inteligencia que tuvieron permanentemente sus manos metidas en Chile.

Ésta es, repetimos, la participación reconocida. No obstante, su presencia se asoma a todas las esferas de la vida nacional. Trabaja activamente con los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas (más intensamente, como quedará demostrado, en el Servicio de Inteligencia de la Marina), y en la preparación y adiestramiento de grupos terroristas.

En los primeros meses de 1971, con el respaldo del dictador boliviano Banzer, se instala en la localidad de Viacha - territorio boliviano- un campo de entrenamiento militar, en el cual participan junto a instructores de la CIA, ex oficiales del ejército chileno y asesores bolivianos y brasileños. Este centro de entrenamiento mantenía en Santiago un «comando coordinador», cuyas tareas incluían el establecimiento de contactos activos con miembros de las Fuerzas Armadas; la

designación de enlaces; la selección de cuadros destinados al adiestramiento en Bolivia; la organización de vínculos permanentes con los organismos «gremiales» para complementar acciones de terrorismo y actividades militares y paramilitares durante las huelgas patronales, y el trabajo coordinado con las organizaciones de agricultores a fin de militarizar sus grupos «defensivos».

En otro campo de adiestramiento castrense -situado en la ciudad boliviana de Santa Cruz- militares brasileños y bolivianos, previamente preparados en la Zona del Canal, instruyeron a 250 miembros de la organización fascista «Patria y Libertad» en las artes de la lucha de comandos. Este curso, bajo el nombre de «Operación Bandeirantes», se mantuvo en actividad hasta pocas semanas antes del golpe militar.

Los grupos entrenados en estos campos, más los organizados en Santiago por los comandos «gremiales» y los partidos políticos de oposición, desencadenaron en el país una ofensiva terrorista de tal proporción, que en los últimos meses se llegó a perpetrar un atentado cada hora. Se dinamitaron puentes, carreteras, vías férreas, fábricas, oleoductos y centrales eléctricas; se colocó explosivos en residencias, oficinas públicas y establecimientos comerciales. En todos ellos quedó en evidencia el alto nivel de la asesoría técnica prestada por la CIA.

AUTOPSIA DE LA DESCOMPOSICIÓN

En los primeros días de diciembre de 1975, trascendió a la opinión pública el primer informe de la Comisión designada por el Senado norteamericano, con el objeto de investigar la intervención norteamericana en la política interna de otras naciones y concretamente en Chile.

El llamado «Informe Church» cierra un ciclo penoso para la opinión pública de EU, inaugurado hace un par de años con el escándalo Watergate. Este fue un despertar amargo para el hombre medio norteamericano. Algo así como el inicio de un encuentro postergado con la realidad ingrata.

Por primera vez percibe claramente que la sociedad estable, democrática y puritana en la cual creía vivir, mostraba -al menos -en la cúspide- signos evidentes de corrupción. Para el pueblo norteamericano el presidente de la nación era un personaje superior: respetable, incorruptible, ubicado por encima de la comunidad, como expresión de sus valores. Watergate abrió el estercolero. El jefe del país aparecía comprometido en la utilización de métodos rufianescos, mientras la pugna política, en el seno de la más grande democracia del mundo, se dirimía al más puro estilo de las mafias gansteriles.

El escándalo pudo haberse tapado con el sacrificio personal de Nixon. Sin embargo, abrió un forado a través del cual los hechos se precipitaron en cadena. El ciudadano llamado a suceder al presidente -el vicepresidente Spiro Agnew- es arrastrado a los tribunales acusado de soborno y peculado; sólo la jerarquía de su investidura impide que transite directamente de la Casa Blanca a la cárcel.

Desde otra perspectiva, la caída del gobierno de la UP contribuye a alterar los esquemas pacíficamente aceptados. El hecho impactó a la opinión pública norteamericana en términos que aún hoy parecen insólitos. ¿Por qué? El acontecimiento era más o menos habitual en el historial agitado del continente. El gobierno de Allende era percibido como «comunista» y, por tanto, como un adversario histórico de los EU. Nada parecía justificar una preocupación pública tan extendida y persistente.

Sin embargo, en torno al dramático caso chileno convergían factores sensibilizadores. Desde luego, la magnitud de la indignación universal. Pero en lo fundamental pesaba un hecho: por primera vez en los anales de EU aparecían cuestionados los procedimientos utilizados por las indubitadas estructuras de poder.

Ello impide que las encuestas parlamentarias, las investigaciones promovidas por organismos privados y las denuncias formuladas por algunos personeros representativos del progresismo norteamericano,, fueran en definitiva ahogadas por los mecanismos del sistema. Por el contrario, la abierta y cada vez más evidente interferencia en la vida de una pequeña nación del cono sur del continente, termina por generar un debate que cuestiona en su globalidad los métodos utilizados por el gobierno de EU en el manejo de sus relaciones internacionales.

En febrero de 1975 se constituyó el comité presidido por el senador Church, con el objeto preciso de investigar las «operaciones encubiertas» de los aparatos de seguridad norteamericanos. Recogiendo la preocupación de la opinión pública, originada en la escandalosa intromisión en Chile, la Comisión Church resolvió hacer un estudio especial sobre las acciones de espionaje e inteligencia de EU durante el período comprendido entre 1963 y 1973.

Por primera vez en investigaciones de esta naturaleza, se abrieron audiencias públicas donde comparecieron personajes del mundo oficial vinculados a actos de intervención en Chile y otros países de América Latina.

En general, las conclusiones del Comité senatorial confirman y amplían los antecedentes que hemos reunido en las páginas anteriores. Por lo tanto, valoramos la trascendencia histórico-política del acontecimiento. Se trata nada menos que del reconocimiento oficial, por parte del Congreso de EU, de la intervención desvergonzada e ilegítima en la vida política de un país, cuyos ciudadanos creían hasta hoy estar resolviendo libre y soberanamente su destino.

Sin embargo, nos interesa rescatar en estas páginas su significado profundo y revelador. El informe del Comité Church, descorrió ante el pueblo de EU y ante todos los pueblos del mundo, el grado de descomposición de la sociedad norteamericana y, en un plano más subalterno, el nivel de vileza moral, corrupción y sometimiento de la burguesía chilena.

Porque lo que ha quedado en evidencia no es el quehacer -tolerado y en cierto modo justificado- de los servicios secretos de una potencia cuyo destino se juega en la gran controversia mundial. Lo verdaderamente importante es la inescrupulosidad extrema de los métodos utilizados y la jerarquía del staff político que adopta las decisiones. Figuras prominentes y respetables de la «sociedad sana y puritana» eran las encargadas de planificar el asesinato de un jefe de Estado, la agresión a un país pequeño y de cuantificar el soborno de políticos, legisladores, militares y plumarios de los países atrasados. El espíritu de Chicago instalado en la Casa Blanca, institucionalizando el crimen como herramienta política y promoviendo la corrupción a escala internacional, con la misma metodología utilizada por los capos de la «Cosa Nostra».

La humanidad puede empezar a inquietarse. No se trata del drama moral de un país bananero, aplastado por alguna tenebrosa dictadura. Es la dirigencia de la mayor potencia capitalista occidental, que reivindica y convalida en el desarrollo de sus relaciones internacionales, las más puras prácticas gansteriles. Y lo hace desde cenáculos, donde se entrecruzan los fríos intereses de las poderosas empresas transnacionales y los grandes complejos militares industriales, con las exigencias estratégicas del imperio. Angustia pensar cómo a una cúpula política, en tal grado de descomposición, está entregada la posibilidad de percutar los mecanismos de un holocausto termonuclear.

Los antecedentes revelados por el Senado norteamericano, desnudan una intromisión tan grosera y profunda en las decisiones de un país, que hace difícil imaginar cuál es, en definitiva, el margen de autonomía reservado a sus habitantes, si lo hay.

Es el recuento de sólo diez años de la vida de Chile. Empero no hay motivo para circunscribir la persistencia del fenómeno a ese lapso y sólo a nuestro país. Sabemos que con mayor o menor intensidad lo mismo ha ocurrido en todas las repúblicas del continente.

El Informe senatorial no ha descubierto la intervención. Ésta es tan vieja como el imperialismo y consustancial a él. Su mérito incide en develar la amplitud, profundidad y naturaleza de la intervención. Incluso para aquellos que hemos venido denunciando en el discurso político de las últimas décadas, la injerencia intolerable y persistente de EU en la vida política de nuestros pueblos, resulta sorprendente constatar, que al menos desde 1962 hasta nuestros días, no hay un solo acontecimiento político más o menos trascendente, en el cual no estén impresas las huellas de la CIA o de la embajada norteamericana.

Millones de dólares han circulado por el sistema sanguíneo de la burguesía chilena. El dinero corruptor, la manipulación abierta o encubierta de individuos, partidos políticos, organizaciones sociales, Fuerzas Armadas, órganos de difusión, es decir, todos y cada uno de los componentes sociales, han venido tejiendo una maraña monstruosa que distorsiona el libre ejercicio de la soberanía popular y permite a la Casa Blanca ejercer el gobierno real de la nación. En definitiva, un país con su autonomía cívica mediatizada, su capacidad de decisión entrabada por las «operaciones encubiertas», elaboradas por el «Comité de los Cuarenta» en Washington e implementadas por la «estación local» de la CIA, en Santiago.

Por cierto, el éxito de la intromisión está en relación directa con los niveles de inmoralidad de la burguesía nativa. Tampoco -en este caso- la denuncia política de la izquierda estuvo a la altura de la traición. La realidad superó con mucho nuestras más audaces aprehensiones. Gobernantes que conmovieron a Chile exhibiendo el puritanismo y la nobleza de sus almas; partidos políticos que proclamaron cotidianamente la pureza de sus virtudes patrióticas y ciudadanas; periodistas respetables proyectados en imágenes de caballeros andantes; organizaciones promovidas al amparo de los más elevados principios; diarios de centenaria prosapia republicana; tribunos que agitaban el fervor de las masas; todos son exhibidos de pronto, moralmente desnudos, en una orgía de traición y soborno.

Y no son pocos los damnificados. Los hay de todos los colores y todos los pelajes. Un mandatario, a quien un poeta decadente imagina: «limpio como el sol y brillante como la espada», aparece en el Informe Church trepando al poder por la escalinata del dólar puesta por la CIA. Durante diez años, el partido más importante resulta ser beneficiario de «cuotas» generosas de procedencia yanqui, que le permiten financiar campañas electorales, cancelar deudas o modernizar sus aparatos de difusión. Y los aportes son tan habituales, que un año después del golpe militar, el Senado norteamericano registra una discreta remesa de cincuenta mil dólares -algo así como el raspado de la olla- para «cancelar compromisos políticos generados antes del golpe». La campaña del candidato conservador en 1970, cuya honestidad y austeridad fuera profusamente publicitada ante el país, es tonificada con donaciones considerables de la ITT y de hombres de negocios norteamericanos. En general, todos los partidos históricos tradicionales —al menos sus tendencias más reaccionarias- y los grupos estructurados en torno a ellos, son «untados» con el dólar mercenario, en la gran repartija.

Con todo, es en el caso de El Mercurio donde la desvergüenza y el descaro adquieren un nivel más indignante. Es el ejemplo más claro de duplicidad y entreguismo. Este periódico, uno de los más antiguos de América Latina, tiene un historial centenario al servicio de los intereses oligárquicos y extranjeros. Vocero permanente de la antipatria, se puso al servicio del imperialismo inglés para aplastar los afanes nacionalistas de Balmaceda, deviniendo más tarde en un simple periódico norteamericano, editado en Chile. Ninguna institución refleja con tan límpida claridad lo que es el alma de nuestra burguesía árbitro de la moral, ampuloso declamador de la libertad y la democracia, preceptor de los más elevados principios; presto, sin embargo. a alquilarse por libras ayer y por dólares hoy. Viejo condotiero de la reacción chilena y continental, terminó finalmente por integrarse a la red de intereses de las grandes empresas multinacionales. Su propietario, Agustín Edwards, encabeza el clan económico más poderoso del país, a la vez que oficia corno vicepresidente de la Pepsi Cola en EU. Prófugo de la justicia chilena, es al mismo tiempo huésped de Nixon en la Casa Blanca, a quien asesora en la criminal traición contra Chile.

El currículum de El Mercurio parece suficientemente meritorio como para explicar la magnitud de su entrega. La CIA entra a administrarlo directamente. No se trata sólo de que ésta «subvencionara» con importantes cantidades de

dinero sus proclividades democráticas. La agencia instala a sus hombres en el consejo de redacción y asume de hecho -en junio de 1970- la dirección de la campaña publicitaria en contra de la Unidad Popular. Es la CIA la que directamente señala objetivos, selecciona temas, determina la línea de los editoriales e incluso, orienta los titulares. Las reiteradas referencias del Informe Church a las actividades de El Mercurio, ponen al desnudo algo más que las miserias morales de una empresa periodística. Son la radiografía nítida y reveladora de los mecanismos de corrupción y soborno que manipula la «prensa seria» de América Latina, en el formidable esfuerzo de desinformación y engaño implementado por el imperialismo.

Hasta aquí el ominoso abanico abierto de la corrupción de una clase. No se trata de individuos aislados cuyas debilidades se ahogan en el drama personal, socialmente intrascendente. Es la miseria moral de un estrato social que sacrifica todo al lucro y a la avidez de sus apetitos individuales. Todo el andamiaje principista sobre el cual afincó su sistema, se desmorona estrepitosamente en la gran subasta organizada por el imperialismo.

El Informe Church tiene el valor de un formidable testimonio histórico. En el decurso de la controversia social, una y mil veces, prevenimos al país sobre los intrincados mecanismos de intervención norteamericana en la vida chilena. Denunciamos -más allá de toda pasión subalterna- a Eduardo Frei como defensor de los intereses estratégicos de EU, y al diario El Mercurio como el portavoz oficial de estos intereses. Nuestras acusaciones se estrellaban invariablemente con la santa indignación de los afectados, cuando no con la ironía escéptica de sus falderillos. De aquí la trascendencia, que para las luchas futuras de nuestro pueblo, asume el reconocimiento tajante y directo del Capitolio norteamericano.

El desmentido torpe de hoy -tímido en algunos, cínico en los más- sólo confirma la violencia moral de una afirmación, que marca ante la historia y las generaciones futuras, el patrimonio ético de la clase dirigente de la sociedad chilena, en buena parte del presente siglo. La rancia oligarquía solía exhibir con orgullo la austeridad y el patriotismo de sus líderes en el siglo pasado. Se dice que Montt, Varas y otros, abandonaron el poder en condiciones de franciscana pobreza. En cambio, la burguesía de nuestro siglo tendrá serios problemas para sustituir los harapos morales de sus más prominentes personeros: los respetables partidos de orden; los engolados custodios de las grandes tradiciones nacionales; los titulares exclusivos de los altos valores patrióticos, no podrán sacudir el estigma de la traición. Algunos dólares más, algunas vergüenzas menos.

Quedará en pie, no obstante, la frustración de una nación, cuando termine por descubrir que sus profundos anhelos, las más caras aspiraciones, y la voluntad que creía expresar libre y soberanamente en el sufragio, en la actividad creadora, en la confianza entregada a líderes burgueses, aparentemente incorruptibles, han sido manipulados, tan lenta como imperceptiblemente, por hombres e intereses de un país extranjero.

Sería ingenuo pretender, que la interferencia infame en la vida de nuestro país y la amplitud inescrupulosa de los métodos empleados. sean un hecho excepcional, difícil de volver a producirse. En tanto los países latinoamericanos sean detectados como simples marionetas en el cumplimiento del «gran destino», las amenazas -reales o imaginarias- que sus luchas suponen, determinarán inexorablemente nuevas y más groseras intervenciones.

Hace apenas algunos meses, cuando ya se conocían las escandalosas conclusiones de la Comisión senatorial, Thomas Farer, representante del Departamento de Estado, formuló con franqueza descarnada las reglas del juego. Su auditorio, integrado por personalidades políticas y académicas de América Latina, escuchó sorprendido una afirmación conminatoria: «En la política de Estados Unidos hacia América Latina lo prioritario es la seguridad nacional norteamericana, y por ello fueron necesarias intervenciones directas y también encubiertas en el pasado. Seguramente en los próximos diez años no habrá intervenciones como las de la República Dominicana; sin embargo, es previsible que haya intervenciones encubiertas.»

Finalmente y para que nadie se llamara a engaño, señaló categóricamente, que cualquier modelo de relaciones entre su país y América Latina, «para ser viable debe tener en cuenta los intereses y la ideología de EU», agregando que «no es concebible que América Latina sea socialista», y «que a lo sumo Estados Unidos podrá tolerar que se desarrolle un capitalismo nacional»(4)

Medida en su conjunto, la ofensiva montada por EU para derribar el Gobierno Popular y hacer abortar la experiencia revolucionaria, pasa a ser un factor determinante de la derrota final.

Del país que Salvador Allende describió con voz emocionada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1972 no ha quedado prácticamente nada.

Vengo de Chile, un país pequeño pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, su irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial, no tiene cabida. Un país con una clase obrera unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal y secreto es vehículo de definición de un régimen multipartidista, con un parlamento de actividad ininterrumpida desde su creación hace 160 años, donde los tribunales de justicia son independientes del Ejecutivo, en que desde 1833 sólo una vez se ha cambiado la carta constitucional, sin que ésta prácticamente jamás haya dejado de ser aplicada. Un país donde la vida pública está organizada en instituciones civiles, que cuenta con fuerzas armadas de probada formación profesional y espíritu democrático. Un país de 10 millones de habitantes que en una generación ha dado dos premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ambos hijos de modestos trabajadores. Historia, tierra y hombres se funden en un gran sentido nacional. (Discurso pronunciado ante la Asamblea General de la ONU el 4 de diciembre de 1972.)

(4) Intervención en el Congreso de Oaxtepec, México, diciembre de 1973, Revista Ercilla, 7 de enero de 1976.

Sus Fuerzas Armadas fueron utilizadas para destrozar su democracia centenaria, liquidar su sistema de convivencia y destruir el Estado de Derecho, construido casi en el amanecer de la República. Chile fue quebrado cultural y socialmente, y convertido en una inmensa y horrorosa cárcel, donde se aplasta, escarnece y tortura a sus mejores hombres. Todo ello se ha hecho, como ha dicho el presidente Ford, «para favorecer los mejores intereses del pueblo de Chile y proteger los intereses de EU».

Sin la voluntad del gobierno norteamericano y la actividad criminal de la CIA, jamás el modelo contrarrevolucionario habría adquirido tales niveles de eficacia. La burguesía nacional no tenía capacidad ni recursos para ello. Sin el cerco financiero magistralmente orquestado desde Wall Street, la situación económica del país no se habría expresado en imágenes tan profundas de anarquía y desarticulación. Sin la presión persistente del Pentágono, el proceso de debilitamiento profesional y democrático en el seno de las Fuerzas Armadas habría tenido otro ritmo o no se habría producido. Sin la participación activa y eficiente de la CIA, el terrorismo desatado por la burguesía apenas se habría expresado en tono menor. Sin el dinero norteamericano, prodigado en el soborno, la corrupción y el esfuerzo infame por deformar y envilecer la conciencia nacional, las huelgas empresariales no hubieran ocasionado un daño tan irreparable.(5) Sin el dedo percutor de la CIA, el sector freísta de la DC no habría encontrado en el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, el pretexto para arrastrar a su partido a la pendiente conspirativa.

El mundo así lo ha entendido y por ello desprecia y condena la intromisión de los Kissinger y Nixon. Chile fue un Vietnam «silencioso y derrotado». La misma intervención desenfadada, el mismo desprecio por la voluntad del pueblo, la misma arrogancia brutal e intimidatoria, la misma invocación principista, hipócrita y mentirosa a la ley, la democracia y la libertad. Como el mitológico dios Jano, dos caras, pero también dos almas. Por una parte, adiestra los ejércitos nativos para impedir la insurrección armada contra obsecuentes dictaduras oligárquicas, y por otra, planifica y promueve esa insurrección armada en contra de un gobierno constitucional y legítimo. Reúne a sus lacayos para marginar a Cuba -durante quince años- de la comunidad continental, acusándola de injerencia en los asuntos políticos de otros pueblos; mientras interviene, confesa y abiertamente, para torcer el destino de un pueblo pequeño, que aspiraba a encontrar sus propios caminos en «pluralismo, democracia y libertad».

(5) La huelga de los «transportistas», financiada por la CIA, paralizó 50 mil camiones durante cincuenta días, inmovilizando el transporte de un millón de toneladas diarias de alimentos, materias primas, combustibles y otros productos.

10.- FUERZAS ARMADAS: LA MAS SERIA INSUFICIENCIA MITO Y REALIDADES

El artículo 22 de la Constitución política del Estado dispone: «Las Fuerzas Armadas son esencialmente profesionales, jerarquizadas, obedientes y no deliberantes.»

La afirmación jurídica no sólo consignaba la voluntad del poder constituyente, sino reflejaba una realidad de sorprendente y prolongada persistencia. Durante ciento cuarenta años, salvo breves períodos de excepción, los institutos armados chilenos habían permanecido marginados de la contienda política. En 1830, Diego Portales organizó el Estado oligárquico, sobre la concepción de la legalidad de un poder civil impersonal, autoritario, a cuya majestad las Fuerzas Armadas debían acatamiento irrestricto. El «Estado en forma», concebido por Portales, refractario al caudillismo militar, singulariza el quehacer político nacional en el contexto anárquico y turbulento del continente. Chile es el único país al que no asoman los «caudillos bárbaros», que agitaron la evolución política de América Latina en el curso del siglo XIX, y marcan el retraso de algunas naciones hasta nuestros días.

La concepción portaliana impregnó la vida del país de un hondo sentimiento civilista, que subentendía el sometimiento del poder militar al poder civil. En esta afirmación coincidían todas las fuerzas políticas chilenas.

Hasta 1920, durante casi un siglo, los militares estuvieron limitados a sus funciones de brazo armado de la oligarquía. Entre 1924 y 1932 hay un período de quiebre institucional, caracterizado por incruentas intervenciones militares, de inspiración progresista y antioligárquica.

En 1924, por primera vez los institutos armados, como tales, afloran al proceso político y se movilizan para exigir al Congreso Nacional la aprobación de un conjunto de leyes sociales, entre ellas el Código del Trabajo. Cuando Alessandri, el viejo, a la sazón presidente de la República, abandona el mando en protesta por las interferencias castrenses, los militares asumen brevemente la dirección del país. Reaparecen más tarde -tras Ibáñez- con un proyecto populista y antioligárquico. La inestabilidad política se prolonga hasta la caída -en 1932- de la fugaz «República Socialista» surgida de un golpe militar, encabezado por el comodoro del Aire Marmaduke Grove, fundador más tarde del Partido Socialista chileno.

Las veleidades populistas de las Fuerzas Armadas, fortalecieron el sentimiento antimilitarista de la oligarquía, al cual confluyen las demás fuerzas políticas, acentuando en esta forma su confinamiento profesional.(1) En 1932, este sentimiento y la desconfianza de la clase dominante llegan al extremo de crear un ejército burgués paralelo, concebido como garantía del civilismo; «las Milicias Republicanas» que agrupan a más de cien mil hombres poderosamente armados. Esta estructura paramilitar, abiertamente inconstitucional, subsiste hasta 1938.

No obstante, el presunto «apoliticismo» militar está en esencia condicionado por la propia capacidad del sistema para regular sus crisis internas, sin necesidad de recurrir a la violencia. Tanto los conflictos interburgueses, como los que surgían entre la burguesía y los demás sectores sociales, eran resueltos en el interior de la institucionalidad. Dicho en otra forma, no estando cuestionado el sistema de dominación capitalista, bien podían permanecer en sus cuarteles.

Finalmente, influye en las relaciones entre los uniformados y la organización civil un factor que debe estar presente en todo análisis, cual era la debilidad política de las Fuerzas Armadas.

En ello convergen diversos elementos. Desde luego, un generalizado consenso nacional les impedía actuar como grupo de presión, incluso en el plano de sus intereses profesionales. Desde otro ángulo, en Chile la profesión militar, al menos en el presente siglo, no tuvo un nivel de prestigio social aceptable, a diferencia de lo ocurrido en los demás países de América Latina. La oligarquía la consideró siempre despectivamente.

Otro elemento de su debilidad política es su restringido nivel de ilustración. Mientras otros ejércitos del continente se asoman al complejo mundo de los problemas sociales, políticos, económicos e internacionales, los militares chilenos permanecen recluidos en una suerte de subcultura, que de hecho los mantiene aislados de la sociedad.

Vemos entonces cómo una concatenación de factores convergentes alimentan la ilusión de una fuerza armada políticamente prescindente, no deliberante y sometida al poder civil. Una especie de mítico ejército profesional, más allá de las clases y por encima de sus conflictos.

La más seria desviación del proceso chileno, y la que en definitiva sellara su destino, fue acceder, sólo con tímidas reservas intelectuales, a la aceptación de este mito. El papel profesional del ejército, no cuestionado por sucesos históricos profundos, justificado y sustentado en una ideología constitucionalista, mediatizó el verdadero papel de los institutos armados en una sociedad de clases.

El Gobierno Popular asume el poder reconociéndoles implícitamente el carácter de árbitros en el conflicto social y político, forzosamente agudizado por la dinámica revolucionaria. De hecho, la gravitación ocasional de un sector constitucionalista, con categórica expresión en los altos mandos, contribuyó a acrecentar la confianza en la lealtad militar al desempeño de su función arbitral. Confianza que prescindía de su carácter de ejército de clase, de su ideología pequeñoburguesa y de su ineptitud básica para dirimir la pugna social, consustancial a un proceso revolucionario, en favor de las fuerzas trasformadoras.

(1) En septiembre de 1931 se sublevó una parte de la Armada bajo la dirección de suboficiales inspirados parcialmente en el ejemplo de la Revolución rusa, la que fue aplastada con el apoyo de la aviación.

Cuando la Democracia Cristiana, expresando las tribulaciones de la burguesía electoralmente derrotada, exige a Allende, en 1970, el llamado «Estatuto de Garantías Democráticas», intentó -sin éxito- que el Presidente renunciara a sus facultades privativas para designar los altos mandos de los institutos armados, proponiendo -en cambiosu autogeneración. La demanda, con ser rechazada, no ocultaba la obvia intención de hacer del Presidente un prisionero del ejército y asegurar desde un comienzo el resultado del «arbitraje». Con la misma finalidad, la derecha impone más tarde la llamada «Ley de Control de Armas», que le garantiza el monopolio de los armamentos en el país.

La elección presidencial de 1970, lejos de convertir a las Fuerzas Armadas en «árbitro» del conflicto social emergente, las trasforma en aval ante la burguesía, del sometimiento irrestricto del nuevo gobierno a las reglas del juego institucional; pero; a la inversa, no garantizan el acatamiento de la burguesía a las mismas normas. El mito del ejército apolítico se diluye ante la nueva realidad. De hecho, son concebidas como una fuerza de remplazo, disponible para el instante en que el proceso pusiera en peligro la supervivencia del sistema.

Los hechos posteriores demostrarían que el ejército no era un compartimento estanco ubicado más allá del bien y del mal.

El mandato constitucional, que establecía su obediencia al poder civil, tenía validez sólo en la medida en que su presencia no fuera reclamada para «salvar» el sistema. Formulada esta exigencia, los mecanismos determinantes de su conducta serán, en definitiva, activados por su ideología y su ubicación en el espectro clasista.

Abrumadoramente -al menos desde 1920- la oficialidad de las Fuerzas Armadas era reclutada entre la pequeña burguesía. Hacia 1960, la hegemonía de estos estratos en el cuerpo de oficiales es casi absoluta. No obstante, otros factores de clase influyen en su alineamiento ideológico. En el curso de su carrera, y desde los primeros rangos, el oficial debe permanecer un tiempo prolongado en las guarniciones de provincia. Allí, sus contactos sociales los vinculan con la clase alta rural y, en general, con los sectores «acomodados» del medio local. Con extraordinaria frecuencia el matrimonio se realiza con personas pertenecientes a estos sectores. Así, un oficial tipo del ejército chileno es integrante de la clase media en cuanto a su origen familiar, pero por su actividad social y profesional crea interconexiones sólidas con la burguesía. Tal situación se veía acentuada en la Fuerza Aérea y la Marina, ramas en que la selección clasista ha sido tradicionalmente más rigurosa.

Es ello lo que define y delimita el corpus ideológico al cual están adscritas. Si bien sus características institucionales diseñan, en ciertos aspectos, una relativa autonomía, en lo sustantivo son ideológicamente tributarias de los sectores pequeñoburgueses. En otras palabras, poseen una «ideología institucional» que no es antagónica, sino complementaria de su «ideología social», en cuanto expresión de las capas medias.

El apoliticismo de las Fuerzas Armadas es otra ilusión creada por el sistema. Se trata de una hábil trampa dirigida a bloquear la influencia social y política del medio ambiente, y más específicamente, la que pudiera ejercer el pensamiento revolucionario. Socialmente el apoliticismo del ejército es un fenómeno unidireccional. En la misma medida en que lo enclaustra respecto de toda influencia ideológica izquierdista, lo entrega indefenso a las ideas reaccionarias.

Hasta fines de la primera mitad de este siglo, el pensamiento militar -al igual que su estructura orgánica interna- aparece notoriamente influido por las tradiciones y concepciones geopolíticas prusianas.

El componente ideológico fundamental es el nacionalismo.

Alimentan el concepto de un destino de «gran nación», de un papel histórico cuya frustración se atribuye a la «demagogia» y a la «politiquería». Esta afirmación nacionalista estrecha, lleva a las Fuerzas Armadas a rechazar intelectualmente la existencia de la lucha de clases, y la politización «disgregadora» de la nación, organizada -según ellos- para el cumplimiento de su «destino histórico».

A partir de la Conferencia de Río de Janeiro, en 1948 (Chile suscribe el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca con EU), las ideas militares se orientan en función de otros factores. El Tratado de Río, impuesto por los norteamericanos en el período más gélido de la guerra fría, incorpora una nueva noción al militarismo: la defensa del hemisferio, en la perspectiva de una eventual guerra mundial.

Es un hecho comprobado, que el ascenso del movimiento popular estimula la preocupación norteamericana -y por cierto la de la burguesía nativa- para mantener una estructura militar cada vez más amplia, eficientemente entrenada y equipada, y dotada de elevado nivel disciplinario. Ella es concebida como la última línea defensiva frente a la amenaza revolucionaria, expresada en el creciente poderío electoral y social de los partidos populares. Mientras la clase obrera ganaba votos, el sistema ganaba fusiles. Desde 1965 empiezan a aumentarse significativamente los montos absolutos de los gastos militares. Chile se ubica -inmediatamente después de Cuba- como el país de más alto índice de personal militar percápita.

El imperialismo norteamericano irrumpe en la formación profesional de nuestros militares usando todas sus variadas formas de penetración, articulando al mismo tiempo una casi absoluta dependencia en el plano tecnológico, y en el aprovisionamiento de material bélico. Podemos medir la magnitud de esta infiltración, si consideramos que entre 1950 y 1972, 4 932 militares chilenos fueron entrenados intensivamente en territorio de EU, y que a contar de 1968, casi todos los cadetes de la Escuela Militar han recibido instrucción antiguerrillera en la Zona del Canal de Panamá, por un lapso de dos meses. Un antecedente., aún más revelador: el 55% de la oficialidad recibió algún tipo de instrucción en centros de adiestramiento norteamericanos.

El ascendiente norteamericano se proyecta indistintamente sobre las tres ramas de los institutos armados. La Marina

chilena, el más reaccionario de los cuerpos castrenses, si bien adhiere románticamente a la tradición inglesa, se somete con igual fidelidad a las ideas y dictados norteamericanos. La Fuerza Aérea, la más joven de las ramas militares, carente de una tradición singular, aparece también firmemente ubicada en la esfera de influencia del Pentágono. La situación de Carabineros, en cambio, muestra algunos rasgos peculiares, útiles de consignar. Sus tareas propias -mantención del orden público- lo vinculan con los problemas reales de la población, determinando contradicciones ausentes en las otras instituciones.

Después del éxito de la Revolución cubana, EU fortalece aún más su sistema defensivo continental, estrechando los nudos vinculatorios con los ejércitos de América Latina. La preocupación militar se homogeniza esta vez en torno a un nuevo concepto catalizador: «El enemigo interno.»

En definitiva, los institutos armados asumen teóricamente tres funciones esenciales: la defensa de la soberanía nacional; la defensa hemisférica, y la defensa de «las fronteras ideológicas».

En última instancia, la tarea básica, la que está en el «orden del día», es la defensa en cada país frente al «enemigo interno». Éste es hoy el adversario principal.

El adiestramiento profesional de las Fuerzas Armadas se realiza casi exclusivamente en función de él y los aparatos de seguridad, la policía, los servicios de inteligencia, se orientan a combatirlo.

Así las originalidades jurídicas establecidas por Pinochet, al establecer por decreto que los partidos populares son «el enemigo», con todo lo aberrantes y absurdas, gozan de la solvencia ideológica anticipada por el imperialismo.
La izquierda chilena, la clase obrera, los campesinos, los intelectuales progresistas, la juventud comprometida, los artistas, son «el enemigo interno», esto es en lenguaje juntista: «los extremistas extranjeros de la Unidad Popular».

Así adquiere hasta cierta lógica, la imposición de un «estado de guerra interno», el cual es la consecuencia represiva natural de la predeterminación del enemigo y la ocupación objetiva del territorio nacional, con los mismos métodos empleados por un ejército extranjero para oprimir una nación avasallada, aunque sin sujeción a las leyes internacionales de la guerra.

Finalmente, es útil dejar establecido, que el fascismo en el interior de las Fuerzas Armadas no es una categoría nueva, que aflora espontáneamente a la luz de la emergencia revolucionaria iniciada en 1970. Ya en el curso de la segunda guerra mundial aparecen grupos y logias de clara filiación totalitaria, sin mayor importancia, pero cuyas huellas han estado presentes en el acontecer nacional. Células del «Opus Dei» funcionaron en las tres ramas de las Fuerzas Armadas, mientras en la Marina operaban filiales de los «Caballeros de Colón», entidad de indudable raíz fascista. De otra parte, a través de la enseñanza militar, impartida en escuelas y academias profesionales, influyeron los mismos grupos hispanistas e integristas, hoy voceros ideológicos de la junta Militar.

EL GOBIERNO POPULAR Y LAS FUERZAS ARMADAS

Hemos reiterado con insistencia premeditada en el hecho de que la desviación principal surgida en el seno de la Unidad Popular, se manifestó en el tratamiento dado a las Fuerzas Armadas. Lo que se hizo y lo que se dejó de hacer.

El análisis histórico de su comportamiento, la justa ponderación de su composición social y las fragilidades de sus concepciones democráticas, debieron llevarnos a elaborar una política, que al menos permitiera consolidar las posiciones constitucionalistas y prever el desarrollo de sus contradicciones internas, en la búsqueda de una resolución favorable. Tal política fue sustituida por otra, que en la práctica permitía a las mismas Fuerzas Armadas dirimir su prescindencia. Así, se renunció al ejercicio de facultades legales para la remoción y promoción de cuadros, aceptándose que actividades sediciosas y aun sublevaciones, se encararan como problemas internos, con tolerancia de su investigación deficiente, disimulo de sus conexiones políticas y sanciones irrisorias a sus responsables. Por otra parte, se menospreció el hecho de sus vínculos con EU.

En definitiva, el gobierno de la Unidad Popular, a falta de una política militar capaz de sustentar un proceso de trasformaciones revolucionarias, se limitó a ensayar un tipo de vinculación que no penetró en las formas tradicionales de manejo de los asuntos castrenses ni alteró la naturaleza formativa de sus cuadros. Tal empeño, al prescindir de su carácter de institución de clase, adquirió una simple connotación superestructural. En general, estuvo orientado a satisfacer sus aspiraciones profesionales (el equipamiento y la infraestructura operativa fueron objeto de una atención jamás dispensada por los gobiernos burgueses), a solventar sus reivindicaciones presupuestarias y establecer un modus vivendi de participación convencional en algunos sectores de la actividad económica. Éstas fueron las premisas básicas y puestas a prueba -necesario es reconocerlo-, resistieron hasta septiembre de 1973, en medio de la más profunda trasformación de la estructura económica de la historia nacional.

La burguesía y el imperialismo sí definieron una política hacia los institutos armados. Entendieron de inmediato que ellos eran su garante natural, y en consecuencia, su quehacer se orientó a lograr el objetivo estratégico perseguido: la insurrección armada. Todo el complejo modelo contrarrevolucionario implementado: la guerra psicológica, el caos económico, la paulatina deslegitimación del gobierno, la imagen de «colosal desorden», tenía un postrer y exclusivo destinatario: las Fuerzas Armadas.

Utilizan todos los recursos, directos e indirectos, enfilados a erosionar psicológicamente los escrúpulos del sector constitucionalista. Tanto se les halaga, como insulta y encarnece públicamente, enrostrándoles su cobardía. Cuando la posición deliberativa de algún oficial trascendía, hasta el extremo de ser llamado a retiro, la reacción le rendía honores de héroe nacional. Tal sucedió con el general Alfredo Canales, en torno al cual funcionaba una activa célula conspirativa,

y con el coronel Alberto Labbé, director de la Escuela Militar, posteriormente designado candidato a senador por la combinación electoral derechista.

Abiertamente, en el discurso político, se llama a los militares a intervenir, llamado que en el último tiempo adquiere, como alguien dijera, la forma de una «invocación mecánica». La oligarquía plutocrática, que durante más de un siglo había preceptuado su confinamiento político, les exige ahora definir opciones y actuar en consecuencia.

Negándose el gobierno a influir en los conflictos internos, de hecho se autoimponía una absurda renuncia a utilizar las facultades pertinentes para la promoción y remoción de sus cuadros. En la búsqueda de la «neutralidad» de los institutos armados, el gobierno anticipaba su propia neutralidad, permitiendo a ellos dirimir por sí solos su prescindencia.

Así los sectores democráticos fueron paulatinamente marcados y aislados. Sin coherencia fraccional, la «neutralidad» del gobierno los condenaba.

La participación militar, incluso su presencia en algunos gabinetes, no modificó la relación de fuerzas al interior de ella. Por el contrario, era utilizada arteramente para debilitar la posición de la oficialidad leal.

Finalmente, la situación interna se resolvió como era previsible. El general Prats, como comandante en jefe del Ejército y ministro del Interior, venía jugando el papel de muro de contención del golpismo. Por ello polarizaba todo el odio de la reacción y, más tarde, el peso de la ofensiva. El asedio para minarlo personal e institucionalmente se implementó de frente y de soslayo. Dos meses antes del pronunciamiento militar, se le montó una provocación pública, en una concurrida avenida de Santiago, donde «providencialmente» se encontraban periodistas y fotógrafos de la prensa reaccionaria. El 21 de agosto se asesta el golpe final. Algunas centenas de mujeres se congregan frente a su residencia para insultarlo soezmente y exigirle su abandono de las filas del ejército. Encabezaban la manifestación las esposas de seis generales y de otros altos oficiales. El vejamen, cuidadosamente concebido, precipita el desenlace: el cuerpo de generales, no obstante la magnitud del agravio, no solidariza ni respalda a su jefe. La renuncia inevitable de Prats y de los generales leales, Pickering y Sepúlveda, desbroza definitivamente el camino del putsch.

Al conocer la renuncia del general Prats, el presidente de la República comisionó a dos altos dirigentes del PC y al autor, el encargo de una última gestión a fin de obtener el retiro de la dimisión. En algunos pasajes del diálogo, el comandante en jefe del Ejército consignó algunas opiniones extraordinariamente reveladoras. Enfatizando su escepticismo sobre la situación en el interior de las Fuerzas Armadas, expresó textualmente:
«- ¡Qué inconcebible error han cometido ustedes! ¡Cómo no aprovecharon la oportunidad de cambiar las jerarquías del ejército, designando -por ejemplo- un capitán como comandante en jefe!»
Cuando uno de sus interlocutores le preguntó sorprendido: «¿Pero ello era posible?», respondió de inmediato: «-¡ Sí! Era posible. Al iniciarse el gobierno era posible. ¡ Hoy no!»

En otro pasaje de la entrevista, cuando argumentábamos sobre lo absurdo de los infundios que se atribuían al PC y al movimiento popular en el seno de las Fuerzas Armadas, en tono casi exasperado nos dice:
«-De ello no me convenzan a mí. Yo sé que el PC ha mantenido una conducta seria y responsable en la gestión de gobierno. Pero el problema es otro: es el anticomunismo irracional que existe en el interior de las Fuerzas Armadas. Éstas están dispuestas a aceptar cualquier propósito descabellado atribuido al PC.»

El 11 de septiembre las Fuerzas Armadas dirimen el «arbitraje». La decisión en favor de la conservación del sistema, se ejecuta con una brutalidad tan inédita y singular, como lo había sido -paradojalmente - inédita y singular la evolución política de Chile. El mundo se asombra y se indigna. El modelo fascista, más que previsible, era inevitable en el nuevo contexto político y social de Chile, pero no lo era la crueldad inaudita y la magnitud repugnante de la violencia desplegada por los «pundonorosos militares».

Para la burguesía nacional y para EU, el golpe «institucional» era la opción racionalmente más favorable. Aventaba los peligros de una guerra civil con un margen de riesgo muy escaso, y colocaba a la clase dirigente en condiciones de iniciar de inmediato la recomposición drástica de la sociedad, sobre la base de una intensiva acumulación de capital y la superexplotación del proletariado. Ello, por primera vez en la historia -al menos durante un tiempo- sería posible sin interferencias democráticas.

Sin embargo, también es obvio que algunas fracciones de la burguesía tenían una opinión de las Fuerzas Armadas no menos deformada que la nuestra, cuando conciben la participación militar sólo en el cumplimiento de la «faena sucia», para retornar posteriormente a sus cuarteles.

Ello, sin embargo, no fue viable. No lo era después de un proceso tan extraordinariamente tenso y polarizado como el transitado por Chile durante tres años. No lo era por la profundidad de las trasformaciones realizadas, el potencial de los partidos proletarios, la magnitud y extensión del movimiento popular y los niveles a los que se empinaba la conciencia revolucionaria de las masas.

En todo caso, el error de ese sector de la burguesía no morigera su responsabilidad. «Más temprano que tarde» el juicio histórico señalará a los culpables. En el banquillo, estarán confundidos, los ejecutores de la carnicería y los venerables repúblicos fabricantes del monstruo. Juntos, los militares fascistas, los generales civiles de la burguesía, y el gobierno de Estados Unidos de América.

AUSENCIA DE UNA POLÍTICA MILITAR

Al analizar el problema de las vías de acceso al poder, afirmamos que el camino elegido -político institucional- llevaba

fatalmente al colapso del proceso revolucionario, desde el instante mismo en que la burguesía lo había desahuciado y, en cambio, buscaba el quiebre de la democracia representativa, como única forma para conservar sus privilegios. Agregamos que a pesar de las enormes dificultades, era factible la implementación de una línea estratégica armada, siempre y cuando la dirección revolucionaria hubiera manifestado la voluntad única y resuelta de llevarla adelante, y concluimos, en que solo tal perspectiva brindaba alguna posibilidad de éxito.

Naturalmente, esta afirmación exige dar respuesta al interrogante principal: ¿en qué forma y con qué medios era posible implementar una estrategia alternativa de esa naturaleza?

En el desarrollo de una línea armada, desempeñaba un papel insustituible, la elaboración de una política militar, capaz de anudar el cordón defensivo del proceso. A ella queremos referirnos.

Desde diversos ángulos se afirma una concepción fatalista acerca del margen de acción del movimiento popular en esta materia. La sostiene la imposibilidad de haber creado milicias obreras y campesinas, capaces de asumir la defensa del proceso. Incluso en determinadas instancias, se insiste en la inviabilidad de proveer al armamento del pueblo. Con el mismo escepticismo se concluye, que cualquiera intervención del Ejecutivo en los mecanismos de promociones, ascensos y asignaciones de mandos militares, redundarían en beneficio de la reacción, toda vez que serían exhibidos como interferencias ilegítimas en los institutos armados.

De ello se infiere, que el proceso revolucionario sólo podía jugar sus cartas a la preservación de un sector constitucionalista, como disuasivo del desarrollo de tendencias golpistas.

De esta manera, las dificultades evidentes que suponía la ejecución de una política militar son consideradas insolubles, eludiéndose así la respuesta a la más seria omisión de la dirección revolucionaria.

No incurriremos en la ligereza de desestimar los riesgos inherentes a tal política. Indudablemente eran extraordinarios. Pero reiteramos nuestra categórica e íntima convicción: asumirlos era una necesidad insoslayable a la cual se vinculaba la única alternativa de continuidad del proceso. Eludirlos, era aceptar pura y simplemente la derrota. Pretendemos demostrar cómo siempre hubo un margen importante de maniobra y tuvimos a mano variantes de acción que pudimos y debimos utilizar.

Una vez planteada la intangibilidad del ejército, como condición de su «neutralidad», se obstruyó cualquier empeño orientado a ganar fuerzas en su interior.

Esta política implicaba, en instantes que fue posible ejercer a plenitud las facultades constitucionales privativas del jefe del Estado, las cuales le permitían promover cuadros y mandos leales, disolver focos potencialmente sediciosos y destituir los elementos golpistas. El presidente de la República podía llamar a retiro al Cuerpo de Generales -individualmente o en conjunto- cuando lo hubiese estimado oportuno. En la misma forma, a través de la junta de Calificaciones, podía exonerar a oficiales superiores. En las últimas décadas, el único gobierno que no asume estas facultades es el nuestro. Tanto Alessandri como Frei, remplazaron íntegramente los tres altos mandos de las Fuerzas Armadas y el de Carabineros, en tres o cuatro oportunidades. Durante el Gobierno Popular, en las escasas ocasiones cuando se ejercieron estas atribuciones, no hubo problemas mayores.

Las posibilidades latentes en el Cuerpo de Carabineros eran insospechadas. En su seno y en todos los niveles jerárquicos había un clima de simpatía hacia el proceso. No debe olvidarse un hecho: los conspiradores fascistas sólo logran reclutar para el golpe a los generales César Mendoza y Arturo Yovane, ubicados en el cuarto y noveno lugar del escalafón. El resto, en definitiva desarticulados, permanecieron algunos leales al proceso; los más al gobierno legítimo. En la Escuela de Suboficiales, al estallar el putsch, la suboficialidad patriótica escribe un episodio heroico combatiendo durante dos días contra las fuerzas insurrectas. Todo ello indica la existencia de condiciones que habrían permitido trasformar a la policía uniformada en un contingente defensivo de extraordinaria importancia. Ella agrupaba a más de veinte mil hombres pertrechados de armamento moderno y con mayor experiencia en la lucha urbana que el propio ejército.

Debo dejar consignado la permanente preocupación del Partido Socialista, el cual en más de alguna ocasión representó formalmente al gobierno la necesidad de reestructurar los altos mandos, promoviendo a oficiales -que los había de más sólido compromiso- y desplazando a aquellos manifiestamente hostiles al régimen.

Sin embargo las cosas operaban en sentido inverso. El sector sistemáticamente desarticulado fue precisamente el democrático. Siempre estuvo a la defensiva. No obstante constituir mayoría, eran los oficiales y suboficiales leales -y no los conspiradores- quienes actuaban clandestinamente, toda vez que los obedientes al gobierno eran postergados en sus ascensos, o lisa y llanamente dados de baja. La situación termina por adquirir una expresión grotesca después del frustrado golpe del 29 de junio de 1973. En lugar de ser eliminados los oficiales comprometidos en la conspiración, se manipula con éxito la renuncia del general Prats y tras ésta, la de los generales Pickering y Sepúlveda, todos de conocida inspiración constitucionalista.

Por otra parte, un trabajo serio y coherente hacia el interior de las Fuerzas Armadas debió orientarse a organizar y agrupar los elementos potencialmente leales al gobierno, que tenían un peso significativo y encarnaban, al igual que en otros ejércitos latinoamericanos (Perú, Argentina, Panamá, Ecuador), el desarrollo de tendencias democráticas y progresistas. Sin embargo, éstas permanecieron sólo como tendencias y no llegaron jamás a formar estructuras fraccionales. Carentes de una ligazón orgánica, serán barridos por una minoría fascista, audaz y resuelta, con claridad e identidad de objetivos, y sí constituida en fracción.

Indudablemente hubo altos oficiales comprometidos con el proceso.

Su presencia en el interior de las Fuerzas Armadas no era en modo alguno una ilusión óptica. Durante un período importante llegaron a tener hegemonía en los altos mandos. La derrota final no hace sino destacar su fuerza, aun después de haber sido descabezados y reprimidos institucionalmente durante tres años por los grupos sediciosos. Decenas de oficiales, suboficiales y personal de tropa fueron asesinados. El fascismo cobró en sus vidas el precio de su lealtad al gobierno legítimo. Son decenas los que aún permanecen encarcelados. Los procesos infames incoados a los sobrevivientes, a lo largo del país, ponen al descubierto su existencia malbaratada. Sólo dos de esos juicios han trascendido a la opinión pública: el entablado contra oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea, que compromete a más de 60 militares y cuesta la vida del general Alberto Bachelet; y el iniciado, con antelación al golpe, en contra del personal de la marinería, por haber denunciado las acciones conspirativas de almirantes y altos oficiales de la Armada. Anteriormente hemos mencionado el sacrificio heroico de la suboficialidad de carabineros, masacrada bárbaramente por negarse a adherir al golpe.

En resumen, contábamos con un grupo significativo de oficiales de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, en torno a los cuales debió concretarse una tarea orgánica, en el ámbito de una línea estratégica correcta.

Un contingente militar básico, leal al gobierno, con organicidad interna, estructurado en la perspectiva del enfrentamiento, cuya cohesión se asegurara en la ejecución de una política global, pudo -a no dudarlo- haber alterado el destino del putsch fascista. Traemos en nuestro apoyo la experiencia histórica. Cuando se inició la insurrección en España, el gobierno frente populista se encontraba en franca desventaja militar. La inmensa mayoría de los jefes y oficiales del ejército secundó la rebelión. Con todo tener a su lado sólo un núcleo limitado de oficiales y tropas, permitió articular una fuerza militar sobre la cual se construyó, durante tres años, la heroica defensa de la República. Esta fuerza -indudablemente- habría alcanzado la victoria de no haberse efectuado la intervención abierta y descarada de las potencias fascistas.

En Chile, también pudo y debió realizarse un esfuerzo serio y sostenido de penetración en la suboficialidad y en la tropa. Su importancia y proyección parece indiscutible si se tiene en cuenta la experiencia histórica. Al iniciarse la guerra civil en España, permanecieron leales a la República, cinco de cada cien oficiales de la Armada. Sin embargo, la marinería, las clases y el cuerpo de auxiliares, fervorosamente republicanos, evitaron la sublevación de la Armada, hecho que impidió a Franco trasladar las tropas de África y le obligó a recurrir a los aviones alemanes. Esta circunstancia retrasó la invasión.

Naturalmente, para conseguir tales resultados no eran suficientes los llamados consignistas a la división horizontal de las fuerzas armadas formulados en los instantes finales.

Por otra parte, tuvimos la oportunidad y los medios institucionales para estructurar en el interior de las Fuerzas Armadas, al menos en el ejército, un servicio de inteligencia leal, con oficiales afectos al régimen en su dirección. Por el contrario, durante toda la gestión de la up, esos aparatos permanecieron, como había acontecido tradicionalmente, articulados directamente con la CIA y el Pentágono. Testimonios ulteriores han demostrado cómo en Chile desempeñó un papel decisivo el servicio de inteligencia de la Marina norteamericana. El resultado práctico de esta omisión fue la permanente desinformación del gobierno, realizada precisamente por los servicios de inteligencia encargados de lo contrario. Ello explica que el «más leal» de los generales, Augusto Pinochet, pudiera conspirar tranquilamente -según propia confesión- desde los primeros meses del año 1972.

Finalmente, en la implementación de una política militar era imprescindible consolidar bases de apoyo en algunas unidades militares estratégicas, utilizando los mecanismos legales de traslados, promociones y destituciones. La ausencia de estas unidades, resultó dramáticamente significativa a la luz de la derrota del 11 de septiembre. Una vez más lo repetimos: si el pueblo hubiera contado con el apoyo de unidades militares, al menos en la capital, la historia se hubiera escrito de manera diferente. La combatividad de los trabajadores, la decisión de lucha exhibida en las últimas jornadas, hubieran alterado sustancialmente la correlación de fuerzas. La pandilla fascista lo sabía y por ello sólo se decide actuar, cuando abriga la seguridad de que los trabajadores están desarmados. Además, una mínima expresión de poder en el seno de las Fuerzas Armadas, habría mantenido junto al gobierno a un alto número de oficiales vacilantes, los cuales solamente definieron su destino -y con ello salvaron la vida-, cuando la balanza militar se inclinó sin dejarles otra alternativa que el heroísmo suicida o el sometimiento realista. Es un hecho comprobado que muchas unidades del ejército no se pronunciaron mientras no estuvo definido claramente el problema del poder. El regimiento «Buin», una de las unidades más poderosas de Santiago, en cuya adhesión los golpistas no confiaban, fue trasladado fuera de la capital el día anterior al asalto.

Esta situación se hizo patente con ocasión del frustrado golpe del 29 de junio de 1973. La falta de una respuesta enérgica puso en evidencia la enorme debilidad del gobierno, a la par que terminó por desmoralizar a los sectores constitucionalistas, aún gravitantes. Cientos de oficiales expresaron su disposición de apoyar al Presidente constitucional. Se presentó la oportunidad última e inapreciable -desde luego no exenta de riesgos- de desarticular la estructura fascista. Moral y legalmente, tomar la iniciativa, realizar una acción ofensiva del Poder Ejecutivo, aparecía plenamente justificada. El efecto práctico del repliegue, fue dejar sin dirección a los grupos leales y alentar la faena, desde ese instante desembozada, del golpismo.

Creo importante cerrar estas reflexiones destacando una circunstancia asaz absurda. La Unidad Popular no contó con una «política militar». Tampoco elaboró un plan elemental de defensa del gobierno cuando el desenlace parecía inminente. El único plan existente es el que Pinochet discutió con el presidente Allende. El gran administrador de la masacre era custodio y garante del gobierno legítimo.

Queda en pie otro interrogante: ¿Era posible armar al pueblo?

Considerada esta opción como medida aislada, era extremadamente difícil. En el contexto de una estrategia global, sí era posible.

Existían disposiciones legales a cuyo amparo podía ensayarse la organización de dispositivos armados. Éstos, de otra parte, no eran ajenos al acontecer nacional. Hace más de un siglo, Diego Portales creó cuerpos de «guardias civiles» para enfrentar al caudillismo militar. En tiempos más recientes, en 1932, la derecha chilena organizó las llamadas «milicias republicanas», las cuales reunieron más de cien mil hombres bajo las armas; lo hizo con el propósito de enfrentarlas a un ejército sobre cuyas posiciones «izquierdistas» desconfiaba. Más o menos en la misma época, el Partido Socialista y el Movimiento Nacional Socialista, versión criolla del nazismo alemán, organizaron también grupos paramilitares. En 1947, la reacción estructuró otro ,grupo armado: la Acción Chilena Anticomunista (ACHA).

Señalo los antecedentes históricos con la sola intención de contribuir a disipar la opinión bastante común sobre la total impracticabilidad de la empresa.

¿Hubo posibilidad de entregar armas al pueblo para enfrentar una coyuntura de emergencia?: Todavía no están dadas las condiciones históricas para responder con mayor claridad a este interrogante. Pero mientras tanto, podemos afirmar con absoluta seguridad: ¡Sí, las hubo! Ello fue posible hasta las semanas inmediatas al golpe.

A modo de resumen. La vertebración de una estructura militar defensiva del proceso debió asegurar la convergencia de diversos factores: consolidar al sector progresista de las Fuerzas Armadas (militares constitucionalistas y comprometidos con el proceso), cautelar el aislamiento gradual de los grupos conspirativos; asegurar la lealtad de algunas unidades militares estratégicas; constituir dispositivos paramilitares; y adoptar las medidas para armar al pueblo en la emergencia y prepararlo anímicamente para ello.

De estos elementos, sólo el último operó en la experiencia chilena. Los mil días luminosos de la Unidad Popular vieron el despertar de una clase que toma conciencia de su fuerza y de su papel histórico.

Frente al adversario de clase mostró la amplia gama de su capacidad creadora y desplegó al más alto nivel su espíritu revolucionario. Cuando la ofensiva imperialista arreciaba, las masas generaron órganos de poder y dirección. Frente a la burguesía insurrecta en el paro patronal de octubre de 1972, los trabajadores de Chile muestran un grado de madurez y de conciencia que sorprende a sus propias direcciones. Hicieron andar el país cuando la burguesía intentó paralizarlo. hasta la caída del gobierno siguieron multiplicando su esfuerzo creador en cada plano de la actividad nacional. Una profunda revolución en las conciencias, nació al calor del proceso y fue ella su máxima creación. Es la garantía de la derrota inevitable del fascismo.

Si este espíritu del pueblo, si aquella esperanza en un Chile nuevo, hubiera logrado horadar las murallas de los cuarteles, como en Portugal, llevando aire fresco a la estereotipada ideología de nuestros militares, la suerte del proceso hubiera sido diferente.

11.- LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS EN LA TRANSICIÓN AL SOCIALISMO

No intentamos hacer un enjuiciamiento minucioso acerca del diseño y la implementación de la política económica durante el gobierno de la UP. Recusamos del mismo modo, la pretensión de situar el análisis en la perspectiva convencional -válida para otros fines- de evaluar su eficiencia y coherencia desde el punto de vista de la ciencia económica oficial.

A nuestro juicio, cualquier esfuerzo analítico de la coyuntura 1970-1973 debe partir considerando dos hechos esenciales: la puesta en ejecución de un proceso de trasformaciones revolucionarias, por una parte; y por otra, la existencia de una estructura económica devenida en franco obstáculo al desarrollo del país.

Los partidos populares asumieron la conducción de la nación en 1970, para promover un proceso de cambios estructurales, con vista a iniciar la construcción del socialismo, partiendo del traspaso del poder económico de los grupos dominantes a los trabajadores. La gestión económica quedaba entonces supeditada a este objetivo político superior. No era éste un gobierno tradicional, cuyo fin último fuera superar las tasas históricas de desarrollo económico. Dicho en otras palabras, se trataba de una experiencia que no debía ser medida -en una primera etapa- por sus resultados económicos, sino por sus logros políticos. Nunca se pretendió que el éxito en lo primero, despejara el camino a lo segundo. Por el contrario, se sobrentendía que era la consecución del objetivo político: el control del poder, lo que permitiría resolver los problemas económicos.

Nos interesa, por ello, avanzar algunas consideraciones sobre las relaciones existentes entre la lucha por el poder político, las trasformaciones de las estructuras socioeconómicas y la política económica. En nuestra opinión, la comprensión insuficiente de los problemas que genera un período de transición, y el desconocimiento de los desequilibrios que se expresan en los planos económico y político, interfirieron en el desarrollo del proceso y contribuyeron a su frustración posterior.

Es esencial, por tanto, empezar por establecer la interacción entre aquellos planos, en función de las trasformaciones estructurales, que el movimiento popular se impuso como objetivos de su política económica.
El Gobierno Popular, establecido luego de la victoria de Salvador Allende, fue el resultado -no previsible, pero tampoco fortuito- de un largo proceso histórico, durante el cual maduró la conciencia política de vastos sectores de la ciudadanía, como correlato del desarrollo de profundas contradicciones en el seno de la sociedad chilena.

En el nivel estructural básico, dichas contradicciones se expresaban como una contraposición creciente entre la necesidad objetiva de acelerar el proceso de desarrollo económico y social -orientado hacia la satisfacción de las necesidades fundamentales de las grandes mayorías nacionales- y la presencia cada vez más deformante del capital imperialista. Éste, aunque asentado en el enclave exportador tradicional, dominaba los sectores más dinámicos del universo industrial, determinaba el patrón de crecimiento de la economía y sus mecanismos de funcionamiento, e imponía, de paso, la lógica implacable del «desarrollo del subdesarrollo».

En el nivel más alto de la superestructura política -el de los valores y representaciones ideológicas— esa contradicción se percibía en la inviabilidad de una alternativa de liberación, dirigida por la burguesía nacional. Lo impedía su incorporación orgánica al complejo de estructuras y relaciones de la dependencia, en calidad de clase dominante-dominada. El test histórico crucial de tal alternativa -entendida como un ensayo de modernización del capitalismo dependiente y de armonización de exigencias irreconciliables- se materializó en el fracaso de la experiencia del gobierno democratacristiano. Ese gobierno intentó, en un primer momento, impulsar una política de cambios capaces de remover los obstáculos opuestos a una expansión capitalista satisfacer, simultáneamente, difundidas aspiraciones populares; y crear, en general, las premisas para un desarrollo autosostenido, rápido y estable, basado en estructuras sociales y económicas más diversificadas.

La dinámica generada en el curso de esta experiencia, exacerbada por el compromiso evidente de la cúpula gobernante con los intereses estratégicos de la burguesía y el imperialismo, y por la reiterada utilización de instrumentos represivos, condujo finalmente al debilitamiento de la base social y política de la llamada «Revolución en Libertad». Su fracaso generó una convicción: los obstáculos al desarrollo nacional autónomo y la satisfacción de las aspiraciones populares, no son imputables al imperialismo, como realidad exógena al sistema ni a la supuesta persistencia de relaciones de contenido precapitalista, sino al modo específico de existencia y reproducción de las relaciones de producción, y de sus estructuras históricamente cristalizadas en la formación social, conocida como capitalista dependiente.

De este modo, la lucha por la independencia nacional, por la liquidación del atraso tecnológico; la eliminación de las barreras a un desarrollo autosostenido y a la justicia social, asumiría la forma de una movilización -no siempre coherente pero cada vez más decididaorientada a la sustitución del complejo de relaciones de producción vigentes.

El desafío planteado en 1970 exigía combinar, de una parte, un proceso de acumulación de capital, indispensable para lograr un crecimiento económico rápido; y de otra, el incremento de los niveles de consumo de las masas, los cuales redundarían en más apoyo político. Ello generaba un círculo vicioso difícil de romper. La necesidad de un mayor respaldo social, obligaba a mejorar el estándar de vida de la población, mediante una redistribución masiva del ingreso en favor de los sectores más postergados. Ésta, a su vez, entraba en contradicción con una política de acumulación, capaz de procurar más elevados porcentajes de inversión.

De esta manera, la salida política estaba condicionada por la situación económica y ella, por su parte, para ser resuelta, exigía disponer de una creciente autoridad política. Así, el diseño económico se orientó, en el corto plazo, a provocar una reacción económica, cuyo efecto sería ampliar la base de sustentación social del proceso para emprender -a contar de ella- una trasformación radical de la superestructura institucional.

Parece oportuno adelantar, que dentro de esta perspectiva el Gobierno Popular tuvo pleno éxito. En el primer año, conjuntamente con implementar las tareas nacionalizadoras establecidas en el programa, se logró un aumento espectacular del producto nacional bruto (8.3%) y un crecimiento industrial de más de un 12%, en un contexto de pleno empleo y control de la inflación. Como estaba previsto, aquel éxito se reflejó de inmediato en las elecciones municipales de abril de 1971, en las cuales las fuerzas populares obtienen más del 50% de los sufragios. No obstante, como insistiremos más adelante, la estrategia económica elaborada se interrumpió al renunciarse a adoptar las medidas políticas exigidas por ese triunfo.

En el marco de los hechos enunciados convergieron una serie de factores adversos que interfirieron gravemente en la política económica. Están en primer término, aquellos atingentes a una estructura económica heredada. También influyeron en forma significativa situaciones coyunturales de orden internacional. Otros son provocados artificialmente por el imperialismo y la burguesía nacional. Figuran asimismo elementos distorsionadores, consustanciales a un proceso radical de cambios. Y finalmente -no por ello menos trascendentes- los errores imputables a la dirección económica del Gobierno Popular.

Nos parece útil ponderar cada uno de estos factores.

LA ESTRUCTURA ECONÓMICA HEREDADA: OBSTÁCULO AL DESARROLLO

Hacia 1970, la economía chilena se caracterizaba por un alto grado de concentración monopólica industrial y financiera; un régimen latifundario en la organización del agro; un comercio exterior monodependiente -75% proviene del cobre- y una extraordinaria sensibilidad a las fluctuaciones del metal rojo. Ya hemos señalado en otro capítulo los grados de extrema subordinación financiera y comercial a EU.

La persistencia de esta formación capitalista dependiente condujo al país a un estancamiento crónico, acompañado de una de las tasas inflacionarias más altas del mundo. La fluidez de los créditos externos actuaba como simple paliativo de la crisis económica. La deuda externa superaba los 4 mil millones de dólares, la mayor del mundo medida percápita, después de Israel. El país acusaba además una tasa de crecimiento bajísima: uno y medio por ciento percápita durante los años 1968-1970.

En síntesis, la estructura económica heredada por el Gobierno Popular estaba determinada por los siguientes rasgos fundamentales: la insuficiente integración del sistema económico, y la gran heterogeneidad de los sectores primario extractivo, industrial y agrario; el crecimiento absolutamente desigual de éstos; la subutilización de la capacidad instalada; la extraordinaria concentración de la riqueza y del ingreso; el insuficiente nivel de acumulación; las altas tasas de desocupación estructural; la distorsión de las relaciones comerciales y tecnológicas y la concentración geográfica del desarrollo. Estos factores incidían de manera determinante en el desarrollo económico del país, y era ingenuo intentar la solución de los problemas económicos sin provocar previamente una alteración radical de aquéllos.

De otra parte, si queremos fisonomizar claramente las debilidades del sistema capitalista dependiente chileno, debemos precisar algunas características funcionales. Nos referiremos sólo a dos de ellas, las de mayor incidencia: el papel del Estado en la vida económica y la inflación y el endeudamiento, como condicionantes del desarrollo económico nacional.

En Chile, el impulso decisivo para la instalación y expansión del poder de la burguesía industrial fue suministrado por el Estado mediante su política proteccionista. Dicha política realizada a través de la aplicación de altos aranceles a las importaciones de bienes competitivos con la producción interna, y la fijación de tasas de cambio preferenciales para la importación de equipos y materias primas esenciales, configuró el crecimiento extensivo de una estructura industrial ineficiente, cuyas tasas de ganancias fueron tradicionalmente defendidas, no por la vía de los incrementos de productividad y la disminución de los costos, sino por la de ajustes sistemáticos de precios, facilitados por la concentración monooligopólica y la inflación.

Una medida de la intervención decisiva del Estado, a fines de la década del 60, es la de su participación en el empleo global -alrededor de un 10%- en el valor agregado total -19.4%-, en el excedente generado medido por el valor agregado menos los costos directos de producción -43%-, y en el financiamiento de la inversión total en capital fijo - aproximadamente las tres cuartas partes en 1970.

A través de su acción económica directa -vinculada al gasto público y más específicamente a la actividad inversionista-, el Estado insuflaba dinamismo al sistema económico para compensar la insuficiencia del gasto privado, evitar las oscilaciones violentas del nivel de actividad, subvenir a necesidades básicas de la población y apoyar el desarrollo general, a través de la ampliación y modernización de la infraestructura (riego, energía, trasporte, vialidad, etcétera).

La participación del Estado en el proceso de acumulación llegó a ser claramente dominante. Mientras el coeficiente promedio de inversión con respecto al PGB, alcanzaba un 16.1% en el decenio 1961-1970, la inversión pública directa aumentó en el mismo período de un 39 a un 490% de la inversión global (esto es, de un 6.6 % a un 8 % del PGB). Sin embargo, desde el punto de vista de su financiamiento, la función estatal era aún más decisiva. En el último año cubrió el 74% de la inversión geográfica bruta, habiendo sido inicialmente de un 46%. Dicho en otras palabras: durante el último decenio no sólo se produjo una sustitución importante de inversión privada por inversión pública directa (con un coeficiente de inversión global ligeramente decreciente), sino además una sustitución de fondos privados por fondos públicos en el financiamiento de la inversión privada.

~~Estos~~ hechos, la mantención de una tasa de inversión geográfica insuficiente -ostensiblemente disminuida si se excluyen las cuantiosas inversiones extranjeras en el cobre entre 1965 y 1970-, el considerable aumento de la

inversión pública indirecta y el vertiginoso incremento del endeudamiento externo(1), constituyen por sí solos un juicio lapidario sobre las potencialidades reproductivas evidenciadas por el patrón del desarrollo impuesto por el capitalismo dependiente, después de más de treinta años de esfuerzo industrializador.

El aporte externo que en 1965 financiaba el 30%i de la inversión geográfica total, llegaría a cubrir en 1970 un 46%.del desarrollo impuesto por el capitalismo dependiente, después de más de treinta años de esfuerzo industrializador.

A partir de los años cincuenta el desarrollo económico chileno fue acompañado por un proceso inflacionario persistente, que pasaría a constituir una referencia obligada de las políticas económicas aplicadas por los sucesivos gobiernos. El análisis de las causas de este fenómeno ha sido objeto de una encendida y fértil polémica, tanto en medios académicos como políticos. Hasta el día de hoy, se mantienen las diferencias respecto de los mecanismos que lo causan y propagan y sobre las medidas a adoptar para su control. Esto no es casual. La identificación de tales mecanismos y políticas supone la adopción de posiciones, no sólo en el plano técnico, sino también ideológico. De este modo, es natural e inevitable que el problema de la inflación trascienda los marcos de la discusión meramente académica para constituirse en factor fundamental de la lucha política.

En medida no desestimable, el proceso inflacionario aparece como una expresión de la pugna entre el «capital» y el «trabajo» por la distribución del ingreso. Por la vía de los incrementos autónomos de la tasa de ganancias (aumento de precios) y de las remuneraciones, aquellos factores disputan su participación en el ingreso total. Esta pugna tiende a hacerse constante, generando sucesivas e ininterrumpidas alteraciones, que originan a su vez, nuevas reivindicaciones. Cada alteración deja planteada una nueva demanda del sector perjudicado, el cual se moviliza en el acto con el propósito de recuperar la participación que ha perdido.

De aquí, que un rasgo común de los «programas estabilizadores», puestos en práctica, sea la contención de sueldos y salarios, mecanismo por medio del cual el sector que detenta el poder, impone a los asalariados la aceptación de una participación disminuida en la distribución del ingreso. Estas políticas, invariablemente, tienden a implementarse con el concurso de medidas represivas.

Sin embargo, la contención de la demanda no conduce automáticamente a condiciones de estabilidad. Y la experiencia chilena, bajo el régimen fascista lo está demostrando una vez más. La limitación de la capacidad de consumo, desincentiva la producción, y trae consigo una disminución de la actividad económica. Se produce así un descenso de las utilidades de los empresarios, que nuevamente los empuja a defender sus tasas de ganancias, mediante el aumento de los precios. El espiral vuelve a reactivarse, planteándose ahora la pugna en torno a un ingreso global disminuido. Queda así al descubierto la debilidad de la interpretación «monetarista», que ve la inflación como un problema de exceso de demanda, en el que la contención de ésta se exhibe como el remedio infalible del mal.

En Chile, la aplicación pertinaz de políticas centradas en la reducción del exceso de demanda ha incidido en la disminución de la tasa de crecimiento con severa depresión de la actividad urbano-industrial y el aumento significativo del desempleo, con el agravante de no haberse alcanzado los objetivos deseados, en razón de la influencia negativa del carácter monooligopólico de la competencia. En definitiva, los programas de estabilización -políticas monetarias restrictivas, congelación de sueldos y salarios, contención de sus aumentos nominales, reducción drástica del gasto público, devaluación y control de las importaciones, y el otorgamiento de precios remunerativos a la agricultura- no han eliminado las presiones inflacionarias básicas. A lo más han logrado entrabar momentáneamente los mecanismos de autoimpulsión inflacionaria, el alto costo social de la desaceleración del crecimiento, el aumento del desempleo y la polarización regresiva del ingreso.

La experiencia descrita lleva a concluir que las políticas de contención de la demanda han sido, en última instancia, irrelevantes para la solución del problema inflacionario en el contexto de una economía con alto grado de desequilibrio, en tanto esto no sea superado por la vía de las trasformaciones estructurales.

Nos hemos extendido latamente en la descripción de la estructura heredada. No lo hemos hecho ciertamente por afanes pedagógicos, sino para transferir una imagen nítida de la magnitud de la tarea que debió enfrentar el gobierno de la Unidad Popular. La trasformación de esta estructura no era un problema secundario en la gran empresa de construir el socialismo. Requería de un esfuerzo prolongado, el cual sólo podía enfrentarse desde posiciones de poder. Mientras no se resolvieran estos problemas estructurales de la economía chilena, era inútil intentar el mejoramiento de la situación económica. y pretender elevar los niveles de vida de las grandes masas, objetivo que, como lo hemos expresado más de alguna vez, se revertía sobre la urgente necesidad de ganar apoyo social para fortalecer el poder político del gobierno.

Y no era sólo este enorme desafío -la pretensión de provocar un cambio revolucionario de las estructuras, dentro de un régimen de absoluta libertad, y a mayor abundamiento, desprovisto de poder real- el que el Gobierno Popular debía enfrentar. Situaciones coyunturales internacionales sobrevinientes, interfirieron gravemente en el desarrollo de los acontecimientos.

LA COYUNTURA INTERNACIONAL: DIFICULTADES IMPREVISTAS

Las fluctuaciones del comercio exterior impactaron gravemente la economía del país entre los años 1970 y 1973. La recesión del mundo capitalista trajo como consecuencia inmediata la caída del precio del cobre y el alza considerable de los productos agropecuarios: Si a ello agregamos el efecto de la inflación internacional, tenemos un cuadro devastador, sólo comparable al daño ocasionado por el cerco financiero deliberadamente articulado por el imperialismo.

(1) El aporte externo que en 1965 financiaba el 30% de la inversión geográfica total, llegaría a cubrir en 1970 un 46%

El precio del cobre, singularmente generoso durante la administración de Frei, alcanzó sus índices más bajos en 1972, con un promedio anual de 48.5 centavos de dólar por libra. Ello se produce en el mismo instante en que las importaciones chilenas se elevan sustancialmente por efecto del alza de los precios internacionales de los productos agropecuarios.(2) La pérdida real para el bienio 1971-1972, por el solo concepto de aquel deterioro, alcanza la suma de 413 millones de dólares.

LA AGRESIÓN BURGUESA-IMPERIALISTA

Pero había aún más, no sólo se trataba de trasformar radicalmente la estructura económica y social de Chile y de resolver los problemas de una coyuntura internacional absolutamente desfavorable. Era necesario también enfrentar la resuelta y abierta agresión del imperialismo norteamericano y de la burguesía nacional.

Ya nos hemos referido a las aristas variadas de la agresión económica externa al describir la intervención desembozada e intimidatoria de EU tanto en el curso como en el desenlace del proceso.

No parece necesario reiterar las alternativas complejas de aquella ofensiva. Pero sí es útil recordar algunas consideraciones que ponen de manifiesto la influencia decisiva de aquella agresión en la crisis económica.

Sobre este objetivo convergieron el bloqueo financiero, inicialmente invisible, más tarde público; las medidas comerciales restrictivas y los embargos impuestos sobre el comercio del cobre. El imperialismo norteamericano, haciendo tenaza con la burguesía nacional, concentra su esfuerzo en provocar la crisis global. Como gráficamente lo instruyera el presidente Nixon, se trataba de «hacer aullar la economía».

Pocos países de América Latina muestran una estructura económica tan sensible a los factores externos, y más específicamente a las fluctuaciones del comercio con EU. El 75% de nuestro comercio exterior provenía del metal rojo. El 65% de los bienes de capital dependían de importaciones norteamericanas. En 1970, el 78.4% de los créditos comerciales de corto plazo tenían su origen en bancos de EU. Nuestra infraestructura minera e industrial era de tal modo dependiente de los abastecedores estadounidenses, que en 1971 la retención de una simple partida de repuestos, cuyo valor de importación no excedía de los cien mil dólares, redujo por un tiempo considerable la producción de cobre.

Los estrategas del bloqueo pesaron escrupulosamente la vulnerabilidad de nuestra economía. Los analistas de la CIA y del gobierno norteamericano propusieron medidas y señalaron sus consecuencias. Fría y metódicamente las implementaron para alcanzar en el menos tiempo posible el objetivo señalado por Nixon. La agresión económica cuidadosamente planificada y ejecutada, produce efectos catastróficos y pasa a ser decisiva en el deterioro económico del país entre 1970 y 1973. Ella fue denunciada enérgica y dignamente por el presidente Allende ante el mundo, en el discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1972.

La burguesía nacional entendió que estaba cuestionada su supervivencia como clase dominante, y en consecuencia coincide plenamente con el gobierno de EU en la necesidad de hacer fracasar -a cualquier precio- la experiencia liberadora. La crisis económica era la crisis del régimen institucional sobre el cual descansaba la acción del Gobierno Popular y el factor precipitante del alzamiento militar tan afanosamente deseado.

No pocas veces nos hemos referido con anterioridad a la amplitud, complejidad y perfección del modelo elaborado por la Agencia Central de Inteligencia de EU. La ofensiva utiliza todas las variables de acción y se da en todos los frentes. En el Parlamento y en la asonada callejera; emplea la prensa y la televisión, al mismo tiempo que la huelga ilegal y el mercado negro; se ubica en el plano institucional, al igual que en el terrorismo y en el sabotaje.

La oposición parlamentaria impide el financiamiento del presupuesto fiscal, generando así un nuevo factor de presión inflacionaria. De hecho, durante los tres años del Gobierno Popular, la mayoría derechista aprobó un financiamiento promedio equivalente a sólo un 20% de los recursos necesarios para solventar las leyes de reajuste de salarios, elevando de esta manera el déficit fiscal de un 33% en 1971 a un 42% en 1972 y al 50% en 1973. La magnitud de este déficit se trasformaba así en la principal causa de la expansión monetaria y en el más gravitante factor inflacionista.

El paro empresarial de octubre de 1972, organizado sor la burguesía, costó al país más de 200 millones de dólares y paralizó el trasporte de un millón de toneladas diarias de alimentos, combustibles, materias primas y otros productos. Más tarde, la huelga de los supervisores y técnicos de las empresas cupríferas (mayo-junio de 1973), significó una pérdida neta de sesenta millones de dólares sor concepto de disminución de exportaciones de cobre.

El grado de decisión en el propósito de provocar la caída del gobierno, arrastró a nuestra clase dominante a medidas de extrema criminalidad: trescientos mil vacunos fueron contrabandeados a Argentina; se promovió la matanza indiscriminada de vaquillas destinadas a la reproducción; miles de hectáreas quedaron sin sembrar; no se regaron ni abonaron sementeras ni se desinfectaron oportunamente los frutales. Un dato revelador: diez millones de litros de leche fueron arrojados a los ríos y caminos durante la huelga de octubre. Tal era la magnitud del odio. ¡ El diluvio antes que Allende!

De otra parte, la burguesía deslazada de los latifundios, de los bancos y la industria monopólica, reorientó su poder económico a la especulación. Una nueva plutocracia especulativa emerge para reorganizar el mercado negro, provocar la escasez artificial, acaparar e incentivar la psicosis de consumo. Millones de dólares fueron distribuidos para sembrar la desconfianza y estimular la inflación.

(2) Entre 1970 y 1972, el precio al por mayor en los mercados internacionales se elevó: carne en un 40%, azúcar en un 97%,trigo en un 33%, cuero en un 127%, etc.

Mientras tanto, el aparato publicitario de la reacción trasformaba las acciones conspirativas en réditos políticos. El desabastecimiento, el mercado negro y la especulación se exhibieron como la consecuencia directa de los desaciertos gubernativos.

LOS ERRORES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

Como hemos podido apreciar, la tajea que debía enfrentar el proceso revolucionario era simplemente ,gigantesca. El reto era casi insoluble en las condiciones específicas en que aquél se desarrollaba. Trasformar revolucionariamente las estructuras sociales y económicas, resolver los problemas coyunturales derivados de las bruscas fluctuaciones del comercio internacional, y al mismo tiempo, enfrentar la colosal ofensiva económica, financiera y política, del imperialismo y la burguesía. Es en este contexto en el que deben ser ponderados los errores, las insuficiencias y los vacíos de dirección, que le son imputables a la UP.

La trasformación de las estructuras socioeconómicas fundamentales debía enfrentarse conjuntamente con la aceleración del proceso de crecimiento y su ulterior sustentación sobre una nueva organización. Ésta, cristalizada en un área de propiedad social dominante, se inscribe en una concepción estratégica, que superando los estrechos límites del tecnocratismo conservador y del reformismo burgués, debía redefinir las vías y objetivos del desarrollo nacional.

El proceso iniciado con el triunfo de Allende, presentaba un carácter esencialmente diferente al de otras experiencias revolucionarias. Invariablemente éstas empezaron por resolver el problema del poder. Así fue en la URSS, en China o en Cuba. La especificidad del proceso chileno se encontraba precisamente en que el intento de sustitución de las instituciones y estructuras capitalistas, debía implementarse antes de haberse conquistado el poder.

Tal singularidad estaba preñada de implicancias teóricas y prácticas. Por de pronto, alteraba drásticamente la secuencia clásica de las interacciones entre la esfera de lo económico y lo político, tornando irrelevante -tanto para el diseño como para la implementación de la política económica— los esquemas históricos, centrados en la aceleración del crecimiento sobre la base de la acumulación socialista originaria. Este mecanismo de crecimiento requiere la supeditación estricta de la política económica de corto plazo a la política económica estratégica definida por las fuerzas hegemónicas de la revolución triunfante. Las tensiones de todo orden que la realización de un programa de acumulación intensiva desatan en un país pequeño y atrasado, exigen para su superación, no sólo un flujo apreciable de apoyo económico y técnico externo, sino también la existencia de un elevado grado de hegemonía política interna, acompañada de la fuerza coercitiva necesaria para enfrentar a los enemigos de la Revolución.

En el caso chileno, resultaba clara la inviabilidad de tal alternativa. Ello se explica no sólo por la inexistencia de los prerrequisitos referidos -poder, vanguardia hegemónica y fuerza coercitiva- sino porque el ejercicio del gobierno y la instrumentalización de la política debían efectuarse en un contexto institucional sui generis, caracterizado por una aguda lucha de clases y por el desarrollo simultáneo y creciente del conflicto social, dentro y fuera del aparato del Estado.

Acentuaban aún más la particularidad referida, dos circunstancias significativas: en primer lugar, si bien el bloque burgués había experimentado una derrota política de envergadura, conservaba intacto su peder económico v una considerable capacidad de liderazgo sobre un sector significativo de la población, ligado orgánica e ideológicamente al sistema. En segundo lugar, la posibilidad de trasformación revolucionaria de la sociedad, abierta por la victoria electoral, tenía lugar en un país, que a lo largo de su historia había alcanzado un estructura social compleja, caracterizada por una fuerte gravitación política y social de los sectores pequeñoburgueses. Estas capas, sometidas a la presión centrífuga desatada por la implementación del Programa de Gobierno, terminarían asumiendo un papel activo en la definición del conflicto básico entre burguesía y proletariado.

En síntesis, la opción fundamental de la política económica de corto plazo estaba, en términos generales, unívocamente determinada. Existía un propósito central: suministrar los estímulos necesarios para reactivar la producción y elevar el empleo, produciendo una resignación preferencial del consumo en favor de los sectores de menores ingresos. Esta redistribución, operada a través de una subpolítica de precios y salarios, debía apoyarse en otra de gasto público, centrada simultáneamente en la provisión de servicios sociales y en la realización de inversiones indispensables para sostener el dinamismo del crecimiento, una vez agotada la fase de reactivación.

Ello planteaba, de partida, algunos problemas derivados de la necesidad de compatibilizar los objetivos principales de la política económica, con la situación concreta en cuyo marco debía desarrollarse. Éstos eran, en general, los problemas técnicos clásicos de consistencia y factibilidad, presentes en la ejecución de toda política reactivadora de corte keynesiano en una economía subdesarrollada, con severas limitaciones estructurales y con enormes rigideces en el sector externo. Esta situación estaba dramáticamente agudizada por el peso de una enorme deuda externa, cuyo servicio obligaba a prescindir de una proporción importante de los recursos en divisas -aproximadamente el 40%.

Vistas desde este ángulo, las exigencias metodológicas de coherencia y viabilidad de la política económica no se diferenciaban en abstracto de las planteadas por los esquemas aplicados en el pasado, a no ser por la extraordinaria gravedad de las restricciones heredadas. Esto, sin embargo, no pasaba de ser una apariencia engañosa, toda vez que la coherencia y la viabilidad técnica -requisitos insoslayables de cualquier política económica- debían ser evaluadas y realizadas no en condiciones institucionales y políticas normales, sino en el decurso de un proceso de trasformaciones masivas, encaminado explícitamente a destruir el asiento material del poder de la gran burguesía y de las multinacionales extranjeras. El movimiento popular, a diferencia de los movimientos reformistas latinoamericanos, no conquistaba el gobierno para administrar la economía y realizar cambios limitados, manteniendo como criterio central la protección de los intereses estratégicos del sistema de dominación burgués imperialista. Por el contrario, el objetivo histórico -

responsablemente asumido- era realizar una política destinada a sustituir este sistema.

Pero las diferencias no se agotaban allí. La compatibilización entre objetivo y medios conllevaba una opción metodológica ajena a toda rutina convencional, cual era la de prever con algún grado de realismo el comportamiento de los diversos agentes sociales y económicos en un proceso de cambios revolucionarios.

Éstos eran sólo algunos de los problemas a considerar en el diseño de la política a corto plazo. Tal diseño planteaba una interrogante no sólo nueva sino fundamental, a saber: ¿Cuál era la ligazón entre la política de corto plazo y la política de trasformaciones estructurales?

En el patrón de crecimiento inherente al desarrollo capitalista dependiente la prioridad absoluta corresponde a la política económica coyuntural. Las previsiones y decisiones estratégicas tienen un carácter accesorio, correctivo, supeditado esencialmente a la dinámica autónoma de la concentración monopólica dependiente. Por otra parte, en el patrón de crecimiento empleado en la construcción del socialismo en su versión clásica, la prioridad absoluta corresponde a la política económica estratégica, dentro de la cual la política coyuntural es a su vez consecuencia e instrumento. Sin embargo, se mantiene la interrogante: ¿Cuál es la relación entre ambos aspectos de la política económica general, en una situación de transición simultánea en lo económico-estructural y en lo político?

Ésta es una cuestión imposible de eludir. Pero su formulación abstracta no tiene sentido lógico si no se la expresa con referencia a la situación concreta de transición. Sólo la precisión de su contenido, de sus momentos y mecanismos esenciales, de su estrategia política general, pueden conferir pertinencia a la interrogante planteada.

A nuestro juicio, la respuesta debe expresarse en los siguientes términos: la política económica de corto plazo debía guardar coherencia con la política de trasformaciones estructurales. Ambas estaban obligadas a constituir momentos específicos -pero indisolubles- de un mecanismo central de implementación de la estrategia de poder. Dicho de otro modo, la política coyuntural debía coadyuvar a la realización exitosa de la política de trasformaciones, esto es, a la consolidación dinámica de un área de propiedad social dominante, la cual tenía -a su vez- la más alta prioridad, en función de su inserción en la línea estratégica general. Esto planteaba una serie de cuestiones difíciles de sistematizar en el contexto de este ensayo. En primer lugar, aceptada la existencia de una cierta determinación principal que va de la política de trasformaciones a la política económica de corto plazo, nos preguntamos: ¿es ésta una determinación absoluta? ¿Hay algún grado de determinación inversa?

Para responder a ello es necesario considerar el carácter general, no sólo económico sino político, de la fase del proceso inmediatamente posterior a la toma de posesión del gobierno. Tal consideración nos lleva a concluir que la política económica de corto plazo ejercía inevitablemente una determinación mediatizada sobre la política de trasformaciones. Aquélla debía reactivar el sistema económico y mejorar las condiciones de vida de amplios sectores, no sólo por razones de justicia social, sino por la urgencia de consolidar un gobierno revolucionario surgido bajo los signos inequívocos de la conspiración reaccionario-imperialista y legitimado por una precaria mayoría relativa en las elecciones de 1970.

Del dinamismo de la reactivación y de los beneficios reales experimentados por los sectores a los cuales estaba dirigida, dependía en parte esa legitimación y su consagración ulterior en el acto eleccionario de abril de 1971.

La mencionada determinación mediatizada entre política económica de corto plazo y política de trasformaciones obligaba a tener presente los siguientes aspectos:
a) Dada la definición de clase y la hegemonía marxista-leninista de la coalición gobernante, así como el conocimiento difundido de sus objetivos estratégicos, la política económica inmediata no podía ignorar -no obstante la aparente normalidad del marco político inicial la potencialidad del conflicto. Ello exigía una minuciosa ponderación y selectividad, tanto en la distribución del ingreso como en la intensidad de la reactivación, para conciliar así los objetivos políticos con los objetivos económicos.

b) el carácter limitado del plan de corto plazo y su influencia en la implementación de la política de trasformaciones, imponía no sólo determinar su intensidad, sino también su secuencia. Toda política de reactivación tiene un término, a partir del cual surge la necesidad ineludible de un cambio cualitativo y de una reformulación de medios y objetivos. Además, dicho cambio debía establecerse en el marco de un estrecho sincronismo entre la política coyuntural y la de trasformaciones, a fin de reducir las distorsiones y desequilibrios derivados del inevitable boicot de la burguesía y del imperialismo.

c) La necesidad de compatibilizar en una fase inicial el ahorro y la redistribución. Éste es un aspecto esencialmente político. Si se desea acelerar la redistribución y aumentar la tasa de ahorro, deberá afectarse forzosamente el consumo de los sectores de altos ingresos. Este problema no asume mayor dificultad en aquellas experiencias que se elaboran a partir de la conquista del poder. En un proceso de trasformación por una vía institucional, el conflicto entre ahorro y consumo, entre nivelación y concentración de ingresos, se hace extremadamente complejo. En cualquier caso, el margen redistributivo en el corto plazo es limitado.

Sin desconocer la existencia de estos problemas, parecen quedar en pie los siguientes hechos

La política económica coyuntural cumplió sus objetivos desde la perspectiva en que fue concebida. Sin embargo, en el desarrollo ulterior de los acontecimientos, tuvo como efecto el agotamiento prematuro de los márgenes de libertad, reales y financieros, del sistema económico. En esta forma se generaron notorias rigideces en el diseño de la política económica en las siguientes etapas.

En parte, ello se debía a que el esquema de reactivación suponía que la oferta debía ajustarse elásticamente al incremento sustancial de la demanda, provocada por la redistribución. Los sucesos posteriores demostraron la fragilidad de este supuesto. En la realidad, estimuló aún más las actitudes economicistas y reivindicativas, ya profundamente enraizadas en los sectores asalariados. En particular, no ponderó el hecho de que una vez mejorados los niveles de consumo de esos sectores quedaba planteado, irremisiblemente, el problema de su mantención posterior. Éste sólo podía, en definitiva, sustentarse en el crecimiento futuro de la producción, y aun bajo este supuesto, en una restricción del consumo de las clases no asalariadas. Sólo por esta vía era posible liberar capacidad para importar, financiar las inversiones destinadas a corregir desequilibrios sectoriales y hacer frente a las desarticulaciones asociadas a toda política de trasformación. Sin em-bargo, limitar los patrones de consumo de la burguesía y de las franjas más privilegiadas de la clase media, no era en modo alguno sencillo. Por décadas, la inflación y la inversión extranjera habían venido financiando los elevados niveles de consumo de aquellos sectores. Importantes segmentos de las capas medias disponían de un alto poder negociador, a la par que de una significativa influencia política, que les permitía proteger su participación en la distribución del ingreso.

Pero esto no es todo. Nos parece además necesario subrayar el hecho de que el ensayo de reactivación implementado no estuvo acompañado de una apreciación objetiva de la situación general de la economía en el plano externo.

En definitiva, los aumentos de ingresos de las clases asalariadas, no debían traducirse en una simple imitación de los viejos patrones de consumo de las clases medias. Era indispensable remodelar la estructura del consumo global, en el sentido de modificar la participación en los mismos, del consumo individual y colectivo, de los diversos sectores y capas sociales.

Está claro que la política de redistribución globalmente fue correcta, pero fue específicamente errónea en la forma e intensidad con que fue aplicada. Era indispensable redistribuir, pero a la vez, era urgente adoptar las medidas necesarias para evitar una expansión indiscriminada del consumo. Lo que demuestra la experiencia chilena, es que una expansión incontrolada provoca serias limitaciones y violentos desajustes.

Una política correcta debía considerar esta circunstancia, las dificultades inherentes a la restricción del gasto de los grupos de mayores ingresos, y las perturbaciones en el funcionamiento de la economía a corto plazo, provocada por el agotamiento de la capacidad productiva ociosa.

En otro plano, un programa de redistribución del ingreso debía proyectarse «selectivamente» sobre grupos específicos de la población (los más pobres), y no sólo sobre los sectores organizados, con trabajo estable e integrados al mercado. En general, las políticas de distribución convencionales se han basado en una ponderación global de los trabajadores, ignorando sus diferenciaciones internas. Una redistribución adecuada a la problemática de la transición, debía forzosamente materializarse, precisando los grupos sociales prioritarios y los bienes y servicios cuya producción debía expandirse.

De lo anterior, se infiere, que en una fase inicial, el proceso redistributivo debía realizarse al margen del mercado, recurriéndose a mecanismos que evitaran que la mayor demanda se revirtiera sobre el mercado tradicional. En esta perspectiva, el esfuerzo por mejorar las condiciones de vida, debía intentarse a través de una expansión importante de los servicios; de un sistema de distribución directa, y finalmente, el ineludible problema del racionamiento de ciertos productos.

En otro orden de ideas, no compartimos las conclusiones orientadas a demostrar que la experiencia económica de la UP confirma la posibilidad de «nacionalizar determinadas actividades decisivas, aislando al gran capital monopólico nacional y supranacional, sin que ello paralice ni perturbe al resto de la economía», dejando manifiesto que «las trasformaciones estructurales no implican necesariamente un deterioro de la producción, sino que, a la inversa, pueden determinar su inmediato auge».

Esta afirmación reclama algunas precisiones. Desde luego, ella estuvo fuera del contexto real de los acontecimientos. Efectivamente, la experiencia chilena da pie para negar la afirmación según la cual, en la fase inmediatamente posterior a la instauración de un gobierno revolucionario, los índices globales y sectoriales deban forzosamente sufrir un deterioro. Pero de allí a invocar el caso chileno como una posibilidad de causación positiva entre las trasformaciones estructurales masivas y el «inmediato auge» de la producción, hay una enorme distancia. De hecho, el incremento de la producción, se produjo precisamente en la fase de iniciación de las trasformaciones, cuando el clima político era aún relativamente favorable, y no se expresaba en toda su magnitud el peso del cerco imperialista, ni se agudizaba la ofensiva reaccionaria inducida por la política de trasformaciones, en su fase más álgida.

A nuestro juicio la experiencia chilena demuestra todo lo contrario: la imposibilidad de estatizar actividades estratégicas, tratando de aislar a los enemigos principales, sin enfrentar una situación que inevitablemente conduce, si no a la paralización, al menos a gravísimas perturbaciones en todo el sistema económico y financiero.

Las afirmaciones que cuestionamos, descansan a nuestro juicio, en una falsa abstracción. Las trasformaciones básicas, aún en la etapa inicial, estaban inscritas en la estrategia de poder de una coalición homogenizada por un bloque de partidos proletarios. En consecuencia, una reacción vigorosa de las fuerzas destinadas a ser destruidas, como poder económico y sistema de dominación, no sólo era previsible, sino insoslayable.

Ignorar este aspecto medular equivale a falsear las implicancias reales de una acción transformadora. Ésta tiene una enorme complejidad, más aún, cuando se da en un contexto en que el adversario de clase actúa libre e impunemente. Todo se orienta a crear gravísimos desajustes en la economía: El cambio de la propiedad de los medios de producción y la creciente organización de los trabajadores, se traduce en nuevos y mayores conflictos políticos; la redistribución

del ingreso y la alteración de la estructura de producción, alteran la normalidad del mercado; se desarticula la producción agrícola; surgen fuertes desequilibrios entre oferta y demanda, expresados como elementos estimulantes del mercado negro, el acaparamiento y la inflación.

Además, tal razonamiento tiene otras connotaciones, no menos desorientadoras con relación a la desestabilización económica, instrumentada tácticamente, por el imperialismo, como arma contrarrevolucionaria.

Se argumenta que el éxito de los planes desestabilizadores no era inevitable. Por cierto esta proposición no tiene contenido real, si no se la fundamenta en un análisis concreto de las circunstancias y factores objetivos que la hicieron posible. Una reflexión más cuidadosa debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

La «desestabilización» -entendida como el esfuerzo deliberado del adversario orientado a quebrar la economía-, debe constituir una referencia obligada en el diseño e implementación de un proyecto de trasformaciones revolucionarias. Ni el bloqueo financiero ni la faena de diversión económica pueden ser factores de sorpresa para la vanguardia revolucionaria. A ésta corresponde la tarea de impedir o reducir las posibilidades de crear condiciones favorables para su desarrollo. En último término, todo esfuerzo de trasformación implica enfrentar la resuelta oposición de EU. El caso chileno, ha puesto en evidencia que tanto las grandes corporaciones multinacionales, el aparato militar y las estructuras de inteligencia, como el gobierno de EU, visualizan en cualquier intento de cambio un peligro para «su seguridad nacional», dicho en otros términos, para sus intereses económicos y su voluntad continental hegemónica.

Sin embargo, la «desestabilización» no puede ser restringida ni explicada por la sola voluntad de los enemigos fundamentales. Diferentes factores coadyuvan o dificultan su ejecución. Ella tiene lugar en un contexto histórico-estructural que conlleva en sí un enorme potencial «desestabilizador» para la realización de cualquier proyecto revolucionario.

Hemos esbozado anteriormente algunas contradicciones de la política a corto plazo. Nos parece importante insistir en otras consideraciones.

A nuestro juicio, siendo justa la opción reactivadora, ella debió ir acompañada de un empeño por regular la expansión del consumo, para no comprometer las potencialidades de crecimiento futuro, en las cuales dicha expansión debía descansar para hacerse permanente. En otros términos, aun cuando la elevación del, consumo -especialmente del consumo asalariado- era condición importante para el éxito económico y político de la coyuntura a corto plazo, también era imprescindible desplegar simultáneamente un esfuerzo de acumulación que permitiese enfrentar las exigencias futuras.

El análisis retrospectivo demuestra cómo la política económica superó con creces y prematuramente las metas redistributivas. En tanto el crecimiento del producto en 1971 fue de un 8.3%, el consumo privado aumentó en un 15% y el público en un 10%. Por otra parte, la mantención del nivel de inversión hubiese requerido un sustancial financiamiento externo. Éste -que en 1970 representaba un 46% de la inversión geográfica bruta- pasó a ser negativo. A su vez, el sector privado canalizó las inmensas utilidades derivadas de la reactivación hacia el consumo suntuario y la especulación. Finalmente, el sector público en razón de los bajos precios de los bienes producidos por él -uno de los mecanismos de la contención inflacionaria- y en grado significativo, por la obstrucción parlamentaria opositora, fue incapaz de compensar la caída del ahorro privado y de los créditos e inversiones externos. El resultado final fue la disminución de la inversión interna en un 7.7%.

Esta debilidad del proceso de acumulación impidió más tarde reducir la brecha entre demanda y oferta agregada, provocada por la expansión desmedida del consumo y la disminución de la capacidad para importar. Todo ello convergió en la aceleración del fenómeno inflacionario.

Según el esquema antinflacionario, ésta debía reducirse en una primera etapa, para luego extinguirse como consecuencia de los efectos que las trasformaciones estructurales producirían en la gradual eliminación de los desequilibrios causantes del fenómeno.

La Reforma Agraria debería permitir un incremento de la producción agropecuaria y disminuir la presión de ésta sobre las importaciones. De hecho, si bien ella, en 1971, experimentó un crecimiento considerable -en comparación con los índices históricos- descendió a un 1.6% en 1972. La oferta interna de alimentos subió en el bienio en un 6.7%, mientras la demanda -simultáneamente- experimentó una expansión cuatro veces superior (27.1%) como resultado del notable incremento de los salarios reales. Este desequilibrio se reflejó en el balance externo en un notable aumento en el porcentaje de las importaciones de alimentos (11.7% en 1965-1970; 33.1% en 1972). Este guarismo también comprende el aumento de los precios internacionales de los alimentos. El quantum de dichas importaciones se elevó en un 115% entre 1970 y 1972.

En esta forma, el sector agrario restó flexibilidad al sistema, contribuyó a agravar el déficit de la balanza comercial e incentivó las presiones inflacionarias. Por otra parte, absorbió importantes excedentes de otros sectores de la economía, tanto por la vía de la disminución de su tributación, como por la del aumento de subsidios fiscales y de reajustes de precios de bienes agropecuarios esenciales. Todo ello incide en el agravamiento del déficit fiscal y confiere mayor dinamismo a la espiral precios-salarios.

Como resultado de la reactivación económica, de la redistribución excesiva del ingreso, del descenso del valor de las exportaciones, del incremento de las importaciones, de las ingentes divisas absorbidas por el pago de la deuda externa, y de la suspensión de los créditos externos de corto plazo, no fue posible corregir la tendencia histórica al desequilibrio estructural de la balanza de pagos. Así, las posibilidades de rectificar el desfase creciente entre oferta y

demanda global, como de financiar el desarrollo futuro, quedaron supeditadas en grado crítico a la eventualidad de concertar nuevos y mayores créditos externos, lo cual no fue posible.

Por su parte, la política antinflacionaria careció de coherencia con el objetivo central de la política de trasformaciones, esto es, crear un área de propiedad social dominante capaz de desatar una fuerte dinámica de crecimiento, captación y movilización de excedentes para sostener la reproducción ampliada. Dado que la política de precios estuvo concebida sobre la base de un criterio eminentemente redistributivo y en función de un objetivo de contención inflacionaria, ella terminó subsidiando las tasas de ganancia del sector privado y de un nivel de consumo, incapaz de sostener la economía nacional. El resultado fue precisamente contrario al definido en el programa: el área de propiedad social, en déficit creciente, lejos de constituirse en el sector líder de la acumulación, se trasformó en factor importante del déficit fiscal y la consiguiente aceleración inflacionaria.

Además las tensiones inflacionarias se vieron estimuladas por la agravación de desequilibrios básicos producida por la política transformadora.

Por otra parte, al expropiar industrias monopólicas y estratégicas de ramas intermedias y el sector bancario, sólo se coartó las posibilidades de disposición de recursos de la burguesía en una parte de la base productiva. Pero al no cortarle la retirada a través del establecimiento del control obrero en las ramas productoras de bienes finales y del control estatal y social de los circuitos de distribución, se le ofreció una preciosa oportunidad de conservar su capacidad de captación de excedentes, de reproducir los que la propia política económica ponía a su disposición -a través de actividades económicas ilegales y de rehacer un poder económico sobre el cual sustentar su resistencia de clase.

Vistos desde este ángulo, pareciera que los problemas económicos del Gobierno Popular debieran ser atribuidos fundamentalmente a errores de los equipos técnicos de la UP. Ni tanto ni tan poco.

Los errores cometidos fueron gruesos y visibles, pero mayores aún fueron los provenientes de una inadecuada percepción política de la inevitabilidad del conflicto interno y externo, provocado por la materialización de la línea económica central, y las dificultades crecientes que dicho conflicto impondría a la realización del programa de trasformaciones básicas y al funcionamiento de las estructuras modificadas.

La política de cambios estructurales estaba destinada -por su parte- a superar los obstáculos históricos al desarrollo y a crear las premisas institucionales para permitir una reorientación del patrón de crecimiento. Sus fallas de concepción y de implementación -unidas a la obstrucción del adversario- no permitieron cumplir las metas mencionadas. En la medida que los objetivos políticos estratégicos, destruir la base real de sustentación del bloque hegemónico y establecer los embriones de nuevas relaciones de gestión y de poder, tampoco pudieron lograrse, se produjo una causación recíproca negativa entre ambos aspectos.

En los pasajes anteriores hemos enfatizado el papel que jugaron las inconsistencias mutuas entre las políticas de corto plazo y la de trasformaciones. Nos ha parecido necesario hacerlo, por ser éste un elemento esencial para la cabal comprensión del proceso revolucionario y por constituir una omisión recurrente en gran parte de los análisis conocidos.

La línea argumentativa desarrollada no nos lleva a concluir que la derrota del movimiento popular tiene sus raíces en los errores e insuficiencias de la política económica. Tampoco compartimos la afirmación reiterada en orden a que las dificultades económicas hayan sido -en términos significativos- producto de fallas técnicas en la concepción y realización de la línea económica central. Esa afirmación distorsiona -desde una óptica tecnocrática y simplista- el carácter esencialmente complejo y dinámico de la interrelación vital que un proceso de trasformación revolucionaria genera en los planos económico y político y en toda la vida social, cuando no se tiene realmente el poder.

Hemos tratado de demostrar como el proceso revolucionario, en las condiciones concretas de Chile, planteaba múltiples exigencias, muchas de ellas incompatibles. Fundamentalmente esta contradicción se expresaba en el propósito de modificar sustancialmente las estructuras socioeconómicas de la dependencia, preservando la estabilidad y continuidad democrática del país. Ello obligaba a un esfuerzo constante por asegurar una alta sincronización y consistencia entre las tareas de regulación y control económico y las de trasformación de las estructuras básicas. De otra parte, era menester mantener la unidad de acción entre el comando político (gobierno-partidos) con la base social, tanto en las tareas constructivas, como en la contención de las acciones contrarrevolucionarias.

La necesaria expansión de aquella base social en dirección de los sectores medios fue obstruida, en buena parte, por la desarticulación progresiva de las actividades económicas fundamentales, cuyo normal funcionamiento se constituyó en una suerte de test acerca de la legitimidad del gobierno. Hemos insistido, con deliberada majadería, en la incapacidad de la dirección revolucionaria para dimensionar correctamente el poder de hegemonización del bloque dominante sobre las capas medias -fundamentalmente no asalariadas y él potencial económico e institucional reservado por las condiciones singulares del proceso, a la burguesía.

El proceso condujo a una situación revolucionaria caracterizada por la simultaneidad de una aguda crisis institucional y una grave crisis económica, no debidamente contempladas en el diseño político estratégico de la UP. El preludio de dicha situación estuvo marcado por divergencias progresivas en el seno de las vanguardias, y por la pérdida de unidad de acción entre el gobierno y las masas, crecientemente radicalizadas. Las opciones planteadas en uno y otro ámbito carecían ya de realismo y viabilidad. La oportunidad de la consolidación institucional del proceso se había extinguido hacía tiempo. El «realismo» económico era ya irrelevante en el contexto eminentemente político y polarizado del conflicto, enmarcado por la violenta ofensiva burguesa imperialista.